Demanda de los representantes de Daniel David Tibi y sus familiares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Daniel David Tibi v. República del Ecuador

I. Aspectos generales

A. Antecedentes

1. Con fecha 25 de julio de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "la Comisión", "la Comisión Interamericana" o "la CIDH") presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "la Corte IDH", o "la Corte Interarnericana"), una demanda contra la República del Ecuador (en adelante, "el Estado ecuatoriano", o "el Estado") conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, "la Convención" o "la Convención Americana") como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de Daniel David Tibi (en adelante "la víctima").

2. En la demanda la Comisión Interamericana denuncia al Estado ecuatoriano por la violación de los derechos a la integridad personal (Art, 5), a la libertad y seguridad personales (Art. 7), a la propiedad (Art. 21), a las garantías del debido proceso (Art. 8), a la protección judicial (Art. 25), así como el incumplimiento de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención, en perjuicio del Sr. Tibi,

3. El Sr. Tibi es un ciudadano francés que vivía junto con la Sra. Bearrice Baruet', también de nacionalidad francesa, y las niñas Sarah Vachon y Jeanne Camila Vachon, hijas de la Sra. Baruer,[2] en la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, desde 1989. La pareja también tuvo una hija, Lisianne Tibi, que nació en Ecuador en la época de los hechos del presente caso. El Sr. Tibi también tenía un hijo radicado en Francia, Valerian Tibi, fruto de una relación anterior.

4. El 27 de septiembre de 1995, el Sr. Tibi fue detenido en el marco de un operativo policial. Al momento de su detención no se le comunicaron los cargos en su contra; solamente se le informó que se trataba de un control migratorio. Fue trasladado a Guayaquil, una ciudad distinta a la de su residencia. No contó con un abogado defensor en el primer mes de detención. Se vio sometido a una serie de condiciones

---

1 El Sr. Tibi no estaba casado con la Sra. Baruet, pero convivieron juntos desde el año de 1993 hasta septiembre de 1999. Por ello, a efectos de la presente demanda, nos referiremos a ella como "su esposa". Cabe aclarar también que en algunas partes del procedimiento interno, la Sra. Beatrice Baruet aparece como "Bearrice Vachon" esto se debe a que Vachon era el apellido del ex-esposo de Beatrice.

2 Sarah y Jeanne Carnila Vachon son hijas de la Sra. Beatrice Baruer, pero desde muy pequeñas vivieron con el Sr. Tibi y también fueron afectadas por las violaciones a los derechos humanos narradas en el presente caso. Por ello, a efectos de esta demanda, nos referiremos a ellas como "sus hijas".

carcelarias inhumanas, crueles y degradantes: estuvo recluido por 45 días en una celda sobrepoblada, durmió en el suelo por varias semanas, los servicios sanitarios eran totalmente inadecuados, fue maltratado por otros presos y nunca recibió atención médica,

5. Después de aproximadamente 6 meses de su detención, fue torturado en al menos siete ocasiones Lo ahogaron, quemaron *sus* piernas con cigarrillos y con metales al rojo vivo, lo golpearon con bates de baseball, lo insultaron y amenazaron de muerte a él y a su familia.

6. La tortura y la falta de atención médica provocaron que el Sr. Tibi no vuelva a tener un trabajo estable, no pueda realizar actividades físicas con normalidad y aún tiene flashbacks de los hechos, Su relación no sobrevivió y actualmente el Sr. Tibi vive separado de su esposa e hijas. Su hijo Valerian perdió toda la confianza en él y la imagen de su padre no es la misma desde entonces.

7. El proceso judicial en contra del Sr. Tibi fue lento y arbitrario. Las autoridades judiciales ecuatorianos desconocieron los plazos legales y no observaron las garantías que consagraba la propia legislación ecuatoriana. Los recursos que el Sr. Tibi presentó para contradecir su detención fueron ineficaces y no obtuvieron el resultado para el que estaban concebidos.

8. Al momento de la detención de! Sr. Tibi, la Sra. Baruet estaba embarazada, pero aún así, tuvo que viajar varias veces a la ciudad de Guayaquil, lugar en donde estaba recluido e! Sr. Tibi, para visitarlo. La Sra. Bamet estuvo encargada de los trámites relacionados con la defensa de su esposo, le compraba comida y fue testigo de las lesiones que sufrió. situaciones que le hacían temer por la vida del mismo.

9. La detención y encarcelamiento del Sr. Tibi también tuvo graves consecuencias para sus hiJOS. La pareja tuvo que enviar a la mayor de las niñas, Sarah, de 12 años de edad, a Francia, en donde permaneció cerca de dos años sin ver a sus padres. La segunda de las niñas, Jeanne Camila, de 6 años de edad, presenció las pésimas condiciones en las que se encontraba detenido el Sr. Tibi, Además no recibió las atenciones que hubiese recibido si su madre no hubiese tenido que trabajar por las mañanas y encargarse de los trámites del Sr. Tibi por la tarde y noche. La menor de las niñas, Lisianne, nació cuando el Sr. Tibi estaba preso y, por ende, no contó con su padre en sus primeros dos años de vida. Finalmente, el niño Valerian, de 11 años ele «dad, hijo del Sr. Tibi, no pudo visitar a su padre en los dos años en que estuvo preso y rompió todo lazo afectivo con él.

10. Por último. todos los bienes que el Sr. Tibi tenía a la hora de su detención fueron incautados por la policía y hasta la fecha no le han sido devueltos, pese a que existe una orden Judicial que así lo ordena.

B. Objeto

11. El objeto de esta demanda es obtener una determinación de responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del Sr, Tibi y su familia y obtener una reparación integral por las violaciones sufridas. En este sentido, la demanda busca obtener garantías de no repetición. pues consideramos que este caso es una pequeña muestra de lo que han sufrido muchos ecuatorianos privados ilegalmente de su libertad y sometidos a torturas y malos tratos en los centros carcelarios del país. Por tanto, y con el fin de que hechos tan lamentables no vuelvan a suceder, los representantes de la víctima y sus familiares incluiremos solicitudes que sirvan para garantizar la no repetición de los hechos y que incluyan, entre otras, la difusión de un video, la debida tipificación del delito de tortura, la modificación de la legislación interna con el objeto de que únicamente las diligencias y testimonios rendidos ante un juez sean válidas en el proceso, la promulgación de una legislación tendiente a reparar a las víctimas de tortura, la capacitación a funcionarios judiciales, policiales y penitenciarios y la adecuación de las condiciones carcelarias a los estándares internacionales. Por otro lado, la presente demanda busca que el Estado ecuatoriano investigue los hechos de tortura narrados en el presente caso y sancione a los responsables.

12. Pur tanto, esta demanda aporta los argumentos, pruebas y solicitudes de la víctima y sus familiares en relación con la violación de los derechos consagrados en la Convención Americana y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura,

13. Los representante; de la víctima y sus familiares coincidimos, en general, con los planteamientos realizados por la Ilustre Comisión en su demanda, Por lo tanto, nos remitimos a ellos y nos adherimos a las conclusiones allí vertidas, así como a las solicitudes que se realizan a esta Honorable Corte, En específico, solicitaremos a la Honorable Corte Inreramericana que concluya y declare que:

a. El Estado ecuatoriano violó el Art, 5 de la Convención Americana y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención lnterarnericana para Prevenir y Sancionar la Tortura por las sesiones de tortura que agentes del Estado ecuatoriano cometieron en contra del Sr. Tibi, causándole serios daños que hasta la fecha perduran y la falta de investigación y sanción de los mismos
b. El estado ecuatoriano violó el Art. 5 de la Convención Americana por las misérrimas condiciones carcelarias que sufrió el Sr. Tibi mientras estuvo recluido
c. El Estado ecuatoriano violó el Art, 5.4 de la Convencíón Americana por la falta de separación del Sr. Tibi, en su calidad de procesado, de los condenados, y la falta de un tratamiento adecuado por su calidad de tal.
d. El Estado ecuatoriano violó el Art, 7 de la Convención Americana porque la detención que sufrió el Sr. Tibi fue ilegal y arbitraria; porque el Sr. Tibi no fue informado de las razones de su detención y no fue notificado de los cargos

formulados en su contra; porque no fue llevado sin demora ante un juez, y porque no fue puesto en libertad en un plazo razonable.

e. El Estado ecuatoriano violó el Art, 17 de la Convención Americana porque no protegió adecuadamente a la familia del Sr. Tibi

f. El Estado ecuatoriano violó el Art, 21 de la Convención Americana porque no ha devuelto los bienes confiscados al Sr. Tibi, pese a que existe una orden judicial que así lo dispone.

g. El Estado violo los artículos 8 y 25 de la Convención Americana porque no ofreció las garantías judiciales mínimas al Sr. Tibi, ni le otorgó la protección judicial a la que tenía derecho.

h. El Estado ecuatoriano violó los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana porque no ha cumplido su deber de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en ella y no ha adoptado las medidas legislativas o de otro carácter tendientes a hacerlos efectivos

i, Finalmente, el Estado es responsable de la violación del derecho a la integridad psíquica ji moral de la esposa, hijas e hijo de! Sr. Tibi por e! severo sufrimiento que padecieron.

14. Con base a estas conclusiones. nos sumamos a la solicitud de la Ilustre Comisión- y pedimos a la Honorable Corte que ordene al Estado ecuatoriano lo siguiente:

u. Que lleve a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva a fin de identificar, procesar y sancionar a los agentes del Estado responsables de las torturas del Sr. Tibi ocurridas entre los meses de marzo y abril de 1996 en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de la ciudad de Guayaquil.

b. Que tome las medidas necesarias para evitar que hechos como e! presente no se vuelan a repetir en el Ecuador. En especial, que se adecué la legislación interna a la Convención Americana y a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, se promulgue una legislación tendiente a reparar a víctimas de xortura, se adopten las medidas necesarias para dar efecto al recurso de amparo de libertad; se moelifique la legislación interna a fin ele que únicamente sean válidas las diligencias y testimonios rendidos ante un juez; se adopten medidas necesarias para que las condiciones carcelarias del Ecuador se adecuen a los estándares internacionales; y, se adopten las medidas necesarias a fin de que se haga efectivo el derecho de notificación consular.

c. Que reconozca públicamente las violaciones cometidas como medida de satisfacción y no repetición de los hechos violatorios a través de las siguientes acciones: 1. el otorgamiento de disculpas públicas por lo hechos que dieron origen al presente caso; 2. la publicación de la sentencia que, en su momento,

---

[3] Dern.uula de la Comisión Inreramoricana de Derechos Humanos, (en adelante "Demanda de la Comisión") presentada el 25 de julio de 2003, págs. 2 Y3.

emita la Honorable Corte; 3. la difusión de un video como garantía que hechos tan larnentables no volverán a repetirse.

d. Que adopte las medidas necesarias para que Daniel David Tibi y sus familiares reciban una adecuada y oportuna reparación que contemple una plena satisfacción por las violaciones de los derechos humanos alegados en esta demanda, así como el pago de una justa indemnización compensatoria por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el daño inmaterial. Además el Estado debe otorgar un valor equivalente por los bienes incautados al Sr. Tibi que hasta la fecha no le han sido devueltos.

e. Que financie un tratamiento psicológico para el Sr. Tibi y su familia que se prolongue durante el tiempo que sea necesario para la recuperación de las víctùnas.

f. Que resarza los gastos y costas en que haya incurrido la familia Tibi, así como sus representante:; en el ámbito interno y ante la 1. Comisión y la H. Corte.

C. Legitimación y notificaciones

15. De conformidad con los poderes enviados por la Comisión Interamericana a la H. Corte junto con la demanda presentada el 25 de julio de 2003. y de confonnidad con los poderes adjuntos a la presente demanda,'¡ el Sr. Tibi, la Sra. Baruet, sus hijas Sarah Vachon y Jeanne Camila Vachon, la hija de ambos, Lisianne Tibi, y el hijo del Sr. Tibi, Valerian Tibi, han consentido en ser representadas por la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Clínica DDHH-PUCE) y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

16. Ambas organizacicnes hemos designado como representante común a la Dra. Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

17. En cuanto a las notificaciones relacionadas con este caso, solicitamos, de manera atenta, a la Honorable Corte, que éstas se dirijan a la siguiente dirección:

[redacted]

---

4 l'oder de Daniel Tibi, Lisianne Tibi, Valerian Tibi, jeanne Camila Vachon y Sarah Vachon a nombre de Viviana Krsricevic, .Juan Carlos Gutiérrez, Oswaldo Ruiz Chiriboga y Maria Clara Gladis, abogados de CEJIL y Farith Simon Campiña de la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad C,tólica del Ecuador. de fecha 2 de septiembre de 2003, y su traducción. Poder de Beatrice Baruer a nombre de Vivian.i Krsticevic, Juan Carlos Gutiérrez, Oswaldo Ruiz Chiriboga y María Clara Gladis, abogados de CEJIL y Farith Simon Campaña de la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de fecha 3 de octubre de 2003. Anexo 20

D. Respecto de la competencia de la Honorable Corte

18. El Estado ecuatoriano ratificó la Convención Americana el 28 de diciembre de 1977 y aceptó la jurisdicción contenciosa de la H. Corte el 24 de julio de 1984. De acuerdo con el Art. 62.3 de la Convención Americana, la Corte Interamericana es competente para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan la competencia de la Corte.

19. En cuanto a la Convención Interarnericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Estado ecuatoriano la firmó el 30 de mayo de 1986 y la ratificó el 9 de noviembre de 1999. Si bien, en el presente caso los hechos de tortura se dieron antes de la ratificación de la mencionada Convención. el Estado aún no investiga ni sanciona a los responsables de la tortura y malos tratos en contra del Sr. Tibi. Es decir, existe una total impunidad. entendida esta como *"la falta en su conjunto de investigación. persecución. captura. enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana*"[5], En este sentido. *"el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y susfamiliares*..[6]

20. Por todo lo anterior. los peticionarios consideramos que la Corte es competente para pronunciarse sobre todos los hechos alegados en el presente caso, violatorios de la Convención Interamencana para Prevenir y Sancionar la Tortura, pues constituyen violaciones continuadas y las autoridades han faltado a la obligación de llevar a cabo una investigación seria y exhaustiva de los hechos, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las torturas y malos tratos.

11. Fundamentos de Hecho

A. Contexto

21. El Sr. Tibi fue detenido en 1995 en el marco de la lucha antidrogas en el Ecuador, Esta política ha sido señalada como la causante de varias violaciones a los derechos humanos en el país," pues ha llevado a la detención ilegal y arbitraria de cientos de personas ya la posterior tortura de muchos de ellos. Además, por el elevado

---

[5] Corte IDH. Caso *Loayza Tamayo*, Sentencia de 27 de noviembre de 1998, Serie C No. 42, Párr. 170.

" Ibid, *Cfr.* Corte lDH. Caso *Paniagua Morales y Otro».* Sentencia de 8 de marzo de 1998, Serie C No 37 p.irr. 173.

[7] Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante "el Comité de Derechos Humanos de la ONU"), CCPR/C/84//l.dd.8, *Información adiaona! preseutadu por el Estado Parte: Ecuador.* 17 de diciembre de 1998 Anexo 26. Ver también, CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador, 1997; Informe de Ms. Corrine Brown, Congresswornan of the third Congressional District of Florida, *Plight of Ecuadorian prisoners* (House of Representatives), mayo 14 de 1997 Anexo 14. (en adelante "Informe de Iv[s. Brown").

número de detenidos, los procesos judiciales se han estancado y las cárceles ecuatorianas están sobrepobladas.

22. Fruto de la lucha antidrozas, en el año de 1992 fue introducida la Ley de Sustancias Psicorrópicas y Estupefacientes. Desde que se creó la ley, hasta el año de 1996, más de 15.000 personas (de una población total en el Ecuador de 12 millones de personas) fueron apresadas por la policía. Solo en el año 1996, 3.027 personas fueron encarceladas.[8]

23. Los arrestos se llevaban a cabo generalmente en operativos policiales y de forma masiva, en donde cientos de personas eran encarceladas sin suficientes pruebas en su contra.[9]

24. En 1997, la Comisión Interamericana publicó su informe sobre su vtsira a las cárceles ecuatorianas. Cabe resaltar que las visitó durante la misma época en que estuvo detenido el Sr. Tibi.[10] La Comisión verificó que el elevado número de detenidos en los operativos antidrogas es uno de los principales factores causantes de la sobrepoblación carcelaria en el Ecuador.[J1] Únicamente en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, lugar en donde estuvo encarcelado el Sr. Tibi, la Comisión resaltó que tenía una capacidad proyectada de 1.290 personas, pero estaba alojando 2.096 detenidos y durante la segunda mitad de 1994, se informó que estaba alojando a 2.600 internos.F Organizaciones locales contaron 2.700 presos en la prisión guayaquileña, de los cuales el *40°* o (1.000 personas) estaban recluidos por delitos relacionados con drogas.!'

---

[8] ANDRADE, Betty, *Situación Legal de los Presos en la Penitenaana de! Litoral.* Comité de Familiares de los Presos. Anexo 15, El consumo de drogas en el Ecuador se sancionaba con prisión de dos meses a dos años, la tenencia con penas de ocho a 12 años, yel tráfico con penas de 12 a 16 años. No obstante la línea entre tenencia y consumo era muy tenue. A la época del citado informe, 600 personas estaban encausas por cantidades mínimas *"ya veces POR UN CIGARRILLO!"* (pág. 2)

[9] El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó: *"las personas sospechosas de este delito .1011 detenidas Juntamente con otras, en operativos masivos, y la apertura de los juicios, asimismo, se hace colectivamente."* Comité de Derechos Humanos de la ONU, CCPR/C/84/Add.S, *Información adiaona! t.resemud« por el Estado Parte: Eaador.* 17 de diciembre de 1998, párr. 97. Anexo 26

[1°] La CIDJ-l emitió su informe sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador en el año de 1997, que comprende información recibida hasta el mes de septiembre de 1996. CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador, 1997, Capítulo 1, Anrecedenres.

[r:] La CIDH manifesró que un *"[actor significativo en el creciente lIIímero de detenidos es el al/melllo de arrestos por de'litas relacionados CDII drogas."* CIDI-!, Informe sobre la situación de los Derechos Hurnanos en el Ecuador, 1997, Capítulo 111, Derecho al recurso judicial y a la administración de justicia en el Ecuador.

[..] CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el Ecuador, 1997, Capítulo VI. La srruucion de los derechos humanos de las personas detenidas en el marco del sistema penitenciario.

[13] ANDRADE, Betty, *Situación Legal de tos Presos en la Peniteruiaria del Litoral.* Comité de Familiares de los Presos, p;íg. 1. Anexo 15, En este mismo informe se señala que el 60% de los detenidos por drogas son evenrualmcnre sobreseidos, pero luego de ? años de prisión. El Comité de Internos del Centro de

25. FI elevado número de detenidos produce una prolongación en las i.nvesti.gaciones policiales, que afectan el derecho de los sindicados a ser juzgados en un plazo razonable.[14]

26. Luego de los arrestos, muchas personas han sufrido torturas o malos tratos a manos de los agentes de policia, con el objeto de obligarlos a incriminarse o incriminar a otras personas."

Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil presentó citras que hablan del 41.66% de personas encarceladas por delitos relacionados con drogas. Anexo 16, pág. 3.

[14] La Comisión recibió información relativa :1 que la *"mavoria de los internos en detención preventiva tenían que esperar al menos dos años antes de qlle se produjera una decisión en Sil contra. La proporción de presos dentro del sistema que aún //o han sido acusados o sentenciados es más de las dos terceras partes de la población carcelaria."* CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el Ecuador,]l)'J7, Capitulo \1, La situación de los derechos humanos de las personas detenidas en el marco del sisterna pen‹tenc̄ran̄».

[15] CIDH. Informe sobre la s.ruación de los Derechos Humanos en el Ecuador, 1997, Capítulo V, Derecho :1 la integridad personal; Amnistía Internacional, Informe sobre Ecuador de 2003, Anexo No. 27; Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, E! *ocaso de la dignidad: la tortura en el Ecuador*, http://w\vw.dcrechos.org/inredh/doc/ocaso/indice.html. pág. 2 Capitulo Il1.6. Anexo 28; ANDRADE, Berry, *Situación Legal de los Presas en la Penitenaan« del Lsrora],* Comité de Familiares de los Presos, pág.!' Anexo 15. Específicamente respecto a las detenciones masivas que se realizan en los operativos policiales, la Comisión de Denuncias y Reclamos de Derechos Humanos del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil presentó las siguientes cifras de personas que alegan algún tipo de tortura:

Operativo Marfil, entre el 3 Yel 11 de junio de 1996, 7 personas denuncian torturas.
Operativo Hechiceros entre el 28 de febrero al 6 de marzo de 1996, 2 personas denuncian torturas.
Caso de los señores Medienta, 16 de septiembre de 1995, 2 personas denuncian torturas.
Operativo Valdivia, 22 de abril de 1996, ., personas denuncian torturas.
Operativo Tormenta Verde, entre el 10 y el 12 de agosto de 1995,1 persona denuncia tortura.
Operativo Tormenta Blanca, 20 de febrero de 1995, 1 persona denuncia tortura.
Operativo Victoria, 4 de febrero de 1994, 2 personas denuncian torturas.
Operativo Camarón, 18 de septiembre de 1995, 2 personas denuncian torturas.
Operativo Siete Rosas, 3n de abril de 1996, 3 personas denuncian torturas.
Operativo Bosque, 13 de septiembre de 1994, 2 personas denuncian torturas.
Operativo Norteñito, 1 persona denuncia tortura.

(Carta de Osear Uario Luján y Wilson Morales, Coordinadores de la Comisión de Denuncias y Reclamos de Derechos Humanos del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, dirigida a la Hna. Elsi Monge de la Comisión de Derechos Humanos, de fecha 28 de octubre de 1996 Anexo 171.

Ver también Carta de los Reclusos de Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil "Pcnirenciana del Litoral", dirigida al Dr. Fabi.in Alarcón, ex Presidente de la República del Ecuador, César Verduga, ex Ministro de Gobierno. Roberto Górnez, ex Gobernador del Guayas, José Ayala Laso, ex Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de fecha 25 de febrero de 1997 (Anexo 18.1); Carta de de Osear Dario Luj.in v Wilson Morales, Coordinadores de la Comisión de Denuncias y Reclamos de Derechos Humanos del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Cu.iyaqui], dirigida al Dr. Víctor Rodríguez Rescia, ex Secretario Adjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 1‹ de noviembre de 1996 (Anexo 18.2); Carta del Comité de Internos

27. Varias organizaciones internacionales y nacionales han denunciado la existencia en el Ecuador de una práctica de torturas que afecta principalmente a las personas detenidas y encarceladas, y se utiliza como medio de sanción y para forzar confesiones autoinculpatorias. La Comisión Interamericana señaló:

> *"Una de las áreas de mayor preocupacion para la C[DH 1'011 respecto a la situación de los derechos humanos en el Ecuador es el trato de los detenidos por la policía y las fuerzas de seguridad. Aunque existió una época en la 'lile las autoridades nacionales habían reconocido que la tortura era utilirada como método de represión política, informes indican que la tortura y e] maltrato son ahora aplicados principalmente en conexión con investigaciones penales. La Comisión ha recibido IIn número de informes que detallan tratos inhumanos y torturas de detenidos por parte de agenies públicos con el propósito de [orzar confesiones. Tales violaciones han sido denunciadas a lo largo de todo el país...*[16]

28. El Gobierno ecuatoriano *"reconoció que el uso de la tortura y los malos tratos por parte de la policía ha sido periódicamente identificado por parte de las autoridades nacionales como un problema, las cuales han adoptado algunas medidas como respuesta. "*[17]

29. El propio Estado adoptó un Plan Nacional de Derechos Humanos que tiene C01110 objetivo *"[llograr que los sistemas de detención, investigación y el penitenciario destierren las prácticas de torturas, maltratos físicos y morales como mecanismo de investigación y casngo'r.'»* No obstante. las estadísticas de las torturas en los centros de detención son alarmantes. La Comisión Interarnericana recibió información de organizaciones locales que mostraron que para los años 1992-1993 más del 50% o de la población carcelaria manifestó haber sido castigada con el propósito de forzar una declaración; en 1994 se denunciaron casos de tortura contra 82 internos, y en 1995 se alegaba que 63 personas habían sido sometidas a torturas.'? La Federación Internacional de los Derechos Humanos (en adelante "la FIDH"), recibió la angustiosa

---

Colombianos del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil dirigida al DI. Ernesto Samper Pizarro, ex Presidente de la República de Colombia, de fecha 4 de abril de 1997 (Anexo 18.3).

[16] CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador, 1997, Capítulo V, Derecho a la integridad personal. Amnistía Internacional en su más reciente informe sobre el país también dio cuent:l que *"[I]a tortura y 10,1' malos tratos a detenidos y presos siguieron practicándose de forma eeneralizada. Estas violaciones de derechos humanos se cometian en el momento de la detención, durante el traslado a una comisaría y en comisarías d« policía. centros de detención y prisiones."* Informe de Amnistía Internacional: Ecuador, 2003, http://\\".vw.derechos.net/cedhu/amnistia_06_17.htm Anexo No. 27. Se hace notar a la Corre que este informe es del año 2003, es decir, las torturas a los detenidos y presos no ha disminuido desde la época de los hechos del presente caso, antes bien, continúa siendo un parrón de violaciones a *los* derechos humanos.

[17] CIDH, Informe sobre la SItuación de los derechos humanos en Ecuador, 1997, Capítulo V, Derecho :1 la integridad personal.

[18] Plan Nacional de Derechos Humemos. Aprobado mediante decreto de! Sr. Presidente Fabián Aiarcón, publicado en e! Registro Oficial No. 346 de 24 de junio de 1998. Anexo 29.

[19] CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador, 1997, Capitulo V, Derecho a 1\ integridad personal.

cifra de 848 personas víctimas de tortura entre julio de 1995 Y junio de 1999 sólo en un centro carcelario.zn

30. Asimismo, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos." reveló una publicación que da cuenta que entre enero de 1996 hasta septiembre de 1997 se recibieron denuncias de 399 personas que fueron atendidas por tortura.P En cuanto al agresor, la Fundación refiere que en el 77.8% de los casos el torturador es un policía, en el 10%, un guía penitenciario; en el 8.8°0 un agente de policía vestido de civil; en el I%, militares; en el 0.3%, otros reos que ayudan a los guías penitenciarios en el control en las prisiones, conocidos comas "caporales"; y en el 2% se desconoce.>

31. En este sentido, la FIDE señalo que la tortura en el Ecuador *"no constituye un hecho aislado sino que tiene un proceso que a menudo* inicia *con una detención violenta y bruta! en el espaciojumiliar, comunal o público";* posteriormente continúa con *"unafase de ablandamiento, que incluye la utilización de métodos especificas de tortura";* y finalmente *"se extiende en muchos casos un certificado médico falso, en donde consta que*

---

[20] Federación Internacional de los Derechos Humanos, Misión Internacional de Observación, *Las cárceles en Eautdor.* junio de 2000, No. 293/3, pág. 14. Anexo 30. El uso de 1:\ tortura y los tratos inhumanos por parte del personal de seguridad y encargado de hacer cumplir la ley ha sido objeto de atencic',n y preocupación internacional. El Relator Especial de la ONU sobre tortura informó que durante I995, transmitió información sobre veinticuatro casos individuales al Gobierno del Ecuador, y una solicitud de acción urgente. (Repon of the Special Rapporreur, Mr. Nigel S. RoclJey, subrnitted pursuanr ro Commission on Human Rights Rcsolution 1995/37, E/CN.4/1996/35/Add.1, 16 january 1996, párr. 171-181.)

[21] La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos es un organismo no gubernamental, interdisciplinario y reconocido por el Ecuador desde septiembre de 1993. Sus dos lineas de acción son: la .isisrcncia legal en derechos humanos, que se lleva a cabo a través del Instituto Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH); y salud integran en derechos humanos, que se lleva a cabo a través del Centro de Estudios de Atención Integral a Víctimas de Violencia (CEAIV).

[22] Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, *El ocaso de la dignidad: la tortura en el Eatador.* ilttp:!/www.derechos.org/inredh/doc/ocaso/indice.html, pág. 2, Capitulo IIJ. 6. Anexo 28.

[23] Ibíd., pág. 11, Capítulo 1][. 6. Anexo 28. Entre las príncipales conclusiones de la Fundación «nrontramos que: "1. *La tortura en el Ecuador. desde el retomo a la democracia. se ha mantenido en forma constantr en los diversos gobiernos y las denuncias de casos de tortura se han incrementado en el tiempo. 2. La tortura es una institución en el Ecuador. en tanto se sustenta en un marco ideológico que establece formas de tortura (técnicas. utilización de instrumentos yfinrs¡ y se produce sistemáticamente,* 3. *La tortura es uno d« los mecanismos de control social utilizado por el Estado y tiene como objetivos: castigar. ejercer discriminación. obtener informacián ylo confesiones auioincuipatorias, amedrentar a la familia y a la sociedad ¡...J.* 6. *En los casos de tortura la regla es la impunidad lo cual esta dado por el fuero policial, la falta de denuncia de victimas y jueces. La no denuncia de las victimas se da por un desconocimiento de derechos, el miedo a las represalias, la falta de credibilidad en la administración de justicia. Todo ello expresa lafalta de voluntad política por parte del estado para erradicarla tortura.* 7. *Losjueces /10 invalidan las declaraciones autoinrulpatorias obtenidas por medio de la tortura.* 8. *Las victimas de tortura actualmente son básicamente sospechosos de haber cometido un delito, quienrs corresponden a grupos vulnerables por ser pobres. marginales y discriminados socialmente.* 9. *Los métodos de tortura mayormente utilizados 1'11 hombres son la violencia fisica* 1' *psicológica. registrándose 1'11 menor proporción la violencia sexual. En mujerrs y homosexuales se mantiene la violencia física y psicológica y la violencia sexual asume* !lila *proporción alta. lO. La mavor parte de casos de tortura sr dan en contextos de detención ilegal.* " (Ibídem. pag. 1-2, Capitulo IV.)

las víctimas no han sido sometidas a violencia, o se las obliga a firmar documentos declarando que no han sitio totturadosv"

32. La Comisión Interamericana también ha seguido esta línea de ideas cuando concluyó que

> *"La consistencia de las denuncias ,. informes que se refieren al l/SO de la tortura y los malos tratos como un método para forzar confesiones o como un medio de control o de represalia en contra de las persollas detenidas, indica que deben darse pasos adicionales. La informución puesta a disposición de la Comision sugiere ql/e un aspecto del problema es una aceptación institucionalizada entre algunos miembros de la fuerza pública respecto a que el maltrato a los detenidos constituye un método válido de investigación en casos penales. La información con que cuenta la Comisián demuestra además que el mensaje del respeto por los derechos humanos transmitido por los esfuerzos de capacitacion no está siendo apoyado suficientemente por medidas para investigar denuncias de tortura y malos tratos, y para procerar y sancionar a los responsables. La tortura y los tratos inhumanos deben ser enfrentados con una condena oficial)' con el mensaje uniforme de que tales conductas son criminales v serón sancionadas. "[25]*

33. Finalmente, los detenidos se ven envueltos en un proceso judicial lento y deben esperar alrededor de dos años para obtener una sentencia. En este sentido, una organización local ha observado que el sumario, etapa inicial del procedimiento, dura alrededor de 9.4 meses yel resto del juicio, hasta obtener una sentencia, 22.8 meses [26]

34. Como pasaremos a demostrar en los párrafos siguientes, los hechos del presente caso, se ajustan a este patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos. El Sr. Tibi fue arrestado en el marco de la lucha antidrogas, en un operativo policial que contó con varias personas detenidas. Todos los bienes que tenía consigo a la hora de su detención fueron decomisados y hasta la fecha no le han sido restituidos. El Sr. Tibi, sufrió condiciones carcelarias inhumanas: estuvo detenido en una celda sobrepoblada sin suficientes servicios higiénicos, durmió en el suelo, no tuvo una alimentación adecuada, y no recibió atención médica. El Sr. Tibi también fue víctima de torturas y malos tratos a manos de agentes del Estado. Finalmente, el proceso penal en su contra fue lento y no contó con las garantías básicas de un juicio justo, lo que produjo que el Sr. Tibi permaneciera detenido por más de 28 meses. Todo lo cual constituye una grave violación a los derechos consagrados en la Convención Americana, en perjuicio del Sr. Tibi y sus familiares.

B. La detención arbitraria de Daniel Tibi

35. El Sr. Tibi era un comerciante de piedras preciosas y arte ecuatoriano que se

---

[24] Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, *El ocaso de la digllidad: la tortura en el Eruador.* hrrp://www.derechos.org/inredh/doc/ocaso/indice.html, pág. 2, Capítulo III.6. Anexo 28.
[25] ClDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador, 1997, Conclusiones del Capitulo V, Derecho a la integridad personal.
[26] Comité de Internos del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, pág. 4, Anexo 16.

había radicado en el Ecuador desde 1989. No obstante, la historia del Sr. Tibi cambió radicalmente cuando se vio inmiscuido en el operativo "Camarón" realizado por la Policía ecuatoriana.

36. El Operativo "Camarón" fue un operativo que tuvo lugar en la provincia del Guayas, en donde la Policía el 18 de septiembre de 1995, en Ourán, dio con un congelador de 26 pies cúbicos, *"en cuyo interior estaban cuarenta y cinco cajas que contenían langostino congelado individual y en el interior de los crustáceos* [...] *se hallaban unas cápsulas de una sustancia que a la prueba de campo* [...] *respondia como clorhidrato de cocaína, en un total de mil quinientos noventa y dos cápsulas".*[27]

37. Dentro de este operativo, el 18 de septiembre de 1995 se procedió a la captura del ciudadano ecuatoriano Eduardo Edison García León.[28]

38. El Sr. García, en su declaración preprocesal de 23 de septiembre de 1995 señaló que *"un sujeto francés de nombre DANIEL* [...] *llegó a proveerme hasta 50 gramos, por dos o tres ocasiones".*[29]

39. Con este antecedente, el Subteniente de Policía, Carlos Blanco, mediante parte informativo elevado al Jefe Provincial de INTERPOL del Guayas, de fecha 26 de septiembre de 1995, señaló que *"mientras se realizaron las investigaciones dentro de la Operación Camarón desarrollado en [la ciudad de Guayaquil) se nombra a DANIEL la) "Francés". como proveedor de cloroludmto de cocaína para que se distribuya al minoreo en la ciudad de Quito"*, por lo que solicitó *"se alcance la orden de detención del sujeto DANIEL DAVll) TIBI".*[30] El mismo día, el Teniente Coronel Abrarram Correa Luachamín, Jefe de la INTERPOL del Guayas, solicitó al Abogado j\ngel Rubio Game, Juez Primero de lo Penal del Guayas, *"se digne ordenar la detención de DANIEL DAVID TIBI, para realizar las investigaciones respectivas".*[31]

40. La orden judicial de detención del Sr. Tibi fue emitida el 28 de septiembre de 1995. No obstante, los agentes de policía lo detuvieron un día antes, el 27 de septiembre de 1995, es decir, que los agentes aún no tenía la orclen detención en contra

---

r: Informe policial No. 278-JPEI.G.95, del Caso No. *-W9-]PEI.G.95,* de fecha 26 de septiembre de 1995, remitido al Jefe provincia! de Estupefacientes e lNTERPOL del Guayas, pág. 4. ANEXO 1lI, VOLUMEN lU3.!'.) DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN.

[28] Ibid., pág. 6.

[29] Declaración preprocesal de Eduardo García, de fecha 23 de septiembre de 1995 ante el Fiscal Séptimo de lo Penal del Guayas, pág. 5. ANEXO 1I1, VOLUMEN IU3.D) DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN.

[30] Parte informativo elevado al Jefe Provincial de lNTERPOL del Guayas, de fecha 26 de septiembre de 1<)95, por el Subteniente de Policía Carlos Blanco. Anexo 1

[31] Oficio No. 2408-JPEIG-95, de fecha 26 de septiembre de 1995 de la Jefatura Provincial de Estupefacientes e INTERPOL del Guayas. ANEXO lll, VOLUMEN II.13.B) DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN.

del Sr. Tibi.[32]

41. En efecto, e! 27 de septiembre de 1995, el Sr. Tibi fue arrestado por dos sujetos que se identificaron como agentes ele la INTERPOL. El arresto se produjo en la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, mientras la víctima se encontraba circulando en su vehículo entre las avenidas Amazonas y Eloy Alfaro.[33]

42. Al Sr. Tibi no se le comunicaron los cargos que pesaban en su contra, antes bien, se le mintió aduciendo que se trataba de un simple control migratorio.>' Tampoco se le notificó de su derecho a comunicarse con el Consulado de su país natal: Francia, ni se notificó al Consulado francés de la detención del Sr. Tibi.

43. Luego de ser arrestado, el Sr. Tibi fue trasladado a una oficina estatal de migración situada cerca del lugar de detención, en donde se da cuenta que el Sr. Tibi estaba legalmente en el país con una visa inmigrante de validez indefinida."

44. Al cabo de aproximadamente una hora, e! Sr. Tibi fue trasladado a la oficina de INTERPOL situada cerca de! Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito. En este lugar. los agentes de policía registra.ron sus pertenencias, entre las que se encontraban varias piedras preciosas, que fueron incautadas y hasta la fecha no han sido restituidas a su dueño."

45. Dos horas después del arresto, se le comunicó que debía ser llevado a la ciudad de Guayaquil. situada a aproximadamente 600 kilómetros de distancia de la ciudad de Quito, para que se entreviste con un juez de instrucción, por una simple formalidad, y que estaría de regreso en la capital a eso de las 18h:30 del mismo día. El Sr. Tibi no tuvo otra opción que acompañar a los agentes estatales, sin poder si quiera comunicarse con su familia o con algún abogado defensor.'?

---

[32] En el Parte informativo de fecha 27 de septiembre de 1995, se verificó que "*se procedió a la detención del ciudadano DANIEL DAVID TIBI, de nacionalidad francesa. dando cumplimiento a la orden de detención emitida por el Sr. Juez Primero de lo Penal del Guayas."* (Anexo 2). Esto es falso, la providencia que ordenó la detención del Sr. Tibi, fue dictada el 28 de septiembre de 1995. (Anexo 3) Y la bolera de detención en contra del Sr. Tibi fue girada en esa misma fecha. (Anexo 4).

[33] Ver declaración preprocesa! del Sr. Tibi, de fecha 28 de septiembre de 1995 en la que refiere: *"fui detenido el día de ayer mi/rcoles* 27 *de septiembre de* 1995 *a eso de las 15:45 horas en la* Al'. *Amazonas entre Mariana de Jesús y Eloy AI(aro",* pág. 1 del ANEXO III, VOLUMEN II.l3.C) DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN

[34] Demanda de la Comisión, pág. 8. En palabras de la víctima: *"me preguntaron por mi nombre y les dije 11/(' sí, que soy DANIEL DAVID TIBI, me dijeron que era un control migratorio y que alguien había puesto 1I/1II denuncia en mi contra. "* Declaración preprocesa] *del* Sr. Tibi, de fecha 28 de septiembre de 1995. pág. 1. ANEXO III, VOLUMEN IJ .13 C) DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN.

[35] Partes pertinentes del trámite de consecución de visa, y visa de inmigrante de validez indefinida, Anexo 5.

[36] J.as pertenencias del Sr. Tibi se encuentran detalladas en una lista oficial elaborada por la Policía ecuatoriana. ANEXO III, VOLUMEN II.2.G) DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN.

[37] Demanda de 1:1 Comisión, p.ig, 8.

46. En ese entonces la Sra. Beatrice Baruet, contaba con tres meses de embarazo. Cuando su esposo no regresó a casa por la noche del 27 de septiembre de 1995. llamó a todos sus conocidos, a los hospitales, a la Policía, pero nadie le daba razón, nadie sabía lo que había pasado. Después de pasar la noche sin dormir, decidió llamar a la Embajada de Francia para reportar la desaparición de su esposo.

47. Cuando el Sr. Tibi llegó a Guayaquil. los agentes de INTREPOL lo esposaron y a insultos lo llevaron al Cuartel Modelo. en donde fue encerrado en una celda hasta el siguiente día.

48. El 28 de septiembre de 1995. el Sr. Tibi fue llevado a presencia del Fiscal Oswaldo Valle Cevallos, ante quien rindió su declaración preprocesal. En la declaración estuvieron presentes, además del Fiscal. varios policías, pero no se contó con algún juez o con un abogado defensor." Los agentes de policía y el Fiscal preguntaron a! Sr. Tibi si conocia al resto de involucrados en el operativo "Camarón" que aparecían en las fotografías que en ese momento le presentaron. El Sr. Tibi, únicamente reconoció a Eduardo Edison García, quien, como 10 explicamos lineas arriba, había involucrado al Sr. Tibi en la venta de droga. El Sr. Tibi reconoció que se había encontrado en dos ocasiones con el Sr. García para negociar la exportación de articulos de cuero, pero el negocio no se concretó por desavenencia en el precio y calidad del producto. Este particular fue puesto en conocimiento del Fiscal y de los agentes de policía en ese mismo momento.'?

49. La única prueba en contra del Sr. Tibi, es decir, la declaración preprocesa! del Sr. García, fue desmentida meses después por el propio Sr. García, quien el 8 de diciembre de 1995, alegó que fue torturado por agentes de policía que 10 forzaron a autoinculparse e inculpar a otras personas. El Sr. García afirmó:

> *"La declaración en las oficinas de la interpol del Guayas la impugno, ya que fui torturado [isicamente y moralmente por parte de los agentes investigadores, que cuando estaba relatando la verdad de los hechos se interrumpia y se ponía en la misma lo que los agentes querían palier, por esta razon me amenazaban, me maltrataron ya que no quería firmar*

---

[38] Demanda de la Comisión, pág. 32.

„) El Sr. Tibi mencionó que conocía al Sr. García *"desde hace aproximadamente unos siete meses. a quien lo conocí por intermedio de la señorita MAR/BEL quien me presento porque ella sabía que yo buscaba para exportar chompas de cuero y me presento a este señor que supuestamente tenia una fábrica, pero no se concretó el negocio porque el precio 110 me resultaba conveniente. me ofreció en tres o cuatro veces tipos distintos de chompas de cuero, a distintos precios pero que no me convenían, no hice ningún negocio con él, en lodos las ocasiones él me visitaba en mi domicilio, yo no conozco el domicilio de él, nunca traté de ubicarle aunque me dio un número de teléfono qut' 10 tengo escrito en mi agenda. creo que lo llamé por una ocasión para tratar sobre el mismo negocio de chompas, sin poder precisar cuándo fue la última I'ez que contacté pero pueden ser 1111OS tres o cuatro meses que ya 110 he tenido contactos, yo estuve en Europa desde fines de junio hastafines de agosto concretamente 111 Francia para vocaciones escolares de /Ili señora que es profesora en el colegio La Condamine, y de mis dos hijos; y todos estos contactos fueron antes de /Ili viaje",* Declaración preprocesal del Sr. Tib, de fecha 28 de septiembre de 1995, pág. 2. ANEXO 111, VOLUMEN 11 .13.C) DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN.

dicha derlarocion. ["'/ *Yo nunca he comprado droga a nadie [...]*"[40]

50. El Sr. García, el 6 de marzo de 1996, vue1vió a declarar ante el Juez de instrucción que fue torturado por agentes de policía. El Sr. García manifestó:

> *"impugno en todas sus partes el informe de la interpol del Guayas* y *que consta en es/e injusto proceso penal. por estar /0/(/11111'11/1' apartado de la verdad* y *de la realidad procesal. ya que el mismo lo laboraron a su amojo. bajo presión física* y *moral, fui obligado a firmar la declaración extraprocrsal bajo amenazas sin ser responsable de IOdo lo que se indica el/ la nl/sma".*[41]

51. Lineas abajo el Sr García continúa:

> *..Yo nunca he comprado droga a nadie. ni tampoco he vendido a nadie de las personas que se les nombra. ron estas personas mantenia relaciones comerciales legales* [...}..[42]

52. Pese a que la única prueba en contra del Sr. Tibi fue obtenida mediante tortura, el Sr. Tibi continuó en prisión.

53. El viernes 29 de septiembre de 1995, dos días después de su detención arbitraria, el Sr. Tibi pudo llamar por teléfono a su esposa. Ese mismo día la Sra. Baruet se trasladó desde Quito al Cuartel Modelo de la ciudad de Guayaquil. Al llegar al Cuartel, se le dijo que no había ningún interno francés de nombre Daniel Tibi en las listas. La Sra. Baruet tuvo que recorrer todos los centros de detención de Guayaquil tratando infructuosamente de hallar a su esposo. Regresó a Quito desconociendo su paradero y temiendo por su suerte.f Paso siete días de pesadilla con sus dos niñas sin saber si estaba vivo o muerto.

54. La Sra. Baruet era miembro de la misión cultural de Francia por lo que tenía un buen contacto con las autoridades francesas. No obstante, cuando se enteró que el Sr. Tibi había sido arrestado, llamó al Consulado, pero le contestaron que no tenían poder para intervenir sobre la tusricia ecuatoriana.

55. El Consulado empezó a actuar después de abril de 1996, cuando el Sr. Tibi había sido torturado y cuando empezaron a hablar de su caso en la prensa francesa. Al principio lo fueron a visitar, le brindaron cierta atención médica por su mal estado de salud. Después, frente a la demora de la justicia ecuatoriana, el Embajador Laurent Rapin, en relación estrecha con el Gobierno francés, intervino ante la Corte Superior de Guayaquil, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano. También acudió ante la prensa.

---

40 Declaración procesal de Eduardo Edison Garcia de fecha 8 de diciembre de 1995, pág. 2. Anexo 6.
41 Declaración procesal de Eduardo Edison Garcia de 6 de marzo de 1996, pág. 1. Anexo 7
42 Ibid., pag. 2.
43 Narración de los hechos realizada por el Sr, Tibi, p;ig, 2. (ANEXO IlI, VOLUMEN 1.1, DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN)

56. Una semana después de la detención, la Sra. Baruet pudo contactarse con el Sr. Tibi y fue a visitarlo en compañia de un abogado particular. Dicho abogado solicitó al Sr. Tibi que le pagase la suma de quince mil dólares ($15.000,00) para asumir su defensa. pero el Sr. Tibi carecía del dinero suficiente *y* no pudo contratarlo. Fue hasta un mes después de su arresto que logró conseguir el patrocinio de un profesional.[44] En el ínterin, si bien el Estado nombró como defensor de oficio al Abogado losé Alejandro Chica,45 el Ab, Chica nunca se entrevistó con el Sr. Tibi y nunca presentó ningún escrito o recurso a su favor. Es decir, el papel del defensor de oficio fue ilusorio. Esto se debe a que en el Ecuador existen únicamente 12 defensores públicos para una población de alrededor de 12 millones de personas.[46]

57. El 4 de octubre de 1995, el Juez Primero de lo Penal del Guayas, Ángel Rubio Game, juez de instrucción del caso, emitió una orden de prisión preventiva en contra de Daniel Tibi dentro del proceso penal seguido en contra de los detenidos en el operativo "Cnmaróu"."

58. Al día siguiente. el 5 de octubre de 1995, el Sr. Tibi fue trasladado del Cuartel Modelo al Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, conocido como "Penitenciaría del Litoral".[47] [48]

C. Condicionas carcelarias que sufrió el Sr. Tibi

59. Durante los 28 meses que el Sr. Tibi estuvo detenido en la "Penitenciaría del Litoral" estuvo sometido a pésimas condicionas carcelarias. Las cárceles del Ecuador han sido señaladas como lugares inadecuados de reclusión, especialmente, por el grave hacinamiento que sufren los internos, la falta de servicios sanitarios, la carencia de atención médica y psicológica, la pobre alimentación que se provee, la falta de camas, sábanas y ropa, el escaso control a los internos, la violencia ínter-carcelaria y la corrupción de los guardias de seguridad[49]

---

[44] Demanda de la Comisión, pág. 9.

[45] Auto cabeza de proceso del Juzgado Primero de lo Penal del Guayas, en donde se designa como defensor de oficio al Abogadu José Alejandro Chica para 15 personas, entre las que se cuenta al Sr. Tibi. Ver ANEXO III. VOLUMEN IJ.13.F) DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN.

[46] Este es un problema que Ir propia Comisión Intcramericana comprobó cuando visitó el Ecuador en 1997. Ver CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador, 1997, Capitulo III Derecho al recurso [udicial y la administración de justicia en el Ecuador.

[47] Auto cabeza de proceso del Juzg.ldo Primero de lo Penal del Guayas, en donde se ordena la prisión preventiva del Sr. Tibi. ANEXO III. VOLUMEN JI. 13.F) DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN. Ese mismo día el Juzgadu Primero emitió la boleta de prisión preventiva. Ver ANEXO JI\. VOLUMEN I.2.I) DE LA DEMANDA DE LA COMISIONo

[48] Ver constancias del ingres') del Sr. Tibi al Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil. Anexo 19.

[49] Ver, Federación Internacional de los Derechos Humanos, Misión Internacional de Observación, *Las cárceles en Hruador.* junio de 2000, No. 293/3, pág. 15 Anexo 30. Ver también: César Duque Chasi, Raúl Naran]« Naranjo, Grimaneza Narváez Silva, Ramiro Rivadeneira Silva,

60. Las peores condiciones carcelarias que sufrió el Sr. Tibi se produjeron al inicio de su detención. En efecto, cuando el Sr. Tibi ingresó a la "Penitenciaría de/litoral" fue llevado a una celda conocida como "la cuarentena" en donde estaban recluidas alrededor de 100 personas en un espacio de 120m².

61. Los guardias le solicitaron dinero para dormir "con seguridad", pero el Sr. Tibi se negó a sobornarlos porque no tenía dinero y porque estaba convencido que iba a salir en libertad pronto porque no había cometido ningún delito. Por ello, tuvo que permanecer 45 días recluido en esa celda.[50]

62. Debido al hacinamiento ya la falta de separación de los reclusos, el Sr. Tibi tuvo peleas diarias con varios internos.>'

63. Durante esos 45 días permaneció encerrado las 24 horas del día. No se le proporcionaba alimento El Sr. Tibi tenía que pagar a otros internos para que le trajesen cornida.i"

64. Los baños de la "cuarentena" eran a la vez duchas y servicios sanitarios que alrededor de 100 personas usaban. Eso los convertía en lugares insanos y malolientes.

65. Por la noche, varios internos fumaban distintos tipos de sustancias, que sumadas a las emanaciones de los baños volvían al aire irrespirable.

66. En esta celda, gracias al abogado de otro inculpado en el operativo "Camarón", el Sr. Tibi se llegó a enterar de los cargos que pesaban en su contra y las razones oficiales de su detención [53] El Estado nunca le notificó oficialmente de los cargos que pesaban en su contra ni *le* proporcionó copia de las pruebas que sustentaban su prisión preventiva.

67, Después de los 45 días que estuvo en "la cuarentena", lo trasladaron al pabellón "atenuado bajo". Se le exigió nuevamente que pague por el "derecho a vivir en una celda", y por segunda ocasión se niega a hacerlo, motivo por el cual, permaneció 35 días más en el corredor del pabellón, durmiendo en el sueldo. Finalmente aceptó pagar 20.000 sucres ($ 90 USD) para entrar en una celda.>'

AAJ, UNESCO, ILDJS, *Dere:/:/o." de 10.0' Detmido.•*. Propuesta de **Plan** Operativo de Derechos Humanos del Ecuador, htrp://www.ildis org.ec/planddhh/plaul-íte.htm. Anexo 31.

[50] Narración de los hechos realizada por el Sr. Tibi, pág. 3, (ANEXO IIl, VOLUMEN 1.1, DE LA DEMANDA DE LA COMISION)

[51] Ibid.

[52] Al inicio de la detención el Sr. Tibi no tenia dinero, por lo que los presos le abrieron una "cuenta" que sólo **la** saldó cuando su esposa le llevó dinero luego de **la** primera semana de detención. Ibíd.

[53] Ibid.

[4] lbíd.

68. En la celda que se asignó al Sr. Tibi estaba otro recluso que inmediatamente expulsó al Sr. Tibi, porque quería la celda exclusivamente para sí. Todo esto a vista y paciencia de las autoridades carcelarias, El Sr. Tibi pasó 3 meses más en los corredores de la prisión durmiendc en el suelo, hasta que por la fuerza ingresó a una celda y expulsó a los tres internos que la ocupaban. De ahí en adelante tuvo que defender su celda por cerca de un año puesto que otros internos querían arrebatársela.

69. Para que lo ubiquen en el pabellón "atenuado alto", donde estaban varios detenidos extranjeros, el Sr. Tibi necesitaba pagar hasta tres mil dólares ($3.000,00) mensuales, cantidad que estaba fuera de su alcance.

70. En la cárcel no había un sistema de clasificación de reclusos; los condenados compartían espacios con los procesados, los reincidentes con aquellos que había cometido un delito por primera vez, los internos considerados como peligrosos con aquellos procesados por delitos menores. En este espacio, los extranjeros eran especialmente vulnerables dado que se pensaba que tenían dinero. Se los acosaba y agredía constantemente.

71. Debido a lo anterior, el Sr. Tibi fue maltratado por otros internos. Como se narró líneas arriba, la victima estuvo encerrada por 45 días en una celda sobrepoblada, en donde tuvo peleas todos los días con otros internos. De igual forma, tuvo varias peleas cuando defendía su celda. En otra ocasión, en el año de 1997, el Sr. Tibi fue encerado en una celda de "castigo" desde las 6:00 a.m. hasta entrada la noche conjuntamente con varios internos, entre los que se encontraba un interno conocido como "el descuartizador", Los guardias de seguridad conocían del comportamiento violento de este interno; no obstante, encerraron al Sr. Tibi en la misma celda en la que él estaba. Como consecuencia, el Sr. Tibi fue severamente golpeado y amenazado de muerte.

72. Debido a lo anterior. el Sr. Tibi solicitó a las autoridades estatales que lo trasladaran de prisión. Esta solicitud no fue aceptada por el Estado. El Sr. Tibi permaneció en la misma cárcel, junto con los internos que lo amenazaban, hasta enero de 1998, fecha en que fue liberado.[55]

D. Los ataques contra la integridad personal del Sr. Tibi.

73. Durante los meses de marzo y abril de 1996 el Sr. Tibi fue reiterada y severamente torturado, con el objeto de que se declarara culpable del delito que se le imputaba. Las sesiones de tortura se llevaban a cabo en una celda de la "Penitenciaría

---

[55] El Sr. Tibi puso en conocimiento de las autoridades estatales este particular mediante una carta de techa 24 de febrero de 1997 dirigida al Director Nacional de Prisiones. ANEXO III VOLUlvlEN 1.2.1-1) DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN.

del Litoral". En total, el Sr. Tibi contó siete sesiones de tortura, en donde los agentes estatales lo golpearon con bates de baseball, quemaron sus piernas con cigarrillos y con metales al rojo vivo, lo ahogaron, aplicaron descargas eléctricas en su cuerpo, lo insultaron, 10 amenazaron de muerte y amenazaron agredir a su familia.

74. Es dificil para el Sr. Tibi identificar si los agresores eran guardias penitenciarios o policías, puesto que los mismos estaban vestidos de civil.

75. Como bien lo señala la Comisión Inreramericana'v las secuelas de las torturas y malos tratos que sufrió el Sr. Tibi son: pérdida del oído, pérdida de la visión en el ojo izquierdo, necesidad de cirugía reconstructiva en el ojo izquierdo, cirugía plástica nasal, cirugía reconstructiva de los nervios de/lado izquierdo del ojo, extirpación de! pómulo, cicatrices de quemaduras en e! cuerpo. estallamiento de las paredes intestinales, costillas rotas, dientes rotos y deteriorados (únicamente quedó con cuatro dientes en el maxilar inferior), problemas sanguineos, hernias discales e inguinales, tétano, etc. Fueron tantos los golpes que sumados a la falta de atención médica, lo obligaron a usar un corsé ortopédico sin el cual no podia camu1ar.[57]

76. En la primera sesión de tortura, varios agentes estatales llevaron al Sr. Tibi a una sala dentro de la misma prisión, en donde lo maniataron y sentaron en una silla. Uno de los torturadores sostuvo su cabeza y cuello a fin de que no pudiera mirar hacia su espalda e identificar a los torturadores que lo estaban golpeando. Le exigían que reconociera su partlClpaGÓn para "evitar que tuviera que preocuparse" por su esposa e hijas y también para que no descubran su cuerpo en las cercanías de la cárcel.>" Luego de un receso de 30 minutos le preguntaron nuevamente si iba o no a firmar la declaración. Al negarse otra vez, lo tiraron en el suelo, un torturador puso un pié en su nuca y 10 estiró por las muñecas, mientras que otro empezó a quemar sus piernas con un cigarrillo. En esa ocasión sufrió alrededor de 12 quemaduras. Según la víctima. entre cada quemadura los torturadores se reían y decían *"Esto lo vamos a hacer a tu mujer y [deslpues la vamos a violar. Firma esta declaración/...}, no tienes para escoger"*[59] El Sr. Tibi relató que: *"estaba seguro que las amenazas de muerte eran verdaderas"*.[60]

77. Después de unos dias, lo fueron a buscar otra vez. Lo esposaron y lo condujeron a la misma sala en que fue torturado anteriormente, Al instante lo golpearon de puños y patadas, exigiéndole que firme la declaración autoinculpatoria. Volvieron a quemar sus piernas, pero esta vez con metal al rojo vivo. Tanto fue el dolor que el Sr. Tibi se desmavó.>!

---

[56] Demanda de la Comisión, pág. 18

[57] El Sr. Tibi dejó de usar el corsé ortopédico recién en el año 2001, es decir, lo usó por cerca de 5 años.

[58] Demanda de la Comisión. pág. 13.

[59] Narración de los hechos realizada por el Sr. Tibi, pág. 7, (ANEXO lIJ, VOLUMEN 1.1, DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN); Demanda de la Comisión págs. 13 y 14.

[60] Ibid

[61] Ibid.

78. En otra sesión, le colocaron electrodos en sus testículos y le efectuaron descargas eléctricas, Luego lo ataron por los pulgares a la espalda y lo sumergieron en un barril metálico lleno de agua. hasta que prácticamente se ahogara, El Sr, Tibi fue sumergido hasta la asfixia por cuatro ocasiones.

79. En una nueva sesión de tortura, lo golpearon con un bate de baseball tan fuertemente que pedió al msrante el conocimiento,

80. Pese a todas estas presiones físicas y psicológicas, Daniel Tibi nunca firmó los papeles c¡ue le presentaron,

81. El Sr. Tibi refiere que nunca recibió tratamiento médico por parte del Estado, Todas sus heridas se infectaban 'j era él quien se curaba a sí mismo con 10 que tenía a mano.v- La falta de atención médica agravó las lesiones del Sr. Tibi y produjo las serias complicaciones que sufre hasta la actualidad.

82. La única oportunidad en que el Estado mostró cierta sensibilidad hacia la condición de salud del Sr. Tibi y estaba dispuesto a trasladarlo a un hospital en septiembre de 1997, no llegó a concretarse debido a la desconfianza y temor del Sr. Tibi hacia la fuerza pública. Fruto de las torturas y las amenazas de muerte, el Sr. Tibi se negó a ingresar al automóvil (¡ue el Estado había designado para su traslado. El señor Tibi se negó porque el automóvil tenía los vidrios polarizados y no tenía placa, además era distinto al usado para otros dos internos que estaban siendo trasladados en ese mismo momento al hospital; igualmente, los policías que 10 iban a acompañar tenían el rostro cubierto y el Sr. Tibi no podía identificarlos. Debido a ello, el Sr. Tibi solicitó a los guardias y a los policías que lo dejasen ir en compañía de su esposa, pero esta solicitud fue denegada. Teniendo en cuenta las amenazas de muerte sufridas, el Sr. Tibi pensó clue al estar sólo en un automóvil de las fuerzas especiales le iban a aplicar la "ley de fuga", es decir, dispararle aduciendo que trató de escapar.w El Estado, en vez de ceder a las súplicas del Sr. Tibi de ser acompañado por su esposa o por una persona de su confianza, o adoptar cualquier otra medida que tenga como propósito la revisión médica bajo condiciones de seguridad, le negó todo tipo de tratamiento en perjuicio de su derecho a la integridad física.

E. El proceso judicial y los recursos interpuestos por el Sr. Tibi.

83. El proceso judicial que se siguió en contra del Sr. Tibi, además de ser extremadamente lento, sufrió una serie de irregularidades que desconocen las garantías mínimas de un juicio justo. Tres jueces conocieron el proceso judicial en su contra, el primero fue recusado por mora, la segunda se inhibió por incompetencia y finalmente

---

«: 1bid., pág 9.
63 Ibid. pág. 13.

el tercer juez decretó la libertad del Sr. Tibi luego de 28 meses de prisión. La única prueba en contra del Sr. Tibi fue la declaración preprocesal de Eduardo Edison García, un coacusado en el operativo Camarón, que, conforme a la propia legislación interna del Ecuador, no podía ser aceptada en el litigio. Además, como lo señalamos líneas arriba, el Sr. García desmintió su declaración preprocesal porque la misma fue obtenida mediante tortura. No obstante, el Sr. Tibi continuó preso. Los recursos que utilizó para contradecir la ilegal y arbitraria detención fueron ineficaces. Igualmente, las quejas que presentó en contra del primer juez de instrucción y del fiscal, no tuvieron resultado alguno.

84. El primer juez que conoció el caso fue el Juez Primero de lo Penal del Guayas, Ab. Ángel Rubio Game. El Juez Rubio Game inició el procedimiento penal en contra de todos los detenidos en el operativo "Camarón" el 4 de octubre de 1995, mediante un auto cabeza de proceso que sindicaba a todos los involucrados y ordenaba su prisión preventiva.[64]

85. El Juez Rubio Game, conforme a la legislación ecuatoriana, debía receptar el testimonio procesal del Sr. Tibi dentro de las 24 horas siguientes desde que el sindicado fue puesto a sus órdenes.[65] No obstante, en el presente caso, se receptó el testimonio del Sr. Tibi a los seis meses de haber sido detenido." Además, el Juez Rubio Game no receptó el testimonio del Sr. Tibi, fue un escribano del juzgado quien realizó la tarea.[67] Es decir, el Sr. Tibi nunca se entrevistó directamente con el Juez Rubio Game.

86. El lo julio de 1996, el Sr. Tibi presentó un recurso de amparo ante el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil. En dicho recurso, el Sr. Tibi alegó que no existía ninguna prueba de *su* participación en el ilícito que se le imputaba y que conforme a la le¡:,'islación ecuatoriana (Art, 108 del Código de Procedimiento Penal) las declaraciones de los coacusados no son admisibles."

87. Este recurso fue denegado. El Presidente de la Corte Superior de Guayaquil consideró que el Art, 177 del Código de Procedimiento Penal *"sólo exige la presencia de indicios que hagan presumir tanto la existencia de la infracción como la*

---

[64] Ver, auto cabeza de proceso del Juzgado Primero de lo Penal del Guayas. ANEXO III. VOLUMEN Ir. 13.F) DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN.

[65] El Art. 130 del Código de Procedimiento Penal vigente en esa época disponía yue si *"el sindicado estuviera privado de la libertad, se le recibirá su testimonio dentro del plazo de veinucuairo horas camada desde el momento en que [ue puesto a órdenes del Juez. Este plazo podrá prorrogarse por otras veinticuatro horas cuando el Jue; lo estimare necesario (1 cuando el sindicado lo pidiere."*

[66] Dem:mda de la Comisión, pág. 26.

[e:] Narración de los hechos realizada por el Sr. Tibi, pág. 4 (ANEXO !II, VOLUMEN !.I, DE LA o EMANDA DE LA COMISIÓN)

[os] Recurso de amparo presentado ante la Corte Superior de Guayaquil el 1 de julio de 1996. ANEXO !II, VOLUMEN I.2.j) DE LA DEM:\NDA DE L\ COMISIÓN.

responsabilidad del sujeto pasivo de la misma".6') El Juez omite referirse a la prohibición de aceptar el testimonio de un coacusado y sólo fundamenta su resolución con el parte informativo realizado por la policía el 26 de septiembre de 1995, en cuyos anexos están las declaraciones del Sr. Tibi y del Sr. García.[70]

88. El Sr. Tibi también presentó UII recurso de queja contra el Juez Rubio Came, que fue signada con el No. 209-96. En dicha queja el Sr. Tibi señalaba que no se cumplían los requisitos del Art. 177 del Código de Procedimiento Penal porclue *"de las propias investigaciones se desprende que no he estado involucrado a dicha presunta organización {de tráfico internacional de drogas] lo que guarda armonía con mi declaración informal rendida en presencia de un Agente Fiscal"*.[71] En cuanto al tiempo, el Sr. Tibi refiere que hasta esa fecha estuvo detenido por más de 11 meses y que *"el señor Juez, ha violado las Normas Procesales establecidas en los Art.* 228, 216 *Y* 231 *del Código de Procedimiento Penal."*[72] Finalmente, en cuanto a las formalidades, el Sr. Tibi resaltó que el Juez Rubio Game desconoció el Art. 108 del Código de Procedimiento Penal porque dio validez en su contra al testimonio de un coacusado, concluyendo que *"no hay mérito legal para mantenerme detenido, y, pese a ello, guardo prisión sin avisos que el señor Jue: atienda mis múltiples pedidos de revocatoria'tF*

89. El 7 de octubre de 1996 la Presidencia de la Comisión de Quejas de la Corte Suprema de Justicia avocó conocimiento de la causa?' y el 14 de octubre se notificó con

---

[69] Decisión del Presidente ce la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, de 23 de julio de 1996 sobre el recurso de amparo de libertad. ANEXO III VOLUMEN I.2.K) DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN. El Arr. 177 del Código de Procedimiento Penal establecía: *El Juez podrá dictar auto de prisión preventiva cuando lo creyere necesario, siempre que aparezcan los siguientes dalas procesales:*
1.- Indicios que hagan presumir la existencia de un delito que merezca pena privativa de libertad; y,
2.- Indicios que hagan presumir que el sindicado es autor o cómplice del delito que es objeto del proceso.
En el auto se precisará los indicios que fundamentan la orden de prisián.

[70] Ver, Informe No. 278-JPELG.95, Caso No. 409-jPEI-G-95. Operación Camarón, Guayaquil, 26 de septiembre de 1995 ANEXO III, VOLUMEN 11.13.E DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN.

[71] Recurso de queja No. 209-96 presentado por el sr. Tibi ante la Corte Suprema de justicia, pág. 1. ANEXO III VOLUMEN *1.3.1,)* DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN.

[72] Ibid., pág. 2. Los articules citados establecen: *Art.* 216.- *El Juez cuidará que no se prolongue el sumario con actos procesales innecesarios. y lo concluirá dentro del plazo máximo fijado en el Art.* 231, *sin admitir ningún incidente que dilate el trámite.*
Art. 228.- *El Jue; que iniciare el proceso deberá organizar el sumario en el plazo máximo de quince días, dentro de los cuales practicará codos los actos procesales señalados en el Art. 215.*
Cada foja de! sumario será lubricada por e! Srcretario del Juzgado.
Art. 231.- *Cuando el Juez observare que se ha omitido la práctica de actos procesales necesarios, prorrogará el sumario por quince días más para la práctica de tales actos procesales, los que podrá realizarlos él mismo o mediante comisión a otro Juez.*
Si los actos a practicarse fueren muchos o deban realizarse en lugares discantes. el Juez podrá prorrogar el sumario hasta por treinta días más. Por tanto, en ningún caso el sumario podrá durar en total más de sesenta días, bajo pena de una multa equivalente al valor de hasta un salario y medio mínimo vital del trabajador en general, que el Superior impondrá, bajo su responsabilidad pecuniaria, al Juez negligente.

[73] Ibid.. pág. 3.

[74] Uficio de 7 de octubre Je 1996 firmado por el Secretario de la Comisión Nacional de Quejas de la Corte Suprema de Justicia. ANEXO III VOLUMEN I.3.B) DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN.

la queja al Juez Ángel Rubio Game, dándole un plazo de 5 días para que conteste la misma." En vista de que el Juez no respondía a las alegaciones planteadas en la queja del Sr. Tibi, la Corte Suprema de Justicia envió un telegrama a la Corte Superior de Guayaquil solicitando que se remita *"en forma urgente"* la respuesta dado que el Juez *"fue notificado hace tres semanas y 110 existe contestación* ".76

90. Finalmente, el 7 de noviembre de 1996, el Juez Rubio Game dio contestación a la queja y señaló que se encontraba cerrado el sumario en la causa penal en contra del Sr. Tibi desde el 23 de octubre de 1996 y que se había notificado al Representante del Ministerio Público el 25 de octubre de 1996 para que emita su dictamen *"en el menor tiempo posible"* y que luego de recibido el dictamen resolvería la causa dentro *"del término que la Ley lo determina".*[77] Sin embargo, ni el fiscal dictaminó "en el menor tiempo posible" ni el juez resolvió dentro "del término que la Ley determina".

91. El 10 de marzo de 1997 el Dr. Hugo Larrea BenaIcázar, Presidente de la Comisión Nacional de Quejas de la Corte Suprema de Justicia, y los demás miembros de la Comisión, resolvieron la queja presentada por el Sr. Tibi y señalaron que *"]dlespués de la lectura del expediente 209-96 y de la revisión del juicio penal número 361-95 y de lo que verbalmente y de manero informal expresa al mencionado juez [Rubio Carne}. forzosamente se debe concluir que Tibi es inocente".* Y continúan apuntando que

> *..El Abogado y Jue; Ángel Rubio Gamc ha manifestado el año pasado que él siempre creyó qlle Tibi era inocente, No obstante. según* la *tardía respuesta que envió* a *esta Comisión. reconoce qu« el sumario recién fue concluido el* 23 *de octubre de* 1996; *y aun cuando dice personalmente le ha solicitado al Representante del Ministerio Público que emita su dictamen, que se sepa hasta* la *fecha* 1/0 *lo ha entregado. Por lo que se arriba* a *otra courlusián: el Jue; y el Fiscal tienen que ser amonestados severamente."*[78]

92. Es hasta el 17 de marzo de I()97 que el Fiscal encargado del caso remitió su dictamen al Juez Rubio Game absteniéndose de acusar al Sr. Tibi, por cuanto *"si bien es cierto en {os autos aparece presumiblemente su participación en un acto ilegítimo, de entrega de sustancias estupefacientes sujeta a fiscalización, éste ilícito, no ha sido probado*

---

75 (Jficio de 14 de octubre de 1996 firmado por el Secretario de la Comisión Nacional de Quejas de la Corte Suprema de Justicia. Anexo 8.

76 Telegrarna oficial de 6 de noviernbre de 1996 del Presidente de la Comisión Nacional de Quejas de la Corte Suprema de Justicia dirigido al Presidente de la Corte Superior de Guayaquil. ANEXO III \'OLUMEN I.3.C) DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN.

77 Comunicación de 7 de noviembre de 1996 del Juez Primero de lo Penal del Guayas, Ángel Rubio Game a la Comisión Nacional de Quejas de Il Corte Suprema de Justicia. ANEXO III, VOLUMEN 1.3.D) DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN

78 Informe de la Comisión Nacional de Quejas y Reclamos de la Corre Suprema ele Justicia, ele 10 de marzo de 1997, dirigido al Dr. Carlos Solórzano Consranrine, Presidente de la Corre Suprema ele justici». Anexo 13. Los representantes de la víctima desconocemos si el Juez Rubio Garne y el Fiscal Valle Cevallos fueron "amonestados severamente".

conforme a derecho. más aún pertenecería a otro cuaderno procesal v *no al aquí pesquisado* ".7')

93. Por su parte, el Juez Rubio Game fue recusado por mora y subrogado por la Jueza Décimo Cuarta de lo Penal del Guayas, Ab. Angelita Albán de Angel.[80]

94. La Jueza Albán se convirtió en la segunda Juez en conocer el caso del Sr. Tibi. Al igual que el Juez Rubio Game, la Jueza Albán demoró el procedimiento. Ante su inactividad el 22 de julio de 1997. el Embajador de Francia en Ecuador, Laurent Rapin, expresó a la prensa que creía que los jueces que han tramitado el caso del Sr. Tibi esperaban coimas para agilitar el proceso.[81]

95. El 18 de julio de 1997, la Jueza Albán se declaró incompetente para conocer el expediente del caso "Camarón" porque ella, al igual que el Juez Rubio Game, no tenían competencia para conocer un delito que fue cometido en Durán.V En consecuencia el proceso pasó a conocimiento del Ab. Reinaldo Cevallos, Juez Segundo de lo Penal del Guayas con asiento en Durán. El Juez Cevallos fue el tercer juez en conocer el caso del Sr. Tibi.

96. El 6 de agosto de 1997, el Sr. Tibi anunció que iniciaría una huelga de hambre si la justicia no resolvía su situación a la mayor brevedad posible.v

97. El 7 de agosto de 1997 el Gobierno de Francia pidió a las autoridades ecuatorianas la liberación del Sr. Tibi porque no existían pruebas en su contra que justifiquen dos años de prisión preventiva." De igual forma, el Gobierno francés retiró al Embajador Laurent Rapin del Ecuador y, como forma de presión al Estado ecuatoriano, se abstuvo ele nombrar un nuevo embajador hasta que la situación del Sr. Tibi fuera resuelta.

98. El 14 de agosto de 1997 el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, pidió al titular de la Corte Superior de Guayaquil un informe inmediato del estado del caso del Sr. Tibi."

99. El 25 de agosto de 1997, el Presidente de la Primera Sala de la Corte Superior de Guayaquil, Dr. Rafael Estévez Moncayo, solicitó la apertura de expedientes

---

[79] Dictamen Fiscal de 17 de marzo de 1997. ANEXO 111, 'VOLUMEN I.2.L) DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN.

[80] Demanda de la Comisión, pág. 27

[81] Demanda de la Comisión, pág. 27. La Jueza Alb.in ante estas declaraciones del Embajador Rapin 10 demandó ante la Corte Suprema de Justicia por 20 mil millones de sucres. (Ibíd., pág. 27)

[82] Demanda de la Comisión, pág. 27.

[83] Demanda de la Comisión, pág. 27.

[84] Demanda de la Comisión, págo 27.

[85] Demanda de la Comisión, págo 27.

administrativos contra los Jueces Rubio Game y Albán.[86] Los representantes de la víctima desconocemos si los expedientes administraditos fueron abiertos y cuál fue el resultado de los mismos.

100. Seis meses después del dictamen del fiscal, el 5 de septiembre de 1997, el Juez Cevallos declaró el sobreseimiento del Sr. Tibi." pero el Sr. Tibi no fue liberado. Se necesitaba que el trámite vaya a "consulta" ante el tribunal superior.[88] La consulta no debía tardar más de 15 días.[89] El Sr. Tibi, ante la demora de la Corte Superior de Guayaquil, presentó un recurso de amparo el 2 de octubre de 1997 señalando que *"mediante providencia de* {5] *de septiembre de* 1997 *fui sobreseído provisionalmente por el Juez de la materia; debiéndose cumplir con el Art.* 246 *del Código de Procedimiento Penal el mismo que indica que siendo el sobreseimiento provisional o definitivo el Juez pondrá en inmediata libertad* si *estuviere en prisión preventiva, sin perjuicio de que se vuelva a ordenarla... Sin embargo a pesar de haber transcurrido un mes promedio del auto resolutorio me encuentro todavía privado de mi libertad'ts»* Este recurso de amparo de libertad fue negado por la Corte Superior de Justicia de Guayaquil.

101. Finalmente, el 14 enero de 1998, cuatro meses después de haberse dictado el sobreseimiento, la Corte Superior de Justicia de Guayaquil lo confirmó y ordenó la libertad del Sr. Tibi.?[1] No obstante el Sr. Tibi fue liberado el 21 de enero de 1998.[92] En total, el Sr. Tibi permaneció 28 meses detenido.

102. En vista del sobreseimiento del Sr. Tibi, el Juez Décimo Octavo de lo Penal del Guayas el 23 de septiembre de 1998 dispuso la devolución de sus bienes." Pero hasta la fecha éstos no han sido devueltos y aún siguen en posesión del Estado.

103. Los representantes de la víctima y sus familiares consideramos que todo lo anterior comporta una violación de los derechos a la integridad personal (Art. 5), libertad personal (Art. 7), protección de la familia (Art, 17), propiedad privada (Art. 21), garantías judiciales (Art, 8) y protección judicial (Art, 25) consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de los Art, 1, 6 y 8 de la Convención

---

[86] Demanda de la Comisión, pág. 27. El Dr. Estévez, el 3 de septiembre de 1997, acusó al Juez Rubio Carne de amenazas telefónicas (Ibid. pág. 27).

[87] Sentencia de 5 de septiembre de 1')')7 del Juzgado Décimo Octavo de lo Penal. ANEXO III VOLUMEN 1.2.M) DE LA DEMANDA DE LA COMISiÓN.

[s] Según el Arr, 398 del Código de Procedimiento Pena], cada vez que se dictaba un sobreseimiento se requería que el expediente vaya en "consulta" al tribunal superior. El Art. 398 establecía: *Los jueces de lo penal elevarán en consulta obligatoruuncntr, los autos de sobreseimiento a la Corte Superior respectiva*

[89] Art. 401.- *La Corte Superior resolverá la consulta por los méritos de lo actuado. en el plazo de quince días contado desde la recepción del proceso y su resolución causará ejecutoria.*

[90] Recurso ele amparo interpuesto por el Sr. Tibi el 2 de octubre de 1997 ante la Corte Superior de Justicia de Guayaquil. ANEXO III. VOLUMEN 1.2.N) DE LA DEMANDA DE LA COMISiÓN.

[91] Sentencia de la Sexta Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil de 14 de enero de 1998. ANEXO 111, VOLUMEN I.2.Q) DE L'\ DEMANDA DE LA COMISIÓN.

[92] Demanda de la Comisión pág. 11,

[93] Providencia del Juez Décimo Octavo de lo Penal del Guayas de 23 de septiembre de 1998, Anexo 10.

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio del Sr. Tibi. De igual forma, los representames de la víctima y sus familiares consideramos que los hechos narrados constituyen una violación del derecho a la integridad personal (Art. 5 de la Convención Americana) de la familia del Sr. Tibi, es decir: la Sra. Beatrice Baruet, sus hijas Sarah Vachon y Jeanne Camila Vachon, la hija de ambos, Lisianne Tibi, y el hijo del Sr. Tibi, Valerian Tibi. A continuación pasaremos a exponer los argumentos de derecho que sustentan estas aseveraciones.

Violaciones al derecho a la integridadpersonal
(Art. 5 de la Convención)

104. El Estado es responsable de la violación del Art, 5 de la Convención Americana por las sesiones de tortura que agentes del Estado ecuatoriano cometieron en contra del Daniel Tibi, causándole serios daños físicos y psicológicos que hasta la fecha perduran. Las violaciones de la integridad física, psíquica y moral del Sr. Tibi surgen de los siguientes hechos: la falta de tratamiento médico y psicológico de las secuelas de tortura que extendieron su sufrimiento y le generaron daños irreparables; la falta de separación del Sr. Tibi, en su calidad de procesado, de los condenados, y la falta de un tratamiento adecuado por su calidad de tal; las misérrimas condiciones carcelarias que sufrió mientras estuvo recluido; y porque toleró que otros presos lo maltrataran. Igualmente, el Estado es responsable por la violación de los artículos 1, 6 Y 8 de la Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, porque no se ha realizado ninguna investigación sobre los hechos y no se ha sancionado a ningún responsable ni reparado a la víctima: y del Art. 6 del mismo instrumento porque no se ha asegurado que los actos de tortura constituyan delitos en el derecho interno. Finalmente, el Estado es responsable de la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de la familia del Sr. Tibi, es decir, la Sra. Beatrice Baruet. sus hijas Sarah Vachon y Jeanne Camila Vachon, la hija de ambos, Lisianne Tibi, y el hijo del Sr. Tibi, Valerian Tibi, por el profundo sufrimiento y angustia que padecieron *al* saber que su ser querido fue torturado y estuvo detenido ilegal y arbitrariamente.

105. En el presente caso, la 1. Comisión resumió los hechos de tortura contra el Sr. Tibi de la siguiente manera

> *"Entre marzo y abril de* 1996. *con cinco meses de arresto, se le ofreció al señor Tibi su libertad a cambio de una declaración de admisión de participucum en el caso Camarón. Afirma que recibió amenazas de muerte en 1m intento de presionarlo para cambiar su declaración. S,, le ataron las manos, y se le trasladó a IIn cuarto, donde le propinaron golpes de puño en el cuerpo y el rostro. Le quemaron las piernas con cigarrillos y con barras de metal al rojo. Diez dias después, se repitieron los golpes y las quemaduras, esta vez, con el saldo de "arias costillasfracturadas. En otras ocasiones. lo golpearon con bates de basrball, y sumergieron su cabeza en un tanque de agua. En ningún momento recibió atención médica por las lesiones. Las sesiones de tortura finalmente terminaron cuando intervino la Embajada de Francia. En total el Tibi rontá siete sesiones de este tipo. Pese a*

la coacción física. el .irñor Tibi nunca admitió estar involucrado en mal/era alguna en los lie'lltos de que se le aC¡{SIW{/.Óvu

A. La tortura como grave violación a los derechos humanos

106. La Convención Americana prohíbe la tortura y todo maltrato físico cuando en su Art. 5 señala:

> *l. Toda persona tiene .ierecho a que se respete su integridadfisica; psíquica y moral.*
> *2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. inhumanos o degradantes, Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al srr humano.*

107. La Convención 1nterarnericana para Prevenir y Sancionar la Tortura avanza sobre esta prohibición dando contenido a la prohibición de la tortura en el sistema interamericano.[95]

108. La define en su Artículo 2 como

> *"todo acto realizado intrncionalmrnte por el cual se inflijan a ll/w persona pellas o sufrimientos jisicos e mentales, con fines de investigación criminal. como medio intimidatorio, COI/O castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la v{crima o a disminuir su capacidad física* o *mental, aunque /10 causen dolorfísico o angustia psíquica."*

109. La prohibición de la tortura y los tratos y penas inhumanos, crueles y degradantes ha sido reconocida como una norma del derecho internacional consuetudinario y su reconocimiento, como una norma imperativa del derecho internacional general, vinculantes para todos los Estados, sean o no Partes en tratados que contienen dicha prohibición."

---

[94] Demanda de la Comisión, pag. 10.

[95] En este punto, los represenr.mres de la víctima nos sumamos a las consideraciones de la 1. Comisión, en el sentido que *"[plese a que el Ecuador rarificó la Convencián [Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura] después de la ocurrencia de los hechos del presente caso, la definición de tortura en el tratado rejleja en medida sustancial elementos jurídicos internacionales establecidos que rigen el crimen de tortura y podrían, por tanto, informar adecuadamente el sentido de la norma establecida en el Artículo* 5¡2) *de la Convención Americana."* (Demanda de la Comisión, pág. 17)

[96] Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación General 24 sobre cuestiones relativas a reservas y declaraciones. párrs. 8 y 10. En el caso *Prosecutor* 1'. *Delalic and otbers.* del 16 de noviembre de 1()t]8, el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia afirmó que la prohibición de tortura constituye una 110m1a de *ius cogens* (párr. 454) y que la prohibición de traro inhumano es una norma del derecho internacional consuetudinario (párr. 517). De igual forma, la Corte Europea señaló en el Caso *Al-Adsani* 1'. *UK* que *"la prohibición de tortura ha alcanzado la categoría de norma imperativa en el derecho il1lemaciona/".(Caso .AlAdsam* 1'. *UK.* Sentencia del 21 de noviembre de 2001, p.irr. 61). El Comité contra la Tortura afirmó que existe *"una norma general del derecho internacional que debe obligar a codos los Estados a tomar medidas eficaces para prevenir la tortura y sancionar los actos de tortura" (O.R, M.M.* i *M.S. c. Argentina,* 23 de noviembre de 1989, párr, 7.2.). Incluso, el Relator especial ele las Naciones Unidas sobre la cuestión ele l.i tortura calificó el derecho a no ser sometido a tortura como una

110. Ahora bien, la Corte Interamericana ha considerado que

> *..La infracción del derec ha a la integrídadjisica y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura has/a otro tipo de vejámrnes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exágenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta. La Corte Europea de Derechos Humanos ha manifestado que. aún en la ausencia de lesiones, los sufrimientos en el plano fisico y moral. acompañados de turbaciones psíquicas duran/e los interrogatorios, pueden ser considerados como tratos inhumanos. El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia [isira y moral de la victima 1...] Dicha situación es agravada por la vulnerabilidad de una persona ilegalmente detenida 1..]. Todo uso de la [uerza que /10 sea estrictamente necesario por el propio romportamírnto de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana 1..] en violación del articulo 5 de la Convención Americana.* "[97]

111. Estas "connotaciones de grado" en la severidad del sufrimiento van necesariamente evolucionando con el tiempo; tal y como lo ha manifestado la propia Corte Interamericana, acogiendo las consideraciones de la Corte Europea de Derechos Humanos (en adelante "la Corte Europea" o "la Corte EDH"):

> *"ciertos actos que fueron calificados en el pasado como tratos inhumanos o degradantes, /10 CoI/IO torturas, podr.an ser calificados en elfuturo de una manera diferente, es decir, CO//1O torturas, dado qUt' a las crecientes exigencias de protección de los derechos y de las libertades fundamentales, debe corresponder una mayor firmeza al enfrentar las infracciones a los valores básicos de las sociedades democráticas."*[98]

112. Debe en todo caso dejarse en claro que *"cualquiera que haya sido la naturaleza de los actos aludidos, se trata de comportamientos estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos* ".99 *"De lo anterior puede concluirse que*

---

ubligación *erga omnes,* (Doc ONU E/CN.4/1986/15. párr. 3) es decir, una obligación que un Estado tiene con la comunidad internacional en su conjunto y en cuyo cumplimiento todos los Estados tienen interés leg.tl, porque estas obligaciones proceden, entre otras cosas, de *"los principios y las normas relativas a los derechos básicos de la persona humana"* (Corte Internacional de Justicia, *Barceiona Traaion. Light aud Pourr Company, Limited (Belgium v. Spain).* 1970, párr. 34.). Lo cual ha sido ratificado por la Asamblea General de la ONU cuando afirmó: *"Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la Cana de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertadesfundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derecnos Humanos".* Declaración contra la Tortura, Art. 2.

[97] Corte IDH, Caso *Loayza Tamayo,* Sentencia de 17 de enero de 1997, Serie C, No. 33, párr. 57.

[98] Corte IDH, Caso *Cantoral Benarides.* Sentencia del 28 de agosto de 2000, Serie C, No. 69, párr. 99; Ver también, Corte EDH, *Sem¡OIIII v. France.* p.irr. 101.

[99] Corte IDH, Caso *Cantora! Benarides,* Sentencia del 28 de agosto de 2000, Serie C, No, 69, parr, 96. A ese efecto, la Corte Europea se ha referido al articulo 3 de la Convención Europea como la prohibición *"en términos absolutos la tortura y las penas o traros inhumanos o degradantes, cualesquiera que sean los actos de la victima. El artículo 3 no prevé ninguna excepción, en lo cual contrasta con la. mayoría de los preceptos de la Convención loo.) y loo.} no admite derogación ni siquiera en el caso de un peligro público que amenace a la "ida de la nación."* Corte EDH, *lreland r. UK.* 18 de enero de 1978, párr. 163.

se ha conformado IIn verdadero régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas de tortura ".IIJO

113. En consecuencia, todas las presiones fisicas y psicológicas que sufrió el Sr. Tibi, sean estas torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, constituyen una violación al Arr. 5 de la Convención Americana y deben ser sancionadas severamente por el Estado en virtud de los compromisos internacionales que ha ratificado.

B. El Sr. Tibi fue sometido a torturas y a tratos crueles, inhumanos y degradantes mientras estuvo detenido en las cárceles de Ecuador

114. Durante los meses de marzo y abril de 1996 el Sr. Tibi fue reiterada y severamente torturado.10] En diciembre' de 1995, el Sr. García, otro involucrado en el operativo "Camarón", que declaró que el Sr. Tibi le proveyó de 50 gr. de cocaína, se retractó de las acusaciones en contra del Sr. Tibi aduciendo que su declaración preprocesal fue producto de torturas. En marzo de 1996, el Sr. Garcia vuelve a retractarse de su declaración preprocesal y reitera que la misma fue obtenida mediante torturas. En el mismo mes de marzo de 1996 inician las torturas en contra del Sr. Tibi. Al respecto la 1. Comisión señaló:

> *"Sólo cabr conjeturar que las autoridades, habiendo perdido el fundamento para mantener detenido al señor Tibi procuraban desesperadamente una confesión forzada para justificar el arrestoy la perpetuacron de la detenctón."*[12]

115. El Sr. Tibi fue torturado en al menos siete ocasiones, Las torturas consistían en quemaduras con cigarrillos y metales al rojo vivo, descargas eléctricas, sumersiones en barriles de agua hasta casi la asfixia, golpes con bates de baseball, golpes de puño, patadas, insultos y amenazas de muerte en su contra y en la de su familia.

I"r, Corte IDH, Caso *Cantoral benandes.* Sentencia del 28 de agosto de 2000, Serie e, No. 69, párr. 103.

le'l Ver fotografías del Sr. Tibi, Anexo 37.

"'2 Demanda de la Comisión, pág. 41. La propia Comisión constató que en el Ecuador *"La mayor parle de los casos en estudio en los que se alegan torturas o Ira/o inhumano sostiene que los miembros de las fuerzas de seguridad emplearon métodos de presián jisica y/o psicológica para coaccionar a los detenidos a firmar "confesiones". Nueve casos, que datan de 1991 a 199-1, involucran cargos contra agentes de la policia en QuilO y localidades de todo el pais. La mayoria sostiene que los detenidos fueron mantenidos incomunicados mientras se aplicaba la presión fisica o psicológica. En todos los casos se alega que los métodos empleados involucraron el uso de fuerza bruta. como golpes, puñetazos y putuapiés. En varios casos se alega que la policía introdujo gas en una capucha colocada sobre la cabeza de la victima hasta casi sofocarla. En dos casos adicionales se alega el uso del "submarino". En cinco casos se alega que se aplicó corriente rlrctrica a la piel de las víctimas, en varias partes del cuerpo. incluso en dos casos a los órganos genitales. En cada uno de los casos anteriores, los certificados médicos oficiales informan haber hallado áreas di' excoriaciones, hematomas, equimosis, lesiones o quemaduras. y en dos de ellos, rotura de huesos."* CIDH, Informe sobre la situación de Jos Derechos Humanos en el Ecuador, Capítulo V. La Corte Europea ha sostenido que el sufrimiento aplicado deliberadamente a una persona con el fin de hacerlo c..nfesur amerita una violación al artículo 3 de la Convención Europea. Corte EDH, *Selmouni* v. *Frauaa,* Sentencia de 28 de julio de 1999, párr. 105.

116. Pese a todas estas presiones, el Sr. Tibi nunca firmó los papeles que le presentaron.

117. La prueba de las torturas sufridas por el Sr. Tibi no sólo surgen de sus propias declaraciones, sino también constan en diligencias médico legales llevadas a cabo por autoridades ecuatorianas y médicos franceses. La documentación de las secuelas de las torturas es abundante.

118. Si bien el Sr. Tibi nunca recibió tratamiento médico de las autoridades ecuatorianas.[103] sí fue revisado en dos ocasiones por médicos ecuatorianos. En ambas oportunidades, de lo que se desprende de los informes, los médicos verificaron que el Sr. Tibi sufría de heridas y traumatismos.[104] No obstante, las autoridades médicas nunca ofrecieron atención médica al Sr. Tibi y nunca hicieron una investigación sobre sus heridas. Cabe resaltar que el segundo informe fue dirigido al juez de instrucción, quien tampoco inició una investigación.

119. En efecto, el 19 de septiembre de 1997 se realizó la diligencia médico legal en la persona del Sr. Tibi por médicos designados por el Juez Décimo Octavo de lo Penal del Guayas. Del examen físico general se desprende que la víctima presentó:

> *"asimetría facial izquierda por hundimiento de huesos malar izquierdo. diseminadas en región toráxico anterior, posterior, miembros superiores e inferiores, múltiples zonas excoriativas algunas de las cuales se acompañan con procesos inflamatorios e infecciosos. El reconocido refiere dolor y dificultad en los movimientos de la extremidad inferior izquierda"*[105]

---

[103] Narración de los hechos realizada por el Sr. Tibi, pág. 9, ANEXO 1JI, VOLUMEN 1.1, DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN. El propio Estado reconoció que *"[n]o existe registro de que al momento de su ingreso al CRS Varolles de Guayaquil se haya realizado evaluación médica al interno Tibi a fin de determinar las condiciones de salud en las que ingresó. únicamente consta el oficio No. 60S-CRSVG-DMO de fecha 13 de noviembre de* 1996 *suscrito por el Dr. Jorge Vivas. Médico de ese Centro, quien se dirige al Dr. Juan Defáz Mora. Director de Diagnóstico y Evaluación remitiendo el informe médico realizado al interno Tibi."* Otício No. 389 DNRS-SG, de 8 de agosto de 2000, dirigido al Dr. Alberto Ramírez M, Director Nacional de Rehabilitación Social. **Anexo** 11.

[104] El Dr. Jorge Vivas Tobar, Médico 3 del Centro de Rehabilitación Social de 'Varones de Guayaquil, señaló que el Sr. Tibi *"presenta a la inspección general hundimíento de malar izquierdo. por tralllnatis/llos antrriores. se aprecia escaras y costras en ambos miembros superiores por procesos infecciosos (:\II/ecedentl's de diabetes) por su problema de diabetes no controlada y por trastornos en sensibilidad* (ilegible) *izquierda es necesario medicación continua especializada (Antidiabético-Ameneurítico)"* Oficio 608-CRSVG-DMO, de fecha 13 de noviembre de 1996, suscrito por el Dr. Jorge Vivas Tobar, Médico 3 del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, dirigido al Dr. Juan Defaz Mora, Presidente de Diagnóstico y Evaluación de CRSVG. **Anexo** 12. El Sr. Tibi refiere que este examen médico le fue practicado porque en esa época estaba programada la vista de autoridades csradounideneses y observadores carcelarios. Por ello, las autoridades ecuatorianas procedieron a examinar a gran parte de los internos y a limpiar la cárcel, a fin de presentar una mejor imagen del centro carcelario.

[105] Diligencia médico legal, del 1' de septiembre de 1997, realizada por el Departamento Médico Legal de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Policía Nacional, dirigido al juez Décimo Octavo de [o Penal del Guayas. **Anexo** 32.

120. En las conclusiones del mencionado informe se refiere que la asimetría facial izquierda es producto de *"la acción traumática de un objeto contundente duro y que las lesiones descritas en el tárax y extremidades son de carácter dermatológico't.v»* Lo anterior concuerda con la narración de la víctima que fue agredida en la cara con un bate de baseball y que sufrió quemaduras en las piernas.P? Finalmente, el informe médico legal concluye que *"por las lesiones que presenta el reconocido necesita tratamiento médico de la especialidad (traumatología y dermatología)"*. Sin embargo, el Estado no brindó el tratamiento especializado.

121. En el año de 199'), gracias a la Embajada de Francia, el Sr. Tibi fue visitado en 10 ocasiones por un médico acupunrurista que lo trató por una crisis de ciática y contracciones musculares en las piernas,

122. El 22 de enero de 1998, a instancias de la Embajada de Francia, la Dra. Virginia Miranda, del Centro Clínico y Dermatológico San Luis, de Ecuador, emitió un certificado médico luego de dos consultas con la víctima: la primera de fecha 30 de diciembre de 1997 y la segunda de fecha 14 de enero de 1998. En la primera consulta, la Dra. Miranda constató la existencia de lesiones *"en todo el cuerpo"* y más que nada, *"llamá la atención el aspecto emaciado del paciente, quien refiere haber perdido 30 a 40 libras en* 3 *meses, y la coloración pálida por lo cual se solicitaron exámenes de sangre"*.[108] En la segunda consulta *"se observó además ligera dilatación en la ingle derecha, posible hernia inguinal, refiere el paciente dolor a la palpación"*; y nuevamente *"por la extrema palidez del paciente se solicitaron otros exámenes'tF"* En este certificado médico también se prueba los efectos de la tortura psicológica. La Dra. Miranda señaló que"*la pérdida de peso se atribuye a su condición, situación emotiva y estrés que presenta".*[110]

123. Al regresar a Francia, el Sr. Tibi también fue examinado por médicos franceses. El Dr. Philippe Lesprit, médico francés del Hospital Henri Mondor, constató las múltiples heridas del Sr. Tibi, entre otras señaló las siguientes:

> *-. una degradación del estado general* con IIIla *pérdida de peso de diez kilos en dos años.- heridas dermatológicas con cicatrices de úlceras varicosas de los miembros inferiores,- cica/rices de quemadura en el cuerpo y los miembros superiores.: dolores basico-thoracica izquierdo de los décimo, undécimo y segundo espacios intercostales, consecuencia de*

„r, Ibíd.

[107] Narración de los hechos realizada por el Sr. Tibi, ANEXO IlI, VOLUMEN 1.1, DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN. Ver también pág. 10 Y 13 de la demanda de la Comisión.

[1'8] Certificado Médico de la era. Virginia Miranda del Centro Clínico y Dermatológico San Luis, de lecha 22 de enero de 1998, ANEXO III, VOLUMEN I.2.A) DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN. Hay que notar que en el listado de anexos de la Comisión el certificado aparece como emitido por el Centro "San Juan", cuando en realidad es "San Luis", solicitamos a la Corte que atienda a este error de trascripción. Se adjuntan también los resultados de los exámenes de sangre: Biometría Hemátiea, Inrnunológio is y Enzimas.

[109] Ibid.

[110] Ibid.

> *golpes de patadas desde hace seis meses.: dolores del pómulo izquierdo debido a un golpe de bastón y responsable desde hace /1/1 año de /lila distorsión visual sin displopia. de una hvpoacoustica del oído izquierdo, de disminución sensitiva de los miembros inferiores desde hace varios meses ..111*

124. El certificado concluye señalando que las heridas *"habrían ocurrido en la temporada de detención en las cárceles del Ecuador desde* 1996 *hasta 1998".*[112]

125. Otros informes que prueban las secuelas de la tortura son:[113] el informe del Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, que prueba la desviación nasal y la congestión crónica de la laringe;[114] un segundo informe del Centre Hospiralier Universitaire de Dijon, que demuestra entre otras cosas la formación de hernias.t'> un tercer informe del Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, referente a la Septorino-plastia;'!" el examen médico legal del Dr. Samuel Gerad Benayoun, en el que se constatan todos los daños físicos y psicológicos del Sr. Tibi;IJ7 el reporte de gastos de los implantes y prótesis dentales. elaborado por el Dr. Gérad Ohayon.t!" el certificado médico del Dr. P Blanche que demuestra, entre otras cosas, los problemas gastrointestinales y la hepatitis C.[119]

126. En suma, las secuelas de la tortura y la falta de atención médica del Sr. Tibi son: pérdida del oído. pérdida de la visión en el ojo izquierdo, necesidad de cirugía reconstructiva en el ojo izquierdo, cirugía plástica nasal, cirugía reconstructiva de los nervios del lado izquierdo del ojo, le extirparon el pómulo, cicatrices de quemaduras en el cuerpo. estallarniento de las paredes intestinales, costillas rotas, dientes rotos y deteriorados (únicamente quedó con cuatro dientes en el maxilar inferior), problemas sanguíneos, hernias discales e inguinales, tétano, hepatitis C, etc.l-" Fueron tantos los golpes que sumados a la falta de atención médica, obligaron al Sr. Tibi a usar un corsé ortopédico sin el cual no podía caminar.[121]

---

111 Certificado médico *del* Dr. Philippe Lesprir, iefe asistente *de* clínica en e! Hospital Henn Mondor, de fecha 26 de enero de 1998. El examen en la persona de! Sr. Tibi se llevó a cabo el 24 de enero de 1998. La cita pertenece a la rraduccion ofrecida junto con el original en francés por la Comisión en e! Anexo IJI, Volumen I.2.b).

112 ¡bid.

113 La 1. Comisión hace un recu ento de estos exámenes médicos en la pág. 15 de su demanda.

114 Certificado médico del *Centre Ho.rpitalier Universitaire de Dijon,* de fecha 16 de febrero de 1998, realizado por e! Dr. Rat. Anexo 33.

115 Certificado del *Centre Hospitalier Unirersirair« de Dijo».* de fecha 28 de marzo de 1[¡(l8. Anexo 34.

11; Certificado médico del *Centre Hospitalier Unirersitaire de Dijon.* de fecha 16 de junio de 1998. ANEXO JIl. VOLUMEN 2.D) DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN.

117 Examen médico legal de! Dr. Samuel Gerard Benayoun, practicado el 7 de noviembre de 2001. Anexo 35.

118 Reporte de gastos de las reconstrucciones dentales, elaborado por el Dr. Gérad Ohavon, Anexo 22.

u: Certificado médico del Dr. P Bla.nche, de fecha 22 de junio de 2U01. Anexo 36.

120 Demanda de la Comisión, pág. 18.

121 Narrac.ón de los hechos realizada por el Sr. Til», pág. 12, ANEXO III, VOLUMEN 1.1, DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN

127. Cabe señalar que en el trámite del caso ante la Comisión, el Estado se limitó a contraclecir los hechos alegando que los médicos franceses no eran imparciales y que además, consta en el expediente penal que el Sr. Tibi rindió su testimonio "libre y voluntario" y que de ninguna manera ha sido maltratado o presionado para rendir su declaraClón. [122]

128. Los representantes de víctima quisiéramos resaltar *"la especificidad y los detalles de las consecuencias de [la) tortura establecidos en los informes médicos'tP>* Adicionalmente, cabe señalar que los informes realizados por las autoridades ecuatorianas evidencian que el Estado tuvo conocimiento de la tortura y no propició una investigación que cié cuenta de los responsables y los sancione.

129. El alegato del Estado con relación al testimonio "libre y voluntario" del Sr. Tibi es igualmente infundado. El Sr. Tibi no fue torturado cuando se le interrogó por parte de la policía y el Fiscal, *"sino después de haber sido transferido a la cárcet",'>*

130. Además de ser torturado físicamente, el Sr. Tibi sufrió torturas psicológicas. La tortura psicológica de! Sr. Tibi deviene de la propia tortura física y de las amenazas que sufrió contra su vida y la de su familia. En efecto, cuando estaba siendo torturado, los agentes le exigían que reconociera su participación para *"evitar que tuviera que preocuparse"* por su esposa e hijas y también para que no descubran su cuerpo en las cercanías de la cárcel.l'" Igualmente, entre cada quemadura los torturadores se reían y decían *"Esto lo vamos a hacer a tu mujer y [desjpues la vamos a violar. Firma esta declaración* [oo.}, *no tienes para escoger".126*

131. La Corte Interamericana ha estimado que debe tomarse en cuenta para el análisis de la tortura, no sólo el sufrimiento físico sino también la angustia moral.l-" En tal sentido, la Corte Interamericana también calificó como tortura psicológica los actos de tortura física que fueron inflingidos deliberadamente y con algún propósito.I"

---

[122] Demanda de la Comisión, pág. 16.
[123] Demanda de la Comisión, pág. 16.
[124] Demanda de la Comisión, pág. 16.
[125] Demanda de la Comisión, pág. 13.
[126] Demanda de la Comisión pág. 13.
[127] Corte IDH, Caso *Cantonl benaiides,* Sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie e No. 69, párr. 102.
[128] *"Atendiendo al conjunto de las circunstancias del caso y al contexto en que se produjeron los hechos. estima este Tribunal. sin lugar a duda razonable, que cuando menos parte de los actos de agresión examinados en esta causa pueden ser calificados como torturas, [isicas y psíquicas. Considera también la Corte que dichos actos fueron preparados e infligidos deliberadamente contra el señor Cantoral Benavides cuando menos con un doble propósito. En la fase previa a la condena, para suprimir 051/ resistencia psíquica y [ort.arlo a autoinculparse o a confesar determinadas conductas delictivas. En/a etapa posterior a la condena, para someterla a modalidades de castigo adicionales a la privación de la libertad en sí misma"* Corte IDH, Caso *Cantora! Ben.uides,* Sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie e No. 69, párr. 104

132. En segundo lugar, la tortura psicológica también deviene del miedo a la tortura fisica, el cual *"puede constituir en sí mismo una tortura mental"*.[129] En efecto, la angustia v el padecimiento mental no se limitan al momento mismo de la tortura física, sino que se extienden más allá de la sala de tortura y acompañan a la víctima a cada momento. De tal suerte, entre cada sesión de tortura el Sr. Tibi vivía en el agobio y el terror de volver a ser torturado, 10 cual constituye *ter se* una forma de tortura psicológica.

133. La tortura ha sido considerada como una violación grave de la integridad personal, que ataca el cuerpo así como la dignidad y el sentido de identidad de la persona. Por su naturaleza causa una afectación física y psíquica profunda en la víctima, la cual puede perdurar de entre varias semanas hasta años, dependiendo de varios factores, entre ellos las condiciones psícosociales post-tortura, la disponibilidad de tratamiento oportuno y el reconocimiento de las injusticias cometidas por los responsables.

134. Como vemos el Sr. Tibi padeció serios sufrimientos que derivan, en primer lugar, de los dolores físicos que la tortura ocasiona. En palabras de la propia víctima: *"El dolor me había hechos pedazos el cerebro y todo gritaba por dentro"*;[130] *"Estaba 'groggy', como chumado, no tenía las cosas bien claras en mi cabeza"*.[131]. En segundo lugar, del sentimiento de impotencia y abandono en que se encontraba. Y finalmente. por la duración del maltrato. El Sr. Tibi refiere que al menos fue torturado en siete ocasiones y que en muchas de las veces las torturas se prolongaban por períodos de hasta una hora.lv

135. En el certificado médico del Dr. Samuel Gerard Benayoun, se constató que el Sr. Tibi tuvo problemas psicológicos importantes y para dormir, pesadillas frecuentes, se despertaba por la noche cada dos horas, tenía flashbacks permanentes de lo sucedido, tuvo problemas de carácter con irritabilidad, síndrome depresivo y momentos de gran depresión, comportamientos de hiper-vigilancia, no podía soportar ambientes con ruidos fuertes, no podía mantener ningún tipo de relación con la policía, se cansa

---

[129] Informe de la visita del Relator especial sobre la cuestión de la tortura a Azerbaiy.in. E/CN.4/2001/66/Add.1. párr. 115

[130] Narración de los hechos realizada por el Sr, Tibi, pág 7, ANEXO III, VOLUMEN 1.1, DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN.

[131] Ibid.

[132] Ibíd. La Corte Europea ha sostenido que la valoración de la gravedad de los malos tratos *"es relativa: depende de todas las circunstancias del caso, como la duración del trato"*. Corte EDH, Caso *Keeua»: r. UK*. 3 de abril de 2001, párr. lOS. Igualmente el Comité de Derechos Humanos ha considerado que *"la determinación de qué constituye un trato inlJllma/lo o degradante en el sentido del Art. 7 depende de todas las circunstancias del caso. como la duración y laforma del trato"*. *Vuolanne c. Finlandia,* 7 de .rbril de 1989, p.irr. 9.2.

fácilmente.[133] Finalmente. el informe concluye que el Sr. Tibi presenta además de las cicatrices físicas, un estrés traumático mtenso.t-"

136. Por todo lo anterior, los representantes de la víctima solicitamos a la H. Corte que declare que el Ecuador torturó física y psicológicamente al Sr. Tibi en perjuicio de sus derechos consagrados en el Arr. 5.1 y 5.2 de la Convención Americana.

C. Las condiciones carcelarias a las que se vio sometido Daniel Tibi constituyen tortura

137. El Sr. Tibi rambien vio conculcado su derecho a la integridad personal por las condiciones carcelarias inhumanas, crueles y degradantes a las que fue sometido. El Sr. Tibi sufrió de hacinamiento, estuvo recluido en una celda con más de 100 personas en donde los servicios higiénicos eran a la vez duchas, no se le proporcionó alimento en los primeros días de su detención y durmió en el suelo por cerca de 6 meses.

138. El Art. 5.2 de la Convención Americana específicamente apunta que *"Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano"* La Corte Interamericana ha considerado que *"los términos del artículo 5.2 de la Convención toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. "*[135] La Corte manifestó que el aislamiento riguroso, el hacinamiento con otros presos en una celda pequeña, sin ventilación ni luz natural, el régimen restrictivo de visitas. y la atención médica deficiente constituyen una violación al derecho a la integridad personal.P"

139. Asimismo, los instrumentos y órganos de protección de la Organización de las Naciones Unidas han señalado que tratar a los presos con humanidad y respeto a su dignidad es una norma fundamental y de aplicación universal, *"tal norma, como mínimo, no puede depender de los recursos materiales disponibles en el Estado Parte* ".[137] En este sentido, el Comité de Derechos Humanos ha dispuesto que:

> *"De conformidad ccn las reglas 10.* 12, 17. 19 *Y 20 que figuran en las Reglas Minimas para el Tratamiento de los Reclusos. todo recluso debe disponer de una superficie y un volumen de aire mínimos, de instalaciones sanitarias adecuadas. de prendas que no deberán ser en modo alguno degradantes ni humillantes, de una cama individual y de una olimentación cuyo valor nutritivo sea snficiente para el mantenimiento de su salud y de sus [uerzas. Debe hacerse notar '11/(' .1011 es/os requisitos mínimos que en opinián del Comité,*

---

[133] Examen médico legal del Dr. Samuel Gcrard Benayoun, de 7 de noviembre de 2001, pág. 4. Anexo 35.

[134] Ibib. Pág. 7.

[135] Corte IDH, Caso *Castillo Petruzzi*, Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie e No. 52, párr. 195.

[136] Corte ¡DI 1, Caso *Cantora! Benaiides.* Sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie C No. 69, párr. 85.

[137] Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación General 21, párr, 4.

deben cumplirse siempre. aunque consideraciones económicas o presupuestarias puedan hacer dijici! el cumplimiento de esas obligaciones".[138]

140. La principal preocupación con respecto a las condiciones carcelarias en el Ecuador es la grave sobrepoblación de presos en los establecimientos carcelarios. Al respecto, la Comisión Interamericana reveló cifras oficiales de la primera mitad de 1994 que indican que algunas instalaciones alojaban más del doble del número de internos proyectados para el espacio.[139] Esta situación ha permanecido en el tiempo. En un informe del año 2000 la FIDH observó:

"Calor excesivo. olores nauseabundos. higiene deficiente. escase: de medicinas y comida insuficiente se añaden a las miserias de las personas detenidas forzadas a vivir ese tipo de condiciones de detenc'án".[140]

141. El Ecuador cuenta con treinta y tres centros de rehabilitación los que han sido calificados como *"insuficientes para albergar a las casi diez mil personas privadas de libertad, quienes en sil mavoria se encuentran con prisión preventiva".*[141]

"Los treinta y tres centros I/(J fueron construidos para albergar a detenidos. no tienen la infraestructura básica necesaria CO/110 alcantarillado. servicios higiénicos, instalaciones eléctricas, enure otros. suuación que les impide vivir corno seres humanos. Por otro lado. los servicios laborales educativos. de saludfisicu y psicológica, por señalar solo algunos, son insuficientes. cuando no inexistentes. A esto se suma, además, una desordenada estructura administratIva. no solo de los celllros, sino también de la Dirección Nacional de Rehnbiiítocián Social, producto también de la indejinición de una política criminai, que impide a las personas privadas de libertad conocer la nonnariva que regula el centro 1'11 que permanecen, reinando de esta forma UII caos ell las relaciones de los internos con las autoridades".[142]

---

[138] *Albert Womah c. Camerún.* 21 de julio de 1994, p.irr. 9.3. La declaración del Comité respondía a la afirmación del gobierno de que las condiciones en las prisiones del país *"están necesariamente relacionadas con el nivel de desarrollo económico y social del Camerún"* (párr. 6.2.)

[139] CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el Ecuador, 1997, Capítulo Vl. La situación de los derechos humanos de las personas detenidas en el marco del sistema penitenciario. Específicamente el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, lugar en donde estuvo encarcelado el Sr. Tibi por más de dos años, tiene una capacidad proyectada de 1.290 personas, pero estaba alojando 2.096 detenidos y durante la segunda mitad de 1994, se informó que estaba alojando a 2.600 internos. (Ibíd.)

[140] Federación Internacional de los Derechos Humanos, Misión Internacional de Observación. *Las cárceles en Eatador.* junio de 2000, No, 293/3, pág 15 Anexo 30.

[141] César Duque Chasi, Raúl Naranjo Naranjo, Grimancza Narv.iez Silva, Ramiro Rivadencira Silva, AAJ, UNESCO, ILDIS, *Derechos de los Detenidos.* Propuesta de Plan Operativo de Derechos Humanos del Ecuador, hrtp://www.ildis.rrg.ec/planddhlr/plan l-lre.htm. Anexo **31.** Insuficiencia que se atribuye a *"la ausencia de una política criminal congruente y uniforme y que por ello no es únicamente de orden [isico, la vida en la cárcel está caracterizada por hacinamiento. insalubridad, promiscuidad, etcétera."* (Ibíd.)

[142] César Duque Chasi, Raúl Naranjo Naranjo, Crimaneza Narv.icz Silva. Ramiro Rivacleneira Silva, AAJ, LlNESCO, ILDIS, *Dered.os de los Detenidos.* Propuesta de Plan Operativo de Derechos Humanos del Ecuador, http://www.ildis.org.ec/planddhh/plan14te.htm. Anexo **31.**

142. En el Ecuador el manejo de las cárceles está encargado a la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS). y *"Itjan sorprendente como puede parecerlo. el Estado ecuatoriano no abona nada por la habilitación o la gestión de los establecimientos penitenciarios."*[143] El presupuesto de la DNRS. incluido sus necesidades administrativas, *"procede de un cierto porcentaje (10%) de las multas cobradas por los bancos cuando la gente extiende cheques protestados'tw* Lo cual resulta evidentemente insuficiente para brindar un trato adecuado a todos los reclusos.

143. Esta falta de recursos. sumada al desinterés de las autoridades estatales, trae como consecuencia un tetal descuido de las condiciones carcelarias de los reclusos. quienes dependen totalmente del mundo exterior para sobrevivir. y aquellos que no cuentan con amigos o familia que les proporcionen algún tipo de auxilio, *se* encuentran en el más absoluto abandono.!"

144. El Sr. Tibi ilustra esta situación de graves violaciones a los derechos humanos. En los primeros 45 días de su detención, el hacinamiento fue extremo, tuvo que permanecer en una celda conocida como "la cuarentena" de unos 120m², en compañía de alrededor de 100 reclusos, porque se negó a sobornar a un guardia para que le permita dormir "con seguridacl".14" Los baños cle la "cuarentena" eran a la vez duchas y servicios sanitarios que alrededor de ¡eHl personas usaban. Eso los convertía en lugares insanos y malolientes. Por la noche, varios internos fumaban distintos tipos de sustancias. que sumadas a las emanaciones cle los baños volvían al aire irrespirable.

145. Después de *los* 45 días que estuvo en "la cuarentena", el Sr. Tibi fue transferido al pabellón "atenuado bajo". Se le exigió nuevamente que pague por el "derecho a vivir en una celda", y por segunda ocasión *se* niega a hacerlo, motivo por el cual, permaneció 35 días más en el corredor de! pabellón durmiendo en el sueldo. Finalmente aceptó pagar 20.000 sucres ($90 USD) para entrar en la celda.[147] pero fue expulsado inmediatamente de ella por el interno que la ocupaba. Tuvo que permanecer 3 meses más en los corredores de la cárcel, hasta que mediante el uso de la fuerza se apropió de otra celda, a la que tuvo que literalmente defender, pues otros reclusos *se* la quisieron arrebatar en varias ocasiones

---

[143] Federación Internacional de l.is Derechos Humanos, Misión Internacional de Observación, *Las cárcele en Ecuador*, junio de 2000, No. 293/3, pág. 11 Anexo 30.

[144] 1bid.

[145] la CIDH verificó que *"los prisioneros [rrcuentemente dependen de los miembros de su familia. que les llevan comida adicional para sup'ir la insuficiente calidad y cantidad provista en las cárceles. Los prisioneros informaron que aquellos que no pueden contar con la familia o amigos que les proporcionen comida extra, sufren de una inadecuada nutrición como resultado. La Comisión recibió repetidas denuncias acerca de la inadecuada calidad y cantidad de la comida."* (Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el Ecuador, Capitulo Vl)

[146] Narración de los hechos realizada por el Sr. Tibi, pág. 3. (ANEXO III, VOLUMEN 1.1, DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN)

[147] Demanda de la Cormsión, pág. 9.

146. Las reglas 9.1 y 86 de las Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos establecen que los presos deberán dormir solos en habitaciones independientes. La Regla 19 dispone que cada recluso disponga de una cama individual. La Regla 10 manda que los locales destinados a los reclusos, especialmente aquellos que se destinan al alojamiento durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de higiene, particularmente en lo que concierne a la superficie mínima.

147. De igual forma, el Sr. Tibi nunca recibió ningún tipo de atención médica o psicológica.t[148] Líneas arriba constatamos la seriedad de las lesiones del Sr. Tibi, muchas de las cuales no hubiesen dejado secuelas tan serias si se hubiese ofrecido atención médica especializada y oportuna. Incluso los propios médicos de la Policía que visitaron al Sr. Tibi verificaron que *"por las lesiones que presenta el reconocido necesita tratamiento y control médico de la especialidad (traumatología y dermatología)".*[149]

148. La Corte Europea ha afirmado que *"las autoridades tienen la obligación de proteger la salud de las personas privadas de libertad"* y que *"la falta de tratamiento médico adecuado"* puede considerarse malos tratos.[150]

149. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos contienen una serie de disposiciones sobre la atención médica a los internos. Específicamente se señala que todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos.[151] También establece que el médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario.[15]! De igual forma se señala que el médico deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención.[153]

150. Además, la cárcel de Guayaquil, lugar en donde estuvo detenido el Sr. Tibi por más de dos años, *"supuestamente tiene clínicas de salud; sin embargo, éstas se encuentran pobremente dotadas en términos de equipos y medicinas."*[154]

---

[148] En palabras de la prooia víctima: *"No recibí curaciones IIIIItCa. Todas mis heridas se infectaban. Trataba de curarme yo mismo".* (Narración de los hechos realizada por e! Sr. Tibi, pág. 9, ANEXO JI!, VOLUMEN!.l, DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN) La Comisión dio por probados estos hechos en las páginas 18 y 46 de su demanda.

[149] Diligencia médico legal, de! 19 de septiembre de 1997, realizada por el Departamento Médico Legal de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Policía Nacional, dirigido al Juez Décimo Octavo de lo Penal del Guayas. **Anexo** 32. Hay que aclarar que la labor de estos médicos no era brindar atención profesional, sino emitir un informe sobre las condiciones físicas del Sr. Tibi.

[150] Corte EDH, *Keenam* r. *UK.* 3 de abril de 2001, párr. 110

[151] Regla 22.

[15] Regla 24.

[153] Regla 25.

[154] CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el Ecuador, Capírulo VI. La situación de los derechos humanos de las personas detenidas en el marco del sistema penitenciario. En

151. Por otro lado, durante los más de 28 meses que el Sr. Tibi estuvo en prisión, no fue separado de los condenados y no se le brindó un tratamiento adecuado a su condición de procesado. Tuvo que compartir su celda y desarrollar sus actividades conjuntamente con reclusos condenados, y en varias ocasiones fue agredido por otros 111ternos.

152. El Art, 5.4 de la Convención Americana dispone:

> *"Los procesados deben ser separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas 110 con[d]enadas"*[153].

153. Según el Comité de Derechos Humanos, la separación de personas acusadas *"es necesaria para recalcar su condición de personas no condenadas; que están también protegidas por la presunción de inocencia'tv»* La misma exigencia se establece en las Reglas 8 y 85 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos-'" y en el Principio 8 del Conjunto de Principios sobre Detención.[158]

154. La Comisión evidenció que *..[l]a proporción de presos dentro del sistema que aún no han sido acusados o sentenciados es más de las dos terceras partes de la población carcelaria",*[159]

155. Esta falta de separación entre condenados y procesados, sumada a la falta de separación de los individuos peligrosos y violentos y al hacinamiento en las cárceles. también produjo que el Sr, Tibi fuera maltratado por otros presos.

---

cuanto al país en su conjunto, la Comisión señaló *"Varias de las instalaciones no han contratado los servicios de un médico para brindar una atención permanente. En general, el servicio médico y odontológico ofrecido no es programado o estructurado, y está disponible dentro de las instalaciones sólo para casos de atención ambulatoria. También se ha informado que debido a limitaciones espaciales y de otro orden, los prisioneros con enfermedades contagiosas permanecen alojados con la pobíación general. Pareceria también, con base en la información recibida en varios centros, que los internos no son examinados respecto de enfermedades contagiosas al ingresar a una instalacion."*

[155] Por su parte, el Art. 1O.2,a del pIDe:p afirma: *"Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales /...]".*

[156] Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación General 21, párr. 9.

[157] Regla 8.- *Los reclusos pertenecientes a cutegorias diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los cstoblecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de s1/ detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir que: /...J b) Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que están cumpliendo condena /...J*
Regla 85.- *1) Los acusados serán mantenidos separados de los reclusos condenados.* 2) *Los acusadosjovenes serán mantenidos separados de los adultos. En principio, serán detenidos en establecimientos distintos.*

[158] Principio 8.- *Las personas detenidas recibirán un trato apropiado a su condición de personas que no han sido condenadas, En consecuencia. siempre que sea posible se las mantendrá separadas de las personas presas.*

[159] CIDH, Informe sobre la sit.iación de los Derechos Humanos en el Ecuador, Capítulo Vl. La situación de los derechos humane-s de las personas detenidas en el marco del sistema penitenciario.

156. El Sr. Tibi refirió que durante Jos 45 días que permaneció en la celda de 120 m² conjuntamente con otros 100 reos tuvo peleas todos los días.[160] Además, tuvo que defender su celda de otros internos que querían arrebatársela. En otra ocasión fue encerrado en una celda de castigo durante un largo periodo de tiempo y fue golpeado y asaltado."! Este particular fue puesto en conocimiento de las autoridades estatales en los siguientes términos:

> *"El miércoles* 19 *de febrero (de 1997J a las 12H3IJ de la noche fui sacado brutalmente de mi celda ubicada en el pabellón 'Atenuado Bajo', en la cual me dedico a desempeñar labores de artesanía, acusándome de un supuesto intento de [uga, lo cual es absolutamente falso pues como he narrado anteriormente espero* mi *libertad en una fecha muy próxima. Fui trasladado al sitio llamado 'de castigo' en el cual se mezcla a personas sin importar el nivel cultural y grado de peligrosidad. Como era de esperarse, fui agredido físicamente con arma cortopunzante (machete) por cinco individuos entre los cuales se encuentra el afamado "descuartizador' conocido por sus horripilantes crímenes cometidos en centros de detenrián. Me defendí como pude. pero esos individuos amenazan de asesinarme"*[162]

Y agregó:

> *"Los guías penitenciarios actúan asi (0/1 las solas intenciones de atemorizar a los detenidos para luego exigirles fuertes cantidades dI' dinero. que llegan hasta el millón de sucrrs, convirtiendo este sitio en* 1111 *lugar muy lucrativo para el personal de guías (...J"*[163]

157. Según las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos. El Estado tiene el deber de mantener el orden y la disciplina, así como a garantizar la seguridad de los presos.[164] De igual forma, las Reglas disponen que todo tipo de sanciones disciplinarias, así como su duración deberán ser tipificadas en una ley o en un reglamento, y que además se señalará cuál es la autoridad competente para imponerla.[165]

158. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha vinculado el derecho a no sufrir torturas ni malos tratos en virtud del Art, 7 del PIDCP a la obligación de proporcionar protección, mediante medidas *"legislativas o de otra Indole"*, contra la tortura y Jos malos tratos intlingidos por particulares.[166]

---

[160] Narración de los hecl-os realizada por el Sr. Tibi, pág. 3, ANEXO lJI, VOLUlvlEN 1.1, DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN.

[161] Ibid.

[162] Carta del Sr. Tibi al Director Nacional de Prisiones de fecha 24 de febrero de 1997, ANEXO III, VOLUMEN I.2.H) DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN.

[163] Ibid.

[164] Regla 27.

[165] Regla 29. Por su parte, el CPT ha afirmado que las prisIones deben tener *"procedimientos disciplinarios claros"* entre los que figure *"el derecho de los presos a ser escuchados con respecto a los delitos que se les imputan y* 11 *recurrir a una autoridad superior contra cualquier sanción impuesta"* (CPT, *2nd General Report*, p.irr, 55. Una disposición similar se encuentra en la Regla 30 de las Reglas Minirnas.)

[166] Comité de Derechos Humanos de la ONU. Observación General 20, párr, 2.

159. De las varias en-revistas que tuvo la FIDH en el Ecuador verificó que ninguna ley o reglamento, tienen una determinación explícita sobre sanciones. *"Entonces todas las decisiones de ese tipo son enteramente discrecionales. Por lo tanto deja la posibilidad a los abusos y las violaciones de derechos de las personas detenidas".*[167]

160. Esa discrecionalidad de los guías penitenciarios permite que ellos usen las celdas de castigo para beneficio propio. En efecto, utilizan directa o indirectamente a otros presos con el fin de atemorizar *y* maltratar a ciertos reclusos *y* después solicitarles dinero para cesar o no repetir el castigo. Lo anterior es contrario a su deber de velar por el respeto de los derechos de los reclusos y los hace responsables de los actos de los particulares.

161. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmó (lue la responsabilidad del Estado se compromete cuando *"las autoridades no toman medidas razonables para evitar el riego de malos tratos cuya existencia conocían o deberian haber conocido"*[168]

162. La Corte Interamericana desde sus primeras sentencias ha reconocido que *"un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado. por ejemplo. por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión. puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado. no por ese hecho en sí mismo. sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos parla Convención. "*[169]

163. La prohibición de la tortura *y* los malos tratos consagrada en la Convención Americana implica no sólo la obligación de impedir que funcionarios públicos inflijan tortura y malos tratos. sino también la obligación de tomar medidas para proteger a las personas bajo su jurisdicción contra actos de tortura y malos tratos cometidos por particulares. La Comisión Interamericana tuvo por probado que en el Ecuador esto no sucede y que *"mueren unos cinco a ocho detenidos por semana debido a la violencia y a las enfermedades".*[170]

164. En el presente caso se observa la ausencia total de medidas de orden y disciplinas en la cárcel. Es más, las autoridades ecuatorianas no adoptaron medida a.lguna para garantizar la integridad física del Sr. Tibi una vez alertadas de las agresiones que sufrió a manos de terceros. Al contrario, el Sr. Tibi refiere que los guardias

---

[167] Federación Internacional de los Derechos Humanos, Misión Internacional de Observación, *Las cárceles en Eatador,* junio de 2000, No. 2,)3/3, p;ig, 14. Anexo 30. Además la FIDH señaló que cuando *"el calabozo representa la única sanción disciplinaria posible, resulta que el poder discrecional de las autoridades carcelarios en materia disciplinaria conllevo una situación en la que los seres humanos 50/1 aún más maltratados que animales por un simple error disciplinario ".* (pág. 15)

[168] Corte EDH, *Mahmut Kaya r. Turkey,* párr. 115.

[169] Corte IDH. Caso ¡ *'elásquez Rodriguez,* Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párr. 172; Corte JDH, Caso *Godinez Cruz,* Sentencia del2n de enero de 1989, Serie C No. 5, párrs. 181-182; Corte IDH, Caso *Caballero Delgado y Santana.* Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, párr. 56.

[170] Demanda de la Comisión, pág. 15.

deliberadamente lo encerraron con algunos reclusos violentos que lo maltrataron y lo amenazaron de muerte

165. Por todo lo anterior, los representantes de la víctima solicitamos a la H, Corte declare que las condiciones carcelarias que sufrió el Sr. Tibi desconocieron su derecho a la integridad personal, en violación al Art, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana. De igual forma, los representantes de la víctima solicitamos a la H. Corte que declare que el Ecuador es responsable de los maltratos que el Sr. Tibi sufrió a manos de particulares porque faltó a su deber de prevención. Finalmente, los representantes de la víctima solicitamos a la Corte que declare que el Estado mantuvo al Sr. Tibi conjuntamente con condenados y con individuos peligrosos y no fue sometido a un tratamiento adecuado a su condición de persona no condenada, en violación al Art. 5.4 de la Convención Americana.

D. Obligación de prevención, investigación, sanción y reparación

166. Los Estados están obligados a investigar y sancionar los casos de tortura, así como toda otra violación a los derechos humanos. En el Sistema Interamericano, esta obligación nace conjuntamente de varias normas. La norma general está contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana y la obligación específica respecto a los casos de tortura se desprende de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. El Art, 1 de la Convención contra la Tortura dispone:

> *Los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convencion.*

167. Por su parte. el artículo 6 de la Convención contra la Tortura establece que

> *De conformidad con lo dispuesto en fl articulo 1, los Estados panes tomarán medidas efectivos para prevenir y sancionar la Tortura en el ámbito de su jurisdicción.*
> *Los Estados Partes se asegurarán de que Todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad.*
> *Igualmente, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción.*

168. Finalmente, el articulo 8 de la Convención contra la Tortura añade:

> *Los Estados Panes garuntizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito d.: su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparrialmente.*
> *Asimismo, cuando exista denuncia o razán fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito di' su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre e{ caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.*

> *Una vez agotado el ordenamiento juridico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado.*

169. La importancia de poner fin a la impunidad se ha puesto de relieve en reiteradas resoluciones de la ONU, que insisten en que *"quienes instigan, ordenan, toleran o perpetran actos de tortura* [oo,} *deben ser declarados responsables de esos actos y severamente castigados'.m*

170. En este mismo sentido, en el caso *Bámaca Velásquez* la Corte sostuvo:

> *"De acuerdo COI/ el articulo J de la Convención contra la Tortura V otros Traros o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. la tortura implica que se inflijan a una persona penas o sufrimientosfisicos o mentales drliberadamente dirigidos a intimidar, castigar, investigar () prevenir crímenes, penar su comision o con cualquier otrofin".*[172]

171. Tnc1uso cuando, en ciertas circunstancias, pueda resultar difícil la investigación de hechos de tortura, la obligación de investigar

> *"debe emprendersc con seriedad y VO como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber juridico propto y no como UI/<I simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativu procesal de la victima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aU/1 los particulares, pues, si sus hechos /10 .10/1 investigados CO/1 seriedad, resultarian, el! cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometeria la responsabilidad internacional del Estado.../73*

172. En 1997, los médicos del Departamento Médico Legal de la Policía Nacional comprobaron las lesiones del Sr. Tibi y remitieron su informe al Juez Décimo Octavo

---

171 Resolución 56/143 de la asamblea General, de 19 de diciembre de 2001, párr. 2, y resoluciones anuales previas de la Asamblea General y de la Comisión de Derechos Humanos sobre *La torturay otros tratos openas .rueles. inlutmanas o degradantes*. En su Observación General 20 sobre el articulo 7 del PIDCP el Comité de Derechos Humanos considero: *"El artículo 7 debe interpretarse conjuntamente con el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto. En sus informes. los Estados Partes deberán indicar cómo sus legislaciones garantizan efectivamente el cese inmediato de todo acto prohibido por el artículo 7, asi COIIIO la roncesion de una reparación adecuada. El derecho a presentar denuncias contra los malos tratos prohibidos por el articulo 7 deberá ser reconocido en derecho interno. Las denuncias deberán ser investigadas COI/ celeridad e imparcialidad por las autoridades competentes afin de que el recurso sea eficaz. Los informes de los Estados Partes deberán proporcionar información concreta sobre los recursos de que disponen las victimas de malos tratos y sobre los procedimientos que deban seguir los demandantes, asi como datos estadisticos sobre el número de denuncias y el curso que se ha dado a las mismas."* Observación General 20, p.irr. 14.

172 Corte IDH, Caso *Bámaca velásquez*, Sentencia de 25 de noviembre de 2000, Serie C No. 70, párr. 156

173 Corte JDH, Caso *Tiaisquez Rodríguez*. Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párr, 177; Corte TDH, Caso *Godinez Cruz*. Sentencia del 20 de enero de 1CJ89, Serie C No. 5, párr. 188.

de lo Penal del Guayas.[174] Esto ocurrió a más de un año de que el Sr. Tibi fue torturado. El hecho que no se denunció antes la tortura es consecuencia directa de la falta de atención médica durante e! primer año de detención de! Sr. Tibi y la desidia de las autoridades ecuatorianas. Es más. no se ha verificado hasta la presente fecha que el Juez haya realizado algún tipo de investigación para esclarecer el motivo de las lesiones. Igualmente. e! Sr. Tibi denunció personalmente los abusos, maltratos y amenazas de muerte que sufrió por parte de otros internos!" y tampoco consta que el Estado haya iniciado algún investigación al respecto.

173. El informe médico legal es un indicio suficiente para que las autoridades Judiciales inicien una investigación seria para comprobar la existencia o no de tortura y, dado el caso, sancionar a los responsables. Esto es de vital importancia cuando se trata de personas privadas de su libertad, porque son más vulnerables a sufrir abusos y están bajo el total control de! Estado. En este sentido, el Comité contra la Tortura consideró que una queja ante un médico y la declaración de la víctima ante un juez dos años después de los hechos de tortura deberían haber sido suficientes para que se iniciara una investigación.[176]

174. Hay que aclarar que conforme a la legislación ecuatoriana el delito de lesiones y de tortura permiten una investigación de oficio, sin que sea necesario que la víctima presente formalmente una denuncia,'?" y conforme al Comité contra la Tortura, *"basta la simple alegación por parte de la víctima, para que surja la obligación del Estado de examinarla pronta e imparcialmente".*[178]

175. En consecuencia, el Estado desconoció su obligación de investigar la tortura y los malos tratos conforme el Art, 1.1 de la Convención Americana y los Art. 1,6 Y8 de la Convención Interarnericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y continúa haciéndolo, porque hasta la presente fecha no se ha iniciado ningún proceso investigativo, no se ha sancionado a ningún responsable y no se ha reparado a la víctima por los perjuicios sufridos.

E. Prohibición de la tortura en la ley interna

176. La Constitución ecuatoriana vigente en la época de los hechos prohibía la tortura en su Arr. 22.1 en los siguientes términos:

---

11 Diligencia médico legal, del :9 de septiembre de 1997, realizada por el Departamento Médico Legal de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Policía Nacional, dirigido al Juez Décimo Octavo de lo Penal del Guavas. Anexo 32.

175 Carta del Sr. Tibi al Director nacional de Prisiones de fecha 24 de febrero de 1997, ANEXO lII, VOLUMEN I.2.H) DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN.

176 Comité contra la Tortura, *Encarnación Blanro Abad c. España,* 14 de mayo de 1998, párr. 8.3.

177 El Arr. 14 del Código de Procedimiento Penal afirmaba: *"La acción penal es de carácter público. En general, se la ejercerá de oficio, pudiendo admitirse la acusación particular".*

178 Comité contra la Tortura. *lrme Urroa Parot c. Hspuña,* 2 de mato de 1995, párr. 10.4.

"...Quedan prohibidas las torturas y todo procedimiento inhumano o degradante"

177. El Código Penal en su Capítulo VI, "DE LOS DELITOS RELATIVOS A LAS DECLARACIONES DE LOS SINDICADOS O DE SUS PARIENTES". contiene ciertas disposiciones sobre los tormentos de los prisioneros y señala que los que *"expidieren o ejecutaren la orden de atormentar a los presos o detenidos. con incomunicación por mayor tiempo que el señalado por la ley. con grillos. cepo, barra, esposas. cuerdas. calabozos malsanos u otra tortura, serán reprimidos con prisión de uno a cinco años e interdicción de los derechos politicos por igual tiempo."* (Art. 205). Y ni *"la inseguridad de las cárceles. ni lo temible del detenido o preso. ni la conducta rebelde de éste, podrán servir de disculpa en los casos del artículo anterior. "* (Art. 206).

178. En el Capítulo Irl, "DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL", el Art. 187 dispone que *"Icjuando la persona arrestada o detenida hubiere sufrido tormentos corporales, el culpable será reprimido con tres a seis años de reclusión menor. "* La pena aumenta si las lesiones son permanentes o sí *"los tormentos hubieren causado la muerte"*

179. En el capítulo VI, "DE LOS DELITOS RELATIVOS A LAS DECLARACIONES DE LOS SINDICADOS O DE SUS PARIENTES", el Art. 204 pena al *"juez o autoridad que arrancare declaraciones o confesiones contra las personas indicadas en el artículo anterior Isindicado, cónyuge, ascendientes. descendientes o parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad], por medio de látigo. de prisión. de amenaza o de tormento"*. La pena se .imita hasta cinco años de prisión. Se reprime con la misma pena a los agentes de policía o de la fuerza pública que incurrieren en la misma infracción.

180. En cuanto a la legislación policial. el Código Penal Policial tipifica como sa.nción el someter a alguien a tormentos corporales (Art. 145); y señala que quien *"arrancare declaraciones o confesiones* {oo.] *por medio del látigo. de prisión. de amenaza de tormento, será reprimido con reclusión menor ordinaria de tres a seis arios y privación de los derechos de ciudadanía por un tiempo igual al de la condena. "* (Art. 153).

181. Como vemos, la legislación ecuatoriana tiene serios vacíos en la tipificación y sanción de la tortura y los malos tratos.[179]

---

[179] Respecto a lo anterior, en 1993 el Comité contra la Tortura recomendó al Ecuador que de acuerdo con el Arr, 1 de la Convención contra la Tortura, sería preferible que la legislación ecuatoriana (que en esos momentos estaba siendo reformada) contenga una definición especifica de tortura. Igualmente, señaló que del informe que presentó el Estado no está claro si se cumple con el Art. 1 de la Convención contra la Tortura porque la legislación ecuatoriana no contempla la tortura psicológica, ni tampoco la pruhibición de aceptar el cumplimiento de órdenes superiores como excusa. Finalmente, el Comité señaló que el Estado no aportó mayor información sobre el cumplimiento de. los demás artículos de la Convención contra la Tortura Surnmarv record of rhe firsr pan of rhe 164th meeting: Ecuador. CAT/C/SR.164 (Summary Record) Eleventh session 15 de noviembre de 1993, párr. 53. Anexo 38.

182. En cuanto al sujeto activo, los artículos citados sólo señalan que serán sancionados los jueces y las autoridades que tengan a su disposición a presos o detenidos. Los estándares internacionales establecen que cualquier funcionario o empleado público que ordene, instigue o induzca a la tortura o la comenta directamente o pudiendo impedirlo, nc 10 haga, es responsable del delito de tortura.P? Igualmente, las personas particulares que a instigación de los funcionarios o empleados públicos ordenen, instiguen o induzcan a su la comisión de tortura, la cometan directamente o sean cómplices, también son responsables penalmente.l'"

183. En cuanto al sujeto pasivo, las normas ecuatorianas señalan que sólo los presos, detenidos y declarantes en el proceso penal son víctimas de tortura. Los estándares internacionales establecen que cualquier persona que sea sometida a penas o sufrimientos físicos o mentales es víctima de tortura.[182]

184. En cuanto a la acción punible, las normas ecuatorianos se refieren únicamente al "tormento". Los estándares internacionales consideran que también es tortura la aplicación de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental. aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.[183] De igual forma, no aparece de los artículos citados que la tortura psicológica esté sancionada.

185. Finalmente. en cuanto a la pena. en algunas ocasiones se sanciona la tortura con cinco años de prisión y en otras. va de tres a seis años de reclusión. Los estándares internacionales señalan que las penas de la tortura deben dar cuenta de la gravedad de la misma y por tanto deben ser severas.l"! En consecuencia, la legislación ecuatoriana al menos no debe permitir la excarcelación inmediata de los perpetradores.P>

186. La doctrina especializada ha señalado que:

> *"r! contexto correcto en el que hay que situar la tortura es la relación Estado-individuo, particularmente en aquellas situaciones en las que éste último se encuentra en una situacion de indefensión o de inseguridadfrente a los representantes del Estado. Estas situaciones. sin embargo, 1/0 deben quedar restringidas al desarrollo de una investigación judicial o policial. ya que las posibilidades de situaciones de desvalimiento o inferioridad entre individuo y Estado son más amplias.* {...] *El criterio rector para interpretar este delito debe ser ahora, por tamo, el abuso :11' poder por parte del funcionario pero referido a los particulares. Es decir, el ataque a los derechos fundamentales de los ciudadanos en el delito de tortura se*

---

[180] Arr. 3.a de la Convención Inrerarnericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
[181] Arr. 3.h de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
[182] Art. 2 de la Convención Inreramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
[183] Art. 2 de la Convención Inrerarnericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
[184] Art. 6 de la Convención Inrerarnericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
[185] Así pues, la tortura debe siempre sancionarse con penas de reclusión, puesto que de conformidad con el Arr, 180 del Código de Procedimiento Penal *"No se librará auto de prisión preventiva. (1 se revocará el que se hubiese dictado, en los procesos que tengan por objeta delitos sancionados con prisión, cuando el sindicado a el procesado rindirrr raurián a satisfacción del Juez competente"*

> *configura como un ataque cualificado por la condición funcionarial del sujeto activo que, como tal, tiene e: deber precisamente de prOlf'ger con más énfasis estos derechos [une]amente]es."*[186]

187. Por ello, la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos en virtud del derecho internacional debe reflejarse en la legislación nacional. Al respecto el Art. 2 de la Convención Americana dispone:

> *Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencion01ios en el artículo I no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, coll arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efrctivos tales derechos y libertades.*

188. Esta Honorable Corte ha señalado que

> *En el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos 11lImmlOs debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas. Esta norma es universalmente aceptada, con respaldo jurisprudencial. La Convención Americana establece la obligación general de cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de dicha Convencián, para garantizar los derechos en el/a consagrados. Este deber general del Estado Parte implica que las medidas de derecho interno hall de ser efectivas (principio del effet utile}: Esto significa que el Estado ha de adoptar todas las medidas para que lo establecido en la Convencián sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno, tal como lo requiere el artículo 2 de la Convención, Dichas medidas sólo son efectivas cuando el Estado adapta su actuacián a la normativa de protección de la Conl'ención.*[187]

189. Igualmente, la H. Corte ha señalado que lo establecido por el artículo 2 de la Convención Americana,

> *Implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantias previstas en la Convención. Por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantias.*[188]

190. El Estado ecuatoriano aún no ha adaptado el tipo de tortura y los malos tratos a los estándares internacionales ni los ha sancionado con penas adecuadas a la gravedad de los hechos, pese a que se comprometió a hacerlo cuando ratificó algunos tratados y convenios mtemacionales.[189]

---

186 IV[UÑOZ CONDE, Francisco, *Derecho Pena'. Parte Especial,* l-Ira. edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pág 182 -183

187 Corre IDH, Caso *"La Ultma Tentacion de Cristo",* Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie e No. 73, párr, 87. *e/r0* Corte lDH, Caso *Baena Ricardo y Otros,* Sentencia 3 de febrero de 2001. Serie C No. 72. párr. 179.

188 Corte IDH. Caso *Buena Ricardo y Otros,* Sentencia de 3 de febrero de 2001, Serie C No. 72, párr. 180.

189 Así por ejemplo, el articulo 4 de la Convención contra la Tortura y Otros Traros o Penas Crueles, Inhumanos o Degrndanres, vigente para el Ecuador desde el 30 de marzo de 1988. Del mismo modo,

191. La obligación estatal de tipificar adecuadamente el delito de tortura fue reafirmada con la ratificación de la Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en 1999. Pero. hasta la fecha eso no ha sucedido.

192. Por lo tanto, solicitarnos a la H. Corte que declare que el Estado ecuatoriano ha desconocido el Art. 2 de la Convención Americana y el Art. 6 de la Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

F. Violaciones a la integridad personal a la familia del Sr. Tibi

193. Esta Corte ha señalado, en otras oportunidades, que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, victimas.t?"

194. La Honorable Corte ha reconocido que la tortura de una persona trae consecuencias adversas para sus familiares.'?' Asimismo, ha fijado ciertos criterios para que los familiares de la víctima sean considerados, a su vez, en víctimas. En el caso *Bámaca Velásquez*, la Corte estableció:

> *"Entre los extremos a ser considerados se encuentran también los siguientes: la proximidad del vinculo familiar, las circunstancias particulares de la relación con la victima, el grado en el cual el familiar fue testigo de los eventos relacionados con la desaparición. la forma en que el familiar se involucró respecto a los intentos de obtener injormación sobre la desaparición de la victima y la respuesta ofrecida por el Estado a las gestiones tncoadas".*[192]

195. Siguiendo los parámetros antes citados, solicitamos que las personas más cercanas al Sr. Tibi: la Sra. Beatrice Baruet, sus hijas Sarah Vachon y Jeanne Camila Vachon, la hija de ambos, Lisianne Tibi, y el hijo del Sr. Tibi, Valerian Tibi sean consideradas como víctimas en el presente caso, pues se ha vulnerado su derecho a la integridad psíquica y moral como consecuencia directa de la detención ilegal y arbitraria del Sr. Tibi; de la incertidumbre de no saber el paradero del Sr. Tibi durante más de una

---

los Convenios de Ginebra de 1949, vigentes para Ecuador desde 1954, exigen que la tortura se defina corno crimen de guerra en la legislación nacional. El Estatuto de Roma, firmado por el Ecuador el 5 de febrero de 2002, dispone en los Arts. 1 y 17 que los Estados son quienes tienen la responsabilidad pnmordial de procesar a los resoonsables de actos considerados delitos en virtud de dicho Estatuto. Para ello, un Estado tiene que incluir estos delitos en la legislación nacional o autorizar a sus tribunales nacionales a aplicar directamente el derecho internacional.

[190] Corte lDH. Caso *.luaN Humberto Sánchez*, Sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 101; Caso *Bámaca Velásquez*, Sentencia de 25 de nc.viernbre de 2000, Serie C. No. 70, párr. 160; Caso *Cantora! Benaiides*, Sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie e No (;9, p:irr. *105; Caso de lo) "Niños de la Calle"* (1 *'illagrán Morales y otros].* Sentencia de 19 de noviembre de 1999, Serie e No. 63, párr. 175; y *Caso Castillo Páez*, Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43, párr. 59.

[191] En este sentido ver, Corte IDH, Caso 1'illagrán *Morales» Gtms.* Sentencia de 19 de novbiernbre de 1999, Serie C No. 63. párrs. 174, 177

[192] Corte IDH. Caso *Bámaca 1'elásquez.* 25 de noviembre de 2002. Serie C No. 70, párr. 163.

semana; de la angustia generada al observar las marcas de violencia extrema que mostró el Sr. Tibi y las misérrimas condiciones carcelarias a que fue sujeto; de la separación familiar durante el tiempo de prisión, exacerbada aún más por la distancia física innecesaria entre el lugar de detención y el lugar de residencia de la familia; de la falta de investigación y sanción de los responsables de estos hechos; de la lentitud del procedimiento penal y las arbitrariedades dentro del mismo; y, de la certeza de saber que el Sr. Tibi era inocente y a pesar de todo ver cómo el aparato estatal buscaba a toda costa su culpabilidad.

196. La Sra. Beatrice Baruet, contaba con tres meses de embarazo cuando el Sr. Tibi fue detenido. Desconoció el paradero de su esposo por siete días hasta que finalmente pudo entrevistarse con él en la "Penitenciaría del Litoral". Ella realizó aproximadamente 74 viajes a la ciudad de Guayaquil para visitar al Sr. Tibi y llevarle comida. Todos sus fines de semana y sus vacaciones las pasó en la cárcel junto a su esposo. Además, sobre ella cayó el peso de mantener a la familia. Trabajaba por las mañanas y después se encargaba de los trámites de defensa del Sr. Tibi (entrevistas con los abogados, preparación de documentos, ete.). Tenía que cuidar a sus hijas y dado los problemas financieros de la familia tuvo que enviar a su hija mayor, Sarah, a Francia. Sufrió la estigmatización social por la detención del Sr. Tibi.[193] Fue testigo de las lesiones que presentó su esposo. Y fi.nalmente su relación con el Sr. Tibi terminó luego de que él fuera liberado.

197. Sarah, la hija mayor de la Sra. Baruet, quien en ese entonces tenía 12 años de edad, regresó a Francia y permaneció cerca de dos años sin sus padres. El Sr. Tibi refiere que la niña tuvo problemas escolares y afectivos. Tuvo sentimientos de abandono y le costó adaptarse a Francia, dado que no conocía muy bien el idioma porque vivió casi toda su vida en el Ecuador.[194]

198. Jeannc Camila, la segunda hija de la Sra. Baruet, de 6 años de edad, era quien acompañaba a su madre a la cárcel para visitar al Sr. Tibi. En la Navidad de 1995 fue testigo de una pelea carcelaria que dio como resultado 4 muertos y 16 heridos. La niña quedó traumatizada, sufrió de pesadillas y de ansiedad y desde ese momento no quiso regresar a la cárcel.[195]

199. Lisianne, la menor de las pequeñas, nació cuando el Sr. Tibi estaba detenido. No contó con la presencia de su padre durante sus primeros dos años de vida, y en varias ocasiones tuvo que ir a la cárcel y estar sometida a un ambiente insalubre y peligroso para una recién nacida.[196]

---

[193] Ver, Recuento de los sufrimientos de la familia del Sr. Tibi, Anexo 23.
[194] Ibid.
[195] Ibid.
[196] Ibíd.

200. Finalmente, estaba previsto que Valerian, el hijo del Sr. Tibi que en ese entonces contaba con 11 años de edad, vaya al Ecuador en el verano de 1996; no obstante, dado que el Sr. Tibi fue detenido, no lo pudo visitar y no lo vio por más de dos años, El Sr. Tibi retiere que Valerian, desde que supo que su padre estaba detenido, perdió toda la confianza en él y hasta hoy no mantienen una relación estable.[197]

201. Cabe resaltar que todo esto generó sufrimiento, angustia, inseguridad, frustración e impotencia. razón por la cual solicitamos que los familiares del Sr. Tibi sean considerados como víctimas en el presente caso.'?"

Violaciones al derecho a la libertad y seguridadpersonal (Art. 7 de la Convención)

202. El Artículo 7 de la Convención Americana consagra:

> *l. Toda persona tiene derecho a la libertad ya la seguridadpersonales.*
> *2. Nadie puede ser privado de su libertadfísica. salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes (1 por las leyes dictadas conforme a ellas.*
> *3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.*
> *4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargosformulados contra ella.*
> *5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin de/llora, ante Ufi juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercerfunciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.*
> *f... j*

203. Este Tribunal ha señalado que con la protección de la libertad se pueden salvaguardar *"tanto la libertadfísica de los individuos como la seguridad personal, en un contexto en el que la ausencia de garantías puede resultar en la subversián de la regla de derecho yen la privación a los detenidos de lasformas mínimas de protección legal* "199.

204. La Comisión Interamericana, en su escrito de demanda señaló que el Estado ecuatoriano es responsable de la violación del derecho del Sr. Tibi a la libertad personal, dispuesto en el Art, 7 (1) (2) (3) (4) Y (5);[200] por la privación ilegal y arbitraria de la libertad en perjuicio del Sr. Tibi; por la falta de comunicación de las razones de su

---

197 Ibid,

19 Corte IDH, Caso *[uan Htosberto Sánchez,* Sentencia de 7 de junio de 2(J()3, párr. 101; Caso *Bámaca 1 'elásquez.* Sentencia de 2S de noviembre de 2000, Serie C No. 70, párr. 162; Ver tarnbien, Corte EDH, *Kurt v. Turkey,* 25 de mayo de 1998, párrs. 130-134.

19 Corte 1DH, C.1SO *[na» Humberto Sánchez,* Sentencia de 7 de junio de 2003, párr 77; Caso *Cantoral Benaride.* Senn-ncia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 72; Caso *Bámaca r'elásquez,* Sentencia de 25 de noviembre de 2000, Serie C No. 70, párr.T-il; y Caso *de* /o.r *"Notos de la Ca/le"* (1 *'illagrán Morales y otros).* Sentencia de 1') de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 135.

"., Demanda de la Comisión. pág. 19.

detención; por no haberlo llevado sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado para ejercer funciones judiciales; y por no haber sido juzgado o puesto en libertad dentro de un plazo razonable. Los representantes de la víctima y sus familiares estamos plenamente de acuerdo con este análisis, pero pasamos a ampliarlo en ciertos puntos.

A. Detención ilegal (Art. 7.2)

205. De la redacción del Art. 7.2, la Corte Interamericana ha derivado dos tipos de exigencias que toda detención debe cumplir. Así, estableció en primer término:

> ..... *nadie puede verse privado de {a libertad personal silla por las cm/sas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material¡..."*[201].

206. Ello implica que el Art. 7.2, en su aspecto material, obliga al Estado a cumplir con los supuestos tipificados objetiva y previamente en su Constitución Política y en las leyes dictadas conformes a ella. Es decir, el contenido del Art. 7.2 debe ser la adecuación de la conducta de las autoridades al ordenamiento jurídico interno (a la Constitución y a las leyes) al efectuar una detención.

207. En segundo término. la Corte Interarnericana estableció que la detención también debe efectuarse con *"con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal)".*[202]

208. Esta segunda exigencia requiere el cumplimiento de los aspectos formales establecidos en el derecho interno. Así, por ejemplo, orden escrita y fundada de autoridad judicial competente.

209. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano vigente en la época de los hechos, el derecho a la libertad estaba consagrado en el Artículo 19.17 de la Constitución Política del Ecuador, el cual señalaba en el literal (h) que nadie puede ser privado de su libertad salvo en virtud de orden escrita de autoridad competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas por la ley, excepto en el caso de un delito flagrante, en cuyo caso una persona no puede ser detenida sin orden judicial por un término mayor a 24 horas.[203] Igualmente el literal (i) del mismo Art. 19.17 señalaba que *"toda persona será irformada inmediatamente de la causa de su detención".*

210. El Código de Procedimiento Penal del Ecuador consagraba las medidas requeridas para efectuar una detención. El artículo 172 del Código exigía para la

---

[201] Corte ¡DH, Caso *Gangaram Panday,* Sentencia de 24 de enero de 1998, párr, 47 (destacado agregado).

[202] lbid.

[203] :\rt. 19. 17.h).- *Nadie será privado de* sil *libenad sino ell virtud de orden escrita de autoridad competente, en los casos, por el tiempo y (011 las formalidades prescritas por la ley, salvo delito flagrante, en cuyo caso tampoco podrá mantenérselr sin fórmula de juicio por más de* 24 *horas: en cualquiera de los casos 110 podrá ser incomunicado por más de* 24 *horas*

detención provisional de una persona con el propósito de investigación que se emita una orden judicial firmada y se establezca la razón de la detención y el lugar y fecha de emisión de la orden.[204] La única excepción al requisito de la orden escrita estaba establecida en el artículo 174 que se refería a la detención de un individuo capturado en flagrante delito.F" El delito fragante estaba definido en el Art, 175 como aquel que se comete en presencia de una o más personas o cuando se lo descubre inmediatamente después de su comisión, si el autor es aprehendido con armas, instrumentos o documentos relativos al delito recién cometido.I'" Una persona detenida por orden Judicial debe ser oficialmente acusada o puesta en libertad dentro de un término de 48 horas; una persona arrestada en delito flagrante debe ser presentada inmediatamente ante un juez.

211. Los representantes de la víctima compartmlOs el criterio de la 1. Comisión cuando señala:

> *"Cuando la Convención refiere direCTlllIU'11I1' ala legislación interna. como en el Art. 7(2). el cnmplimiento de dicna legislación es parte integral de las obligaciones del Estado parte y la Comisión tiene que manifestarse satisfecha de dicho cumplimiento, cuando corresponda. Compete en primer lugar a las autoridades nacionales, en especial a la JUSTicia interna. interpretar y aplicar la ley interna. Sin embrago. como, según el Artículo 7(2.1, el incumplimiento de la ley interna comporta una violación de la Convención, de ello se deriva que la Honorable Corte puede y debe ejercer su competencia para determinar si se ha cumplido con la lev interna",zo:*

212. La propia Comisión ha constatado que en el Ecuador

> *"El hecho de que flus] personas encargadas de efectuar los arrestos, 110 busquen y obtengan las ordenes correspondientes, ha sido identiticado COIllO una dejiciencia sistemática. aún por las autoridades nacionales. En una entrevista concedida a un periódico, el Director Nacional de Rchabilitacíon Social afirmó que los jueces de primera instancia 'ni siquiera emiten órdenes de detención. Se cometen una serie de actos*

---

[201] Art. 172.- *Con el objeto de investigar la comisión de un delito, antes de iniciada la respectiva acción penal. el Juez campe/eme podrá ordenar la detención de una persona, sea por conocimiento personal o por informes verbales o escritos de los agentes de la Policía Nacional o de la Policía Judicial o de cualquier otra persona, que establezcan la constancia del delito y las correspondientes presunciones de responsabilidad.*
Es/a detención se ordenará mediante boleta que contendrá los siguientes requisitos:
1.- Los motivos de la detención;
2.- *El lugar y la fecha en que se la expide; y,*
3.- *La firma del Juez campe/eme.*
Para el cumplimiento de la orden de detención se entregará dicha boleta a un Agente de la Policía Nacional u de la Policía Judicial.

[205] Art. 174.- *En caso de delito flagrante cualquier persona puede aprehender al autor y conducirlo a presencia del Juez competente o de un Agente de la Policía Nacional o de la Policía Judicial. En es/e último caso, el Agentr inmediatament» pondrá al detenido a órdenes del Juez, junto con el parte respectivo.*

[206] Art. 175.- *Es delito flagrante el que se comete en presencia de una o más personas o cuando se lo descubre inmediatamente después de su comisión, si el autor es aprehendido con armas, instrumentos o documentos relativos al delito recién cometido.*

[207] Demanda de la Comisión. pág. 20.

arbitrarios', Este es un problema para las autoridades carcelarias que no están autorizadas para recibir detenidos sin una orden escrita."[ios]

213. La H. Corte también dio cuenta de esta realidad en el Ecuador cuando *"no fue demostrado que el señor Suáre: Rosero haya sido aprehendido en delito flagrante. En consecuencia, su detención debió haberse producido en virtud de una orden emitida por una autoridadjudicial competente.* "[209]

214. El caso del Sr. Tibi se ajusta a este patrón de violaciones a los derechos humanos. Los peticionarios hemos probado ante la Comisión que el Sr. Tibi fue arrestado el 27 de septiembre ele 1995. mientras conducía su auto en la ciudad de Quito, sin que exista orden de juez competente, como lo manda el Art. 172 del Código de Procedimiento Penal y sin que mediara delito fragante conforme al Arr. 174 del mismo cuerpo de leyes. De igual forma, no consta prueba alguna que demuestre que el Sr. Tibi fue notificado de las razones de su detención, es más, la víctima refiere que se enteró de las acusaciones en su contra gracias al abogado de otro interno, cuando ya se encontraba en la ciudad de Guayaquil. Tampoco compareció inmediatamente ante un juez u otro funcionario que ejerza funciones judiciales.

215. Fn consecuencia, los representantes de la víctima solicitamos a la Corte declare que el Estado es responsable de la violación del Art. 7.1 Y 7.2 de la Convención Americana en perjuicio del Sr. Tibi.

B. Detención Arbitraria (7.3)

216. Según la Convención Americana, la detención tampoco debe ser arbitraria. En el caso *Gangaram Panda»,* la Corte estableció que el concepto de arbitrariedad contenido en el Art. 7.3 prohíbe detenciones *"por causas y métodos que -aun calificados de legales— puedan reputarse incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, ofaltos de proporcionalidad"*[210].

217. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre esas "otras cosas" ha considerado arbitrarias las detenciones injustas, inadecuadas o realizadas violando el debido proceso.[211]

218, Asi, es evidente que el concepto ele "detención arbitraria" no es un concepto cerrado, sino, por el contrario. es un principio que opera cuando, a pesar de estar cumplidos los requisitos constitucionales y legales. se verifica alguna circunstancia incompatible con los derechos y garantías protegidos por la Convención Americana.

---

[209] CIDJ-I, Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador, 1997, Capitulo \11, Derecho a la libertad personal.

[209] Corte IDH, Caso *Suárez Rosero*, Sentencia12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, párr, 44.

[210] Corte IDH, Caso *Gangaram Panday,* Sentencia de 24 de enero de 1998, Serie C No. 8, párr. 47.

[211] Cfr. Cassel, El derecho internacional de los derechos humanos y la detención preventiva, p. 42.

Asi, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha considerado que la necesidad ineludible de ordenar el encarcelamiento de una persona inocente constituye un presupuestc' cuya ausencia detennina la arbitrariedad de la detención.v'"

219. La H. Corte en su caso más reciente, observó que la arbitrariedad de una detención radica en el *"abuso del poder, que tenía como objetivo interrogar, torturar y, eventualmente, ejecutar impunemente a la presunta víctima, situación que se enmarca dentro del patrón de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado en la época de los hechos del caso".*[213]

220. En el presente caso. las autoridades policiales detuvieron al Sr. Tibi en un fragante abuso de poder, que tenia como objetivo involucrarlo en un delito que no cometió e incluso llegar a torturarlo, como en efecto lo hicieron, para que se declare culpable de los hechos que se le imputaban. La detención también fue injusta porque sólo se contaba como prueba en contra del Sr. Tibi de una declaración de otro coacusado (prohibida por el propio ordenamiento interno, Art. 108 del Código de Procedimiento Penal) y presuntamente obtenida también bajo tortura, es decir, irrespetando el debido proceso.

221. La decisión de un juez o un tribunal de privar de la libertad a una persona no es una obligación sino una facultad. y además, no está sujeta a un simple o superficial criterio ele valoración, sino a una motivación que exprese elementos objetivos de convicción, elementos que la CIDH ha bautizado como criterios pertinentes y suficientes.

222. La presunción de que el acusado ha cometido una infracción es una condición *sine qlla 1101/* para la aplicación de la medida cautelar.P" Así, la Comisión ha puntualizado que *"las personas sólo pueden ser detenidas si han participado, o se sospecha que han participado. en actos tipificados como delitos".*[215]

223. No obstante, la mera sospecha de culpabilidad no es criterio suficiente para la continuación de la medida. Las autoridades competentes deberán producir otros elementos adicionales para otorgar validez a la prisión preventiva luego de transcurrido cierto tiernpo.?"

224. La presunClón de que el acusado ha cometido una infracción presupone la existencta de hechos o informaciones apropiadas para persuadir a un observador

---

[212] Así lo ha considerado el Comité ele Derechos Humanos, que afirmó que en todos los casos, la detención debe ser necesaria (Caso *Mukollg,* párr. 9.8, citado por Cassel, El derecho internacional de los derechos humanos y la detención preventiva, p. 42).

[213] Corte IDH, Caso *Juan Humberto Sánchez,* Sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 80.

[214] CIDH, Inf. 2/97, 11 de marzo de 1997, párr.26.

[215] CIDH. Inf. 40/97. Casos 10.941, 10.942 y 10945 c. Perú, 19 de febrero de 1998, párr. 90

[216] CIDH, Inf 2/97, 11 ele marzo de 1997, párrafos 26 y 27.

objetivo que el acusado pudo haber cometido la infracción, y ello depende de todas las circunstancias y características del caso, Es un presupuesto de la coerción penal

> *"la necesidad de pruebas sobre el acaecimiento del hecho delictuoso y la purticipacion punib!e del imputado, oorque sólo la existencia (y consistencia) de aquél/as mostrará como posible la condena, cuyo justo dictado es precisamente lo que las medidas de coercián procuran asegurar [...] Por cierto que mientras más fuerte sea la restricción que importan o mayor sea la extensián en el tiempo de la privacián de libertad, mayor será la entidad pro1Jaran'a que se requenrá".*[217]

225. El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano vigente en la época de los hechos contenía en su Artículo 172 la disposición que mandaba al juez dictar una orden de detención provisional en contra de una persona únicamente "[*eJan el objeto de investigar la comisión de un delito. antes de iniciada la respectiva acción penal"*, siempre y cuando *"por conocimiento personal o por informes verbales o escritos de los agentes de la Policía Nacional o de la Policía Judicial o de cualquier otra persona"*, se estableciera *"la constancia del delito y las correspondientes presunciones de responsabilidadro"* Luego de transcurrido el plazo de 48 horas, el Art. 173 mandaba que *"de encontrarse que el detenido no ha intervenido en el delito que se investiga. inmediatamente se lo pondrá en libertad. En caso contrario. se iniciará el respectivo proceso penal, y* si *procede, se dictará auto de prisión preventiva."*[219] Por su parte, la prisión preventiva estaba regulada en el Art, 177, el cual disponía que la medida se dictará cuando el juez *"lo creyere necesario. siempre que aparezcan los siguientes datos procesales: J.- Indicios que hagan presumir la existencia de un delito que merezca pena privativa de libertad; y, 2.- Indicios que hagan presumir que el sindicado es autor o cómplice del delito que es objeto del proceso."* Y en todos los casos *"se precisará los indicios que fundamentan la orden de prisión."*[220]. Estos indicios, según el Art, 66 del *mismo* cuerpo de leyes deberían ser varios, relacionados, unívocos y directos para que pueda hablarse de un nexo causal entre la infracción y sus responsables.F' Por *su* parte, el Artículo 65

---

[217] CAFFERATA NORES José I., *La influencia de la normativa snpranaaoual sobre derechos humanos de nnel constitucional en el proceso penal argentino*, Centro de Estudios Legales y Sociales, Editores del Puerto, Buenos Aires, Argentina, 2(1110, pág. 1')3. (El destacado pertenece al original.)

[218] Ver *supra* nota 201.

[219] Arr. 173.- *La detención de que trata el artículo anterior no podrá exceder de cuarenta y ocho horas. y dentro de este término, de encontrarse que e! detenido 110 ha intervenido en el delito que se investiga, inmediatamente se lo pondrá en libertad. En caso contrario, se iniciará el respectivo proceso penal. y si procede, se dietará auto de prisión preventiva.*

[220] Arr. 177.- *El Juez podrá dictar auto de prisión preventiva cuando lo creyere necesario, siempre que aparrzcan los siguientes datos procesales:*
1.- Indicios 'Jue hagan presumir la existencia de un delito que merezca pena privativa de libertad: y.
2.- Indicios que hagan presumir que el sindicado es autor o cómplice del delito que es objeto del proceso.
En el auto se precisará los indicios quefundamentan la orden de prisión.

[221] Arr 66.- /.../
3.- Que 1),1" indicios que sirvun de premisa a la prcsuncion sean:
a) Varios:
b) Rrlacionados tanto con rl asunto materia del proceso. COI//O 1'011 los otros indicios; esto es, que sean concordante» entre si;
r I Unívocos, 1;1" decir que. necesariamente, todos conduzcan a una sola conclusión; Y.

disponía que *"[l]as presunciones que el Juez o Tribunal deduzca de las pruebas constantes en el proceso deben ser graves, precisas y concordantes."*[222]

226. Las circunstancias y los procedimientos para efectuar una detención deben ser objetivos y no subjetivos. Es decir, deben cumplir con el requisito de objetividad. En tal sentido. la objetividad de los estándares de valoración es un efecto inmediato del requisito de tipicidad, y al igual que éste, procura evitar la imprevisibilidad de la detención. Un estándar de valoración objetivo presupone una serie de hechos o una cantidad de información suficientes para satisfacer el análisis de un observador imparcial acerca de la existencia de las causas legales de detención.t-'

227. La única prueba en contra del Sr. Tibi fue la declaración del coacusado Eduardo García, que se retractó tres meses después. Es decir, no existía ningún tipo de indicio consistente, unívoco y directo que dieran presunciones graves precisas y concordantes en contra del Sr. Tibi que a su vez justifiquen la prolongación de la medida cautelar por más de dos años. El Juez que estaba a cargo del proceso en contra de la víctima era el encargado de mantener bajo examen la necesidad del encarcelamiento preventivo a intervalos relativamente cortos->' y tomar en consideración los argumentos que presente el acusado. Nada de esto sucedió y el Sr. Tibi estuvo detenido más allá de todo límite razonable.

228. Por lo anterior, los representantes de la víctima solicitamos a la H. Corte declare que la detención provisional del Sr. Tibi fue arbitraria porque fue realizada con abuso de poder y que la prisión preventiva también fue arbitraria porque no había prueba alguna que Justifique su demora por 28 meses.

C. Notificación de las razones de la detención (Artículos 7.4 y 8.2.b)

229. En el presente caso, la 1. Comisión dio por probado que el Sr. Tibi

> *"tuvo noticias delos cargos de manera oficiosa en dos oportunidades. La primera fue al dia siguiente de la detención arbitraria, cuando se le presentaron una serie de fotografias, de entre las cueles el señor Tibi reconoce la del señor Edison Garcia. y se le informó que se le acusaba di' tráfico de drogas en virtud de la declaración de tal persona. La segunda oportunidad sucedió estando ya el señor Tibi en la penitenciaría de Guayaquil, en la que un*

---

dj Directos, de modo que conduzcan a establecerla lógica y naturalmente.

[222] Art. 65.- *Las presunciones que el Juez o Tribunal deduzca de las pruebas constantes en el proceso deben ser graves, precisas y concordantes.*

[22] En el Caso *Fov. Campbell and Hartley r. UK*, (párr. 30,31 Y32), la Corte Europea consideró contraria al Art. 5.1.e del Convenio Europeo que requiere "sospecha razonable" de la comisión de un delito. una legislación de emergencia destinada a perseguir delitos de terrorismo en Irlanda del Norte, según la cual podía procederse a la detención si existía "sospecha honestamente fundada".

[224] En est.i línea, el Comité. de Derechos Humanos de la ONU ha dicho: *"toda decisión de mantener detenida a una persona debe ser examinada periódicamente a fin de evaluar los motivos que justifican la drtrnrián* ". Caso A. c. Australia, Como No. 560/1993, 3 de abril de 1997, párr, 9.4.

> *abogado de otro de los presos inculpados, le da a conocer un informe policial en el cual se le imputa la venta ilegal di' 50 gr. de cocaína al señor Edison Garcia ".*[225]

230. Estas notificaciones "accidentales" de los cargos en contra del señor Daniel Tibi, no alcanzan los estándares que demanda la Convención Americana en sus articules 7.4 v 8.2.b.

231. El Art, 7.4 impone dos exigencias diferentes en cuanto al deber de informar a la persona que resulta retenida, arrestada o detenida: a) el deber de informar en el acto de restricción de la libertad de las razones de la limitación de su libertad personal; y b) el deber de notificar inmediatamente de la imputación que existe en su contra.

232. La primera exigencia constituye un deber jurídico para el agente estatal que personalmente priva de la libertad a una persona. El contenido de la obligación de informar consiste en explicar al sujeto las razones de hecho y de derecho que justifican la restricción de su libertad personal.

233. La segunda exigencia impone el deber de notificar sin demora, del cargo o cargos formulados contra la persona detenida o arrestada. Se trata de un acto formal mediante el cual el tribunal competente que está a cargo del caso comunica a la persona detenida, a través de una notificación. del cargo o cargos formulados en su contra. Este acto reviste mayores formalidades pues la correcta notificación de la imputación es una cuestión especialmente determinante del ejercicio efectivo del derecho de defensa, ya que detennina el objeto del procedimiento.

234. La H. Corte ha señalado que

> *"En lo que respecta al artículo 7.4 de la Convención Americana, éste constituye un mrranismo para evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde el momento mismo de la privación de libertad y, a su vez, garantiza el derecho de defensa del individuo detenido...*[226]

235. Por su parte. el Art. 8.2.b de la Convención apunta que toda persona tiene el derecho a una comunicación previa y detallada de la acusación formulada,

236. En e! presente caso, ha quedado demostrado que al momento de la detención de! Sr. Tibi, los agentes del Estado mintieron alegando que se trataba de un control de migración, y que posteriormente fue llevado a los oficinas de la INTERPOL en Quito y trasladado inmediatamente a Guayaquil.F? Es decir, los agentes no le comunicaron que estaba involucrado en un proceso judicial. Recién al día siguiente de su detención,

---

[225] Demanda de la Comisión, pág. 29.
[226] Corte IDH, Caso *Juan Humberto Sánchez*, Sentencia de 7 de junio de 2003, parr. 82.
[227] Demanda de la Comisión, pág. 8

cuando se le presentaron ciertas fotografías, se enteró que estaba inculpado en un delito de narcotráfico.F"

237. Por otro lado, la notificación oficial de los cargos en su contra, no fue realizada. El Sr. Tibi conoció del informe policial que lo involucraba gracias al abogado de otro de los acusados, cuando ya estaba preso en la "Penitenciaría del Litoral".[229]

238. En consecuencia, el Estado desconoció el derecho del Sr. Tibi a ser informado de los motivos de su detención, y también su derecho a ser notificado de los cargos en su contra, violando así los articulos 7.4 y 8.2.b de la Convención Americana.

D. Violación al Art, 7.5

239. El Artículo 7.5 de la Convención Americana

> *"refleja el deber del Estado de compatibilizar su obligación de garantizar el imperio de la ley y la determinación de la responsabilidad penal a través del poder judicial, con la de garantizar los derechos fundamentales de las personas acusadas de transgredir las normas penales vigentes. E! Estado tiene la tarea de mantener 1/11 balance entre el interés general de reprimir el delito y de dar acceso efectivo a la justicia a las víctimas y el interés. también general, de que se respeten las salvaguardas que el derecho mismo prevé enfavor de quienes se encuentren acnsados. "* [230]

240. La H. Corte ha afirmado que el artículo 7.5 *"tiene como objetivo que la detención de una persona sea sometida a una revisión judicial. siendo éste el mecanismo de control idóneo para evitar detenciones arbitrarias e ilegales. "*[231]

241. En consecuencia, las garantías del Art. 7.5 están orientadas tanto a la revisión judicial de todo tipo de privación de la libertad, como también al control del tiempo que una persona pennanece detenida o encarcelada.

242. Tomando en consideración lo expuesto, concluimos que si un detenido no es llevado inmediatamente después de la privación de su libertad ante un Juez, se violenta el Artículo 7.5 de la Convención Americana. Asimismo, si el detenido, a pesar de estar a órdenes ele un juez, permanece encarcelado por un tiempo superior al establecido por la ley () por un tiempo irrazonable, también se desconoce el mencionado artículo.

243. Analicemos entonces los términos usados por el Articulo 7.5 de la Convención, en especial las frases "ser llevada" y "sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales".

---

[228] Demanda de la Comision, pago 2.
[229] Demanda de la Comisión, pág. 29.
[230] CIDH, Inf. 66/01, Caso 11.992, *Duvnj María Levoyer Jiménez*, 14 de junio de 2001, párr. 43.
[231] Corte ¡OH, Caso *Juan Humberto Sánchez*. Sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 83.

i. "Ser llevada"

244. Cuando el Artículo 7.5 de la Convención Americana manda que toda persona debe "ser llevada" ante un juez u otra autoridad que ejerza funciones judiciales, literalmente significa que el detenido sea llevado desde la celda hasta la corte *(from lbe (el! lo the court room)* para que el juez personalmente mire y oiga al detenido. No es suficiente que el abogado o cualquier otro representante del detenido acuda ante el juez, sino que es necesario que él lo haga personalmenre.P?

245. Este derecho, a diferencia del habeas corpus, exige que la misma autoridad judicial que decreta la prisión preventiva sea la encargada de oír al detenido personalmente y comprobar la necesidad de abrir o continuar la investigación en su contra, decretar la prisión preventiva, o simplemente dejarlo en libertad.

246. En el caso que nos ocupa, el Sr. Tibi nunca fue traslado a la presencia del juez que conocía la causa: el Juez Rubio Game. Tampoco hay constancia que el Juez Rubio Game se haya trasladado al recinto penitenciario en donde estaba el Sr. Tibi. Es decir, ni el Sr. Tibi conoció a su juzgador, ni el juez oyó personalmente al detenido y comprobó la necesidad de mantener la orden de prisión preventiva.[233]

ñ. "sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales"

247. El control judicial de la detención, al igual que el de la prisión preventiva es de suma importancia, tanto así que

> *"si 110 se infonna de la detención al tribunal o si se le informa después de un plazo de tiempo importante ,011 posterioridad a lafecha de privacion de la libertad, 110 se protegen los derechos de la persona detenida. y la detención infringe el derecho del detenido al (J'IJi'do proceso"*[234]

248. En este mismo sentido, la Jurispmdencia de la Corte Europea señala que la disposición del Articulo 5 del Convenio Europeo, que establece que la persona detenida

---

[232] GOMIEN Donna, HARRIS David, ZWAAK Leo, *Lau. and practice of the Iiuropean Canuention on Hnma» Rights and tbe Enropea» Social Charter.* Council of Europe Publishing, Alemania, marzo de 1999, pág 146

[233] El Juez Rubio Game, conforme a la legislación ecuatoriana (Arr, 130 del Código de Procedimiento Penal, *supra* nota 64) debía receptar el testimonio procesal del Sr. Tibi dentro de las 24 horas siguientes desde que el sindicado fue puesto a sus órdenes. No obstante, en el presente caso, se receptó el testimonio del Sr. Tibi a los seis meses de haber sido detenido. (Demanda de la Comisión, pág. 26) Además, el Juez Rubio Garue no receptó el testimonio del Sr. Tibi, fue un escribano del juzgado quien realizó la tarea. Es decir, el Sr. Tibi nunca se entrevistó directamente con el Juez Rubio Game. Narración de los hechos realizada por el Sr. Tibi, pág. 4, ANEXO 11I, VOLUMEN 1.1, DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN.

[234] CIDH. Informe sobre la situación de los derechos humanos en República Dominicana, Capitulo VI, p.irr. 219.

debe ser llevada inmediatamente ante el Juez, tiene como cometido la protección de la libertad del individuo contra la interferencia del Estado.

249. *"Un individuo que ha sido privado de su libertad sin ningún tipo de control judicial debe ser liberado o puesto inmediatamente a disposición de un juez"*[235] Y el juez será el encargado de decidir sobre su situación procesal, es decir, si se somete o no a juicio penal a la persona detenida y, en caso afirmativo, la conveniencia de dictar en su contra medidas cautelares.

250. El vocablo inmediatamente *"debe ser interpretado de conformidad con las circunstancias especiales de cada caso"*[236]. Circunstancias que, por graves que sean, no otorgan a las autoridades la potestad de prolongar indebidamente el período de detención.

251. En no muy escasas ocasiones, la detención sirve como forma de presión sobre el detenido con el fin de que éste se confiese culpable. Además, otorga a la policía "ventajas" *(advantages)* que pueden llevar a abusos *(may lead lo abuse).*[237]

252. Por esto, el pronto control judicial de las detenciones tiene como propósito prevenir estas arbitrariedades; y es justamente el control judicial el *"que permite detectar* v *prevenir amenazas contra la vida o serios malos tratos, que violan garantías tundamentales".*[238]

253, La Comisión puntualizó que *"puede entenderse como demora tolerable 'aquella necesaria para preparar el tmslado'rP?* situación que fue reiterada por la Corte lnteramericana cuando consideró que *"el período de aproximadamente* 36 *días transcurrido desde la detención y hasta la fecha en que fueron puestos a disposicion judicial es excesivo y contradice lo dispuesto en la Convención".*[240].

254. El Comité de Derechos Humanos de la ONU llegó a la conclusión de que el periodo de una semana sin control judicial de la detención constituye una violación del '\rticulo 9.3 de! PIDCP,[241] puesto que las demoras *"no deben exceder de unos pocos*

---

z». Corte IDH. Caso *Bámaca J'elásquez,* Sentencia del 25 de noviembre de 2000, Serie C No. 70, párr. 140.

[236] Corte IDH, Caso *Castillo Petruzzi y Otro»,* Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C No. 52, párr. 108.

[237] GOMIEN Donna, HARRIS David, ZWAAK Leo, ***Law*** *and practice of tbe European Coniention «n Human Rights and the Enropean Social Cbarter,* Council of Europe Publishing, Alemania, marzo de 1999, p;íg. 136

[238] Corte JDH, Caso *I·illagrán Morales y Otros,* Sentencia del 19 de noviembre de 1999, párr. 135.

[239] Alegatos de la Comisión, Corte IDH, Caso *Castillo Petruzzi y Otros;* p.irr. 105.a, Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52. (Las comillas internas pertenecen al original.)

[240] Corte IDH, Caso *Castillo Petruzzi y Otros.* Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie e No. 52, párr. 111.

[241] Comité de Derechos Humanos de la ONU, *Peter Granr* c. jamaica, Comunicación No. 597/1994 citado por CIDH, lnf. 49/01, p.irr. 174.

días".[242] De hecho, algunos miembros del Comité han opinado que una detención de 48 horas sin intervención judicial es excesivamente larga.243 La Comisión Interamericana calificó como *"excesivamente dilatado"* el plazo de una semana en detención sin control judicial.[244] El Proyecto de principios sobre el derecho a no ser arbitrariamente detenido ni preso señalaba que el detenido deberá ser llevado ante un juez o tribunal *"prontamente y en todo caso dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento de su detención"* [245]

255. Como vemos, los órganos internacionales han considerado oportuno limitar al máximo la duración de la detención y establecer la necesidad que ésta sea evaluada por una autoridad judicial.

256. En el Ecuador los procesados simplemente no comparecen ante un juez, es decir. que el término sin demora. nunca se cumple. Los artículos que rigen el proceclimiento penal hablan de poner al detenido a *"disposición del Juez"* (Art. 56), o *"o órdenes del Jue:"* (Art, 173), que en la práctica significa que se envía el expediente al juez de la causa, y éste decide sobre la base del mismo la pertinencia de dictar o no una orden de detención provisional o prisión preventiva, sin que en ningún momento oiga personalmente al detenido.>"

257. Cabe resaltar que el ordenamiento legal ecuatoriano establece que sólo los jueces y tribunales penales constituidos de acuerdo con la Constitución y las leyes ejercen jurisdicción en materia penal.>?

258. Sin embargo, el 28 de septiembre de 1995 el Sr. Tibi no fue trasladado ante la presencia de un juez, sino ante la de un fiscal y la de agentes de policía, ante quienes vertió su declaración preprocesal., en consonancia con el Art, 54.5 del Código de

---

[242] Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación General 8, párr. 2.

[243] Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuadragésimo quinto periodr. de sesiones, Suplemento No. 40 (A/45/40), vol. I, p.irr. 333.

[244] CIDH, Informe sobre Cuba (1983) párr. 12 y 13.

[245] Artículo Iu.c, Estudio del Derecho a no ser arbitrariamente detenido ni preso. Citado por U'DONNELL Daniel, *Protección inrernaaona! de los derechos humanos*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos (JIDHj, Fundación Friedrich Naurnann, págs 134 y 135.

[246] Esta situación se presentó ante la Corte en el Caso *Suárez Rosero*, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie e No. 35, párr. 56.

[247] El Arr. 98 de la Constitución ecuatoriana vigente en la época de los hechos establecía que los órganos de la Función Jurisdiccional eran: *"a) La Corte Suprema de Justicia. las cortes superiores y los juzgados y tribunales dependientes de aquélla. conforme a la ley; bj el Tribunal Fiscal; c) el Tribunal de lo Contencioso Administrativo: y. dj los demás tribunales yju-gados que las leyes establezcan."*

Procedimiento Penal[248] y el Art, 116 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.>'?

259. La propia Policía ecuatoriana ha dicho:

> *;Por qué anu el Fiscal y no ante un Jue; como denuncia y arguye el denunciare en su Ubelo? Porque conforme mandato del Art.* 116 *de la Ley 108 Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrápicas vigene al tiempo de la detención del denunciante, tal testimonio debía rendirlo. NO ANTE NINGUN JUEZ; pues la indagación policial es preprocesa!"*[250]

260. Como bien lo sostiene la Comisión, y como lo ha ratificado el propio Estado>', el fiscal no es competente para ejercer el poder judicial. Conforme a la Constitución las funciones del fiscal son las de un acusador público y no son funciones judiciales.

261. En consecuencia, el Estado ecuatoriano no cumplió con el deber que le impone el Art, 7.5 de la Convención, en el sentido de llevar al Sr. Tibi sin demora ante un juez u otro funcionario competente para que se revise la legalidad de su detención y así se prevengan otro tipo deabusos en su contra.

iii. Plazo de la prisión preventiva

262. El Sr. Tibi pasó detenido por un lapso excesivo de dos años, tres meses y tres semanas, contabilizado desde el 27 de septiembre de 1995, día de su detención, hasta el 21 de enero de 1998, fecha de su liberación.

263. El caso del Sr. Tibi se enmarca dentro de un patrón de violaciones que la Comisión identificó en los siguientes términos:

> *"El problema más grave 'lile la Comisión ha identificado con respecto al derecho a la tibertad. es la aplicacían arbitraria e ilegal de la dctcnción preventiva. En el momento de la observación in loco de la Comisión. las cifras presentadas indicaban que aproximadamente 9.280 individuos estaban detenidos en el sistema penitenciario ecutuoriano. de los cuales cerca del 70% esperaban juicio o sentencia. La delegación de la Comisián habló con individuos que habian sido mantenidos en prisión por dos, tres, cuatro,*

---

[248] Art. 5-+.- *Corresponde a la Policía Judicial:* {...! 5.- *Recibir, por escrito y con fidelidad, la versión 'lile libre y espontáneamente haga el imputado sobre las circunstancias y movtles del hecho, su participación en el mismo, así COMO la de otras personas.*
Esta versión seráfirmada por el imputado. el Agente Fiscal y el respectivo Agente de la Policía Judicial.

[249] Art. 116.- *El parte informativo de la Fuerza Pública* v *la declaración preprocesal rendida por el indiciado en presencia del Agente Fiscal constituirán presunrion grave de culpabilidad, siempre que se hallare justificado el cuerpo de: delito.*

[250] Oficio Nu. 3291-JPA-G-99, del 21 de julio de 1999, suscrito por el Mayor de Policía, José Alonso Suárez Guevara, Jefe Provincial Anrinarcóricos del Guayas, dirigido al Sr. Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pág. 2. Anexo 9. (el resaltado pertenece al original)

[25] Ver página 24 de la demanda de la Comisión.

cillco. e inclusive se,s años, sin haber recibido Ulla decisián judicial de acusacion ell Sil ***contra.*** "[252]

264. Ello demuestra que en el Ecuador la prisión preventiva no se utiliza de manera excepcional sino que constituye la regla. Corno resultado, se incrementa el hacinamiento en las cárceles y se produce congestión en el sistema de justicia, 10 que a su vez mantiene a los procesados esperando sentencia por periodos demasiado largos.

265. El propio Gobierno de Ecuador reconoció este hecho frente al Comité de la ONU, cuando expresó que en el país existe un incumplimiento generalizado de los plazos legales sobre la prisión preventiva, 10 que ha provocado que la misma se convierta en la regla y no en la excepción. Entre las causas del fenómeno se citó la desconfianza de los jueces en otras medidas cautelares, salvo la fianza; falta de infraestructura de los órganos policiales que posibilitaría la vigilancia de los sospechosos y evitaría su fuga y posterior no juzgamiento; y, corrupción casi generalizada de los jueces y empleados de la magistratura, que incide en la lentitud de las investigaciones y en el cumplimiento de los mentados plazOS.[253]

266. Todo 10 anterior da cuenta que el Estado no respetó el derecho del Sr. Tibi a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad consagrado en el Art. 7.5 de la Convención.

Violación al derecho a l« propiedadprivada (Art. 21 de la Convención Americana)

267. La Comisión dio por probado que al momento de la detención del Sr. Tibi se incautaron su automóvil y todos los valores y pertenencias que tenía con él, que hasta la fecha no han sido devueltos.t>'

268. Además, *"sus tarjetas de crédito de bancos ecuatorianos y franceses fueron usadas mientras estuvo detenido y cuando regresó a Francia descubrió que su cuenta de banco había sido vaciada, incluido un sobregiro de 6.000 dálaresr?»*

269. La Corte Superior de Justicia de Guayaquil, el l-! enero de 1998 confirmó el auto de sobreseimiento provisional del Sr. Tibi,[256] por lo que el Juez Décimo Octavo de lo Penal del Guayas el 23 de septiembre de 1998 dispuso la devolución de sus bienes-t?

---

[252] CIDH, Informe sobre la sitiación de los derechos humanos en el Ecuador, 1997, Capítulo VII, Derecho a la Libertad Personal.

[253] Comité de Derechos Humanos de la ONU, CCPR/C/84/A.dd.8, *Información adiaona! presentada por el Estado Parte: Eamdor.* 17 de diciembre de 1998, p.irr. 98. Anexo 26.

[254] Demanda de la Comisión, pág. 34.

[255] Demanda de la Comisión, pág. 34.

[256] Sentencia de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil de 23 de septiembre de 1998, ANEXO 1I1, VOLUMEN I.2.Q) DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN_

270. El Sr. Tibi que cuando llegó a Francia fue a la Embajada del Ecuador en París, en compañía de su abogado, con el objeto de reclamar sus bienes, pero le supieron manifestar que no podría regresar al Ecuador porque había sido declarado persona no grata.

271. El artículo 21 de la Convención Americana reconoce el derecho a la propiedad privada. A este respecto establece: a) que *"[tjoda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes";* b) que tales uso y goce se pueden subordinar, por mandato de una ley. al *"interés social";* c) que se puede privar a una persona de sus bienes por razones de *"utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley";* y d) que dicha privación se hará mediante e! pago de una justa indemnización.

272. La Corte lnteramericana ha interpretado que

> *"Para que la privación de los bienes de una persona sea compatible con el derecho a la propiedad consagrado en la Convención. debe fundarse en razones de utilidad pública o de interés social. sujetarse al pago de I//a justa indemnización. limitarse a los casos* v *practicarsr según la sformas establecidas por la ley...*[258]

273. Como vemos, la Convención y la Corte se refieren al derecho interno para justificar la incautación de bienes. De tal suerte, el Art, 110 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas dispone:

> *Si [uere absuelto el sindicado propietario de los bienes incautados, éstos le serán restituidos por el CONSEP ruando lo disponga el juez. una vez canceladas las medidas cautelares.*
> *Las instuuciones a 'as que se hubiere entregado bienes los devolverán en el estado en que se encontraban al momento de la recepción. salvo el normal deterioro por el uso legitimo. Si hubiere daños, deberán repararlos o cubrir la indemnización que fije el juez, salvo caso fortuito o fuerza mayor.*
> *El dinero o el valor qlu' representen los instrumentos monetarios o documentos bancarios, financieros o comerciales aprehendidos o incautados se devolverá en moneda nacional, según la cotización del mercado libre para la compra de la divisa incautada a la fecha de la drvolurion, con los respectivos intrreses legales vigentes fijados por la Junta Monetaria. Procederá la acción de indemnización por daños y perjuicios a que hubiere lugar.*

274. El Sr. Tibi no fue absuelto porque su caso no llegó a la etapa de! plenario del procedimiento penal ecuatoriano, sino fue sobreseído provisionalmente. Es decir, las pruebas en su contra eran tan escasas que e! juez se abstuvo de llevarlo a juicio. Por *ello,* el Art. 1lO citado se aplica con mayor razón al Sr. Tibi, persona inocente que fue privado de sus bienes por una detención ilegal y arbitraria y dentro de un juicio falto de las garantías judiciales No interpretar así el Art, 110 llevaría al absurdo de considerar que una persona que ha sido detenida y, que por ello se incautaron sus bienes, no los

---

[257] Providencia del Juez Décimo Octavo de lo Penal del Guayas de 23 de septiembre de 1998, Anexo 10.

[258] Corte IDH, Caso *Ivcher Bronstcin,* Sentencia del 5 de febrero de 2001, p.irr. 128.

pueda reclamar posteriormente porque fue liberada antes de llegar a la etapa del juicio penal (plenario).

275. Además, existía la orden de un juez que mandaba al Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) devolver las propiedades incautadas del Sr. Tibi, sin que *"haya que seguir procedimiento alguno para la restitución de sus bienes, dado que es obligación del CONSEP o de la institución que esté en posesión de sus bienes devolverlos tras su liberación de la detenciánrP"* En efecto, la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas no contiene ninguna disposición que obligue a las personas absueltaso sobreseídas a seguir un procedimiento administrativo, judicial o de otra índole para la devolución de sus bienes, de tal suerte, corresponde al Estado recuperar los bienes del afectado que estén en manos de cualquier persona pública o privada y devolvérselos cuanto antes, tal y como lo dispone el citado Art, 110.

276. No existe sustento legal alguno que justifique la no devolución de los bienes del Sr. Tibi y es el Estado quien debe responder por el destino de ellos, dado que hasta la presente fecha siguen en su posesión.

277. Como consecuencia de lo expresado, los representantes de la víctima solicitamos a la Corte concluya que el Estado violó el derecho a la propiedad privada establecido en el artículo 21.1 y 21.2 de la Convención Americana, en perjuicio del Sr. Tibi.

Falta de protección de la familia
(Yiolaciún al Art. 17.1 *de la Convención Americana)*

278. El Art, 17.1 de la Convención Americana dispone:

> *La familia es el rlememo natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.*

279. El Art. 22 de la Constitución ecuatoriana vigente en la época de los hechos rezaba:

> *El Estado protege a la familia como célula fundamental de la sociedad y le garantiza las condiciones morales, culturales y económicas que favorezcan a la consecución de sus fines (...)*

280. Tal Y como fue probado, el Sr. Tibi fue detenido en Quito y posteriormente trasladado a Guayaquil, una ciudad a 600 Km de distancia, en donde permaneció arbitrariamente por 28 meses.>? Por ello, la familia del Sr. Tibi tuvo serias dificultades para ir a visitarlo, dada la distancia y los costos de transportación aérea.

281. El Principio 20 del Conjunto de Principios sobre la Detención afirma:

---

259 Demanda de la Comisión, pág. 35.
260 Demanda de la Comisión, pág. 20.

> Si *lo solicita la persona detenida o presa, será mantenida en lo posible en el lugar dt detención o prisión situado a una distancia razonable de su lugar de residencia habitual.*

282. El Sr. Tibi solicitó el traslado el 24 de febrero de 1997, no sólo porque estaba lejos de su familia, sino porque estaba siendo amenazado de muerte por otros inrernos.>' No obstante, esto nunca sucedió. Además, no existió motivo razonable que justifique que el Sr. Tibi haya sido trasladado desde Quito a Guayaquil; recordemos que el traslado fue hecho mintiendo al Sr. Tibi sobre un supuesto control migratorio.

283. El Estado no puede justificar este traslado alegando que servía para una mejor inmediación procesal, en primer lugar porque la mencionada inmediatez nunca se dio, el Sr. Tibi no fue llevado ante el juez de la causa y nunca conoció a su juzgador; y en segundo lugar, porque la propia Juez de Guayaquil resolvió que no era competente para conocer de la causa porque la infracción había sido cometida en otra ciudad, en Durán.[262] Además según!as reglas procesales ecuatorianas, *"[ljos jueces penales pueden deprecar la práctica de actos procesales. a los jueces penales de otras jurisdicciones territoriales.* "[263] Es decir, que no se afectaba en nada al procedimiento penal si el Sr. Tibi hubiese estado detenido en la ciudad de Quito.

284. En consecuencia, ral como lo expresa la Comisión, el Sr. Tibi *"no pudo asistir a su esposa y familia durante estos momentos difíciles, y los escasos recursos de que disponía su familia fueron consumados en la asistencia letrada contratada para obtener su liberación y en los viajes para visitarlo a Guayaquil. donde estaba detenido. pese a que fue arrestado* v *sujamilia residía en Quito".*[264]

285. Los altos costos que representó la defensa del Sr. Tibi, sumados a los gastos de viaje de Quito a Guayaqul, la incapacidad del Sr. Tibi de desplegar actividades mientras estuvo en la cárcel, la consecuente pérdida de su trabajo y la confiscación ilegal de sus bienes que hasta ahora perdura, afectó directamente a la familia del Sr. Tibi y la dejó desprotegida, en momentos muy difíciles, dado el estado de gravidez de su esposa, el subsiguiente nacimiento de su hija cuando aún estaba preso y la corta edad de las otras runas.

---

[261] Carta del Sr. Tibi al Director Nacional de Prisiones de fecha 24 de febrero de 1997. Anexo III, Volumen I.2.h) de la demanda ele la Comisión.

[262] Al respecto ver demanda de la CIDH, p:íg. 26.

[263] Art. 8 del Código de Procedimiento Penal. En el caso de otros detenidos en el operativo "Camarón" que no vivían en la ciudad de Guayaquil, el Juez Primero de lo Penal del Guayas expidió un deprecatorio al Juez Primero de lo Penal de Esmeraldas y al Juez Octavo de lo Penal de Pichincha, a fin de que *"se procesa a los allanamientos y detenciones en esa jurisdicción".* Informe policial No. 278-jPE1.G.95, del Caso No. 409-JPEI.G.95, de fecha 26 de septiembre de 1995, remitido al Jefe provincial de Estupefacientes e INTERPOL del Guayas, pág. 4. Anexo TII, Volumen TI.13.e) ele la demanda ele la Comisión. En el caso del Sr. Tibi esto nosucedió, fue el propio juez de Guayaquil quien dictó la orden de detención, siendo rncompetenre para ellu.

[264] Demanda de la Comisión, pág. 4(,.

286. La familia del Sr. Tibi continúa viviendo una pesadilla, dado que el Sr. Tibi no halla trabajo debido a SI.1S problemas físicos, producto de la tortura y de la falta de atención médica.

287. Otro aspecto que afectó directamente al derecho a la familia del Sr. Tibi es el excesivo tiempo en que estuvo privado de su libertad sin causa alguna. *"[A]! privar al Sr. Tibi de su derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. el Estado no sólo cometió una grave violación de los derechos que le otorga la Convención, sino que exacerbó y prolongó la separación de sufamilia'<»*

288. El estrés y sufrimiento por las violaciones a los derechos humanos del Sr. Tibi también dio como consecuencia la disolución de su relación con la Sra. Baruet y la consecuente separación cie sus hijas.

289. Acompañando a todo esto están los hechos de tortura. En efecto, la tortura no solamente afectó al Sr. Tibi como individuo víctima de la misma y a sus familiares más cercanos por la angustia y desesperación que ella produce. La tortura también afectó a la unidad familiar.

290. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, dentro de su investigación de tortura en el Ecuador afirmó que

> *"los efectos psicologiros de la tortura* {oo.] *se revierten en la relación de la víctima de tortura con su familia alterando gravemente la misma f. ..] Hemos constatado ala par una actitud agresiva frente a los familiares como una forma de descarga emocional frente a la violencia sufrida. En varios casos las relaciones de pareja se destruyen o sufren un cambio en razón de la experiencia traumática vivida, cruzado en la mayoría de casos, por los trastornos ,'n la vida sexual consecuencia de la tortura."*[266]

291. En consecuencia, los representantes de la víctima solicitamos a la Honorable Corte declare que el Estado no adoptó las medidas necesarias para proteger la familia del Sr. Tibi. Al contrario, causó la separación y disolución de la misma en violación del Art. 17. I de la Convención Americana.

Violaciones u Ias garant/as judiciales
(Art. 8 de la Convención Americana)

292. La tutela de las garantías judiciales reconocidas en la Convención Americana es un pilar del derecho a la justicia. A través de ellas se busca garantizar la tutela efectiva de los derechos, rodeando a la misma de los resguardos procesales y sustantivos indispensables para lograr este importante fin.

---

[265] Demanda de la Comisión, pág. 46

[266] Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, *Hl ocaso de la dignidad: la tortura en el Eruador;* http:/ /www.derechos.org/inredh/doc/ocasolindice.htrnl, pág. 17, Capítulo !II.1, Anexo 28.

293. En cuanto a los resguardos procesales y sustantivos, el articulo 8 contiene el *"conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención"*.[267] El articulo 8.1 de la Convención consagra los lineamientos del llamado "debido proceso legal", que consiste en el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterior-dad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos.

294. El articulo 8.2 de la Convención establece, adicionalmente, las garantías mínimas que deben ser aseguradas por los Estados en todo tipo de procedimiento.c«

295. En el presente caso, los representantes de la víctima coincidimos con la Comisión en el sentido de sostener que e! Estado es responsable de la violación del derecho del Sr. Tibi a ser juzgado en un plazo razonable por un tribunal competente independiente e imparcial, dispuesto en e! Art. 8.1, de su derecho a la presunción de inocencia, dispuesto en el Art. 8.2, de su derecho a un abogado defensor, dispuesto en los artículos 8.2.d y 8.2.e. y de su derecho no ser obligado a autoincriminarse, dispuesto en e! Art, 8.2.g. Sin embargo, nos permitimos hacer algunas observaciones adicionales.

A. Derecho a ser oído en un plazo razonable por un juez competente, independiente e imparcial. (Art. 8.1)

296. En el presente caso, el Estado ecuatoriano no solamente desconoció el principio de! plazo razonable dispuesto en el Art, 7.5 de la Convención Americana, porque mantuvo encarcelado al Sr. Tibi por más de 2 años, sino tambi.én desconoció su derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable dispuesto en el Art. 8.1 de la Convención, porque el proceso penal seguido en su contra se extendió por tres años más después de su liberación.

297. El plazo razonable dispuesto en e! Art. 8.1 de la Convención Americana tiene un propósito distinto al plazo razonable dispuesto en el Art. 7.5 del mismo instrumento. Haciendo una diferenciación entre uno y otro propósito, la 1 Comisión señaló que aún cuando los Artículos 7.5 Y8.1 de la Convención Americana

> *"se inspiran en el mismo principio, ambas disposiciones IZO son idénticas en sus diferencias a lo que constituye 1111 plazo razonable. Un atraso que constituya violación del Artículo 7.5 puede estar justificado según el Artículo 8.1 f...] El concepto de tiempo razonable*

---

[267] Corte IDH. *Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25)' 8 Coutenaán Amencana sobre Derecho: Humanos)*. Opinión Consultiva CJC-9/87, de Ci de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27.

[268] L¡ Corte ha establecido que: *"el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención se aplica ,/ los órdenes mencionados en el numeral 1 del mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones de orden 'civil, laboralfíscal o de cualquier otro carácter"* (lbid., p.irr. 125.)

contemplado en el Articulo 7 y el Articulo 8 difieren en que el Articulo 7 posibilita que un individuo sea liberado sin perjuicio de que continúe el proceso."[269]

298. En definitiva, se viola el plazo razonable de la prisión o detención preventiva cuando una persona ha sido retenida por un tiempo excesivo. Así mismo, se viola el plazo razonable de la curación de! proceso, si éste ha sufrido demoras indebidas.

299. La Corte Interamericana ha tomado en cuenta tres criterios para la determinación de la razonabilidad del plazo en el cual debe desarrollarse un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal de! interesado; y, c) la conducta de las autoridades judiciales.F? Estos tres criterios deben ser aplicados simultáneamente en la consideración de un caso concreto, lo que no obsta que *"llegado el caso, uno sólo de ellos pese decisivamente".*[271]

300. En el presente caso, la 1. Comisión dio por demostrado que el Sr. Tibi estuvo detenido preventivamente por 28 meses, hasta que finalmente fue liberado en enero de 1998. Es decir que el plazo a contabilizarse para efectos del Art. 7.5 termina en esa fecha; sin embargo, los representantes de la víctima hacemos notar que el plazo razonable a efectos del Ar1. 8.1 todavía se extiende más allá. En efecto, la Corte Superior de Guayaquil confirmó el sobreseimiento provisional a favor del Sr. Tibi el 14 de enero de 1998, razón por la cual fue liberado; no obstante, conforme a la legislación ecuatoriana existen tres tipos de sobreseimiento: 1) Provisional del proceso y provisional del sindicado; 2) Definitivo del proceso y definitivo del sindicado; y, 3) Provisional del proceso y definitivo del sindicado (Art, 241 del Código de Procedimiento Penal).

301. De conformidad con el Ar1. 242 del Código de Procedimiento Penal:

> *"Si el Juez considera que no se ha comprobado suficientemente la existencia del delito. o habiéndose probado su existencia /10 se hubiera identificado a los culpables. o no hubiese prueba suficiente de la participación del indiciado, dictará auto de sobreseimiento provisional del proceso v del sindicado. declarando que, por el momento, no puede proseguirse la sustanciación de la causa."*

302. El Art. 243 del mismo instrumento se encarga del segundo tipo de sobreseimiento en los siguientes términos:

> *"El sobreseimiento del proceso y del sindicada será definitivo cuando el Jue; concluya que no se ha probada. obsolutamente, la rxistencia del delito.*
> *El Juez dictará también auto de sobreseimiento definitiva del proceso y del sindicado. si encuentra que se han establecido causas de justificación que eximan de responsabilidad al encausado.:'*

---

269 CIDH, Inf. 12/96, *]Of;ge Alberto Giménez* c. Argentina, 1 de marzo de 1996, p.irr. 110.

270 Corte IDH, Caso *Genie Lacayo,* Sentencia del 29 de enero de 1997, Serie C, No. 30, párr. 77. Ver también, Caso *Suárez Rosero,* Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie e No. 35, párr. 72.

271 CIDH, Inf. No. 52/97, Caso 11.21S, *Arge.. Sequira Mangas,* 18 de febrero de 1998, párr. 121.

303. Finalmente el Art. 244, habla del tercer tipo de sobreseimiento:

> *"Si pi Juez hubiera llegado a la conclusión de que se ha comprobado la existencia del delito, pero no la responsabilidad del sindicado. dictará auto de sobreseimiento provisional del proceso y definitivo a favor del sindicado."*

304. Las Cortes ecuatorianas dictaron el primer tipo de sobreseimiento en la causa penal contra el Sr. Tibi, es decir sobreseimiento provisional del proceso y del sindicado.

305. Cuando un juez dicta un sobreseimiento provisional del proceso no significa que el juicio penal termina ahí. sino que. de conformidad con el Art. 249 del Código de Procedimiento Penal. se *"suspende la sustanciación del mismo durante cinco años":* y si se dicta un sobreseimiento provisional del sindicado, el mismo artículo manda que el trámite se *"suspende por tres años".*[272]

306. Se ha considerado que estos tipos de procedimientos suspendidos o discontinuados provisionalmente continúan afectado la situación del acusado porque existe la posibilidad de reabrirlos.F" Y, por tanto, mientras siga abierta esa posibilidad se seguirá contabilizanjo el plazo razonable porque se sigue afectando la situación del acusado.[274]

307. Como lo sostuvo la Comisión, *"no existian pruebas contra el Sr. Tibi, excepto una declaración de un coacusado. que se retractó* ([*los tres meses del arresto del Sr. Tibi".*[275] Pese a ello. se lo privó de la libertad por 28 meses y después de dictó un sobreseimiento provisional aún cuando de conformidad con el citado Art. 243 debía dictarse el sobreseimiento definitivo, dado que no se había probado absolutamente la participación del Sr. Tibi.

308. En consecuencia, dado que existía la posibilidad de reabrir la causa en contra del Sr. Tibi, el plazo de duración del proceso se extendió hasta el 14 de enero de 2001,

---

[272] Arr. 249.- *El sobreseimiento provisional del proceso suspende la sustanciación del mismo durante cinco años; y el sobreseimiento provisional del sindicado lo suspende por tres años. Estos plazos se contarán desde la fecha de expedición del respectivo auto dr sobreseimiento.*
Dentro de estos plazos se podrán presentar nuevas pruebas relacionadas con el delito, con la responsabilidad o con la inocencia del encausado.

[273] Al respecto ver: STAVROS Stephanos, *Tbe Guaruntiafor Acatsed Persons Under Article* 6 *oflbe European Contention of Human Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, 1993. 111e Netherlans, pág. 88.

[274] La CIDH ha mostrado su preocupación respecto **al** sobreseimiento, en los siguientes términos: *"La Comisión considera que los casi ocho años transcurridos desde el inicio de las investigaciones, excede en mucho el principio de razonabilidad de un plazo para resolver IIn proceso. sobre todo teniendo en cuenta que según la Iev ecuatoriana. aún cuando se dicte un sobreseimiento provisional, la causa permanece abierta por cinco mios. pla:o durante el cual !a investigución puede reabrirse si se aportan lluevas pruebas."* (CIDH, Inf 66/01, *Dayra María Lenoyer Jiménez*, 14 de junio de 2001, párr. 95.)

[275] Demanda de la Comisión, p,íg. 31 .

techa en que debía dictarse de oficio el sobreseimiento definitivo.[276] Y esto es a todas dudas irrazonable.

309. Además, la conducta de las autoridades judiciales fue negligente. La causa pena! en contra del Sr. Tibi pasó por las manos de tres jueces. El primero fue el Juez Rubio Carne de la ciudad de Guayaquil que fue recusado por mora y subrogado por la Jueza Angelita Albán de Ángel, también de la ciudad de Guayaquil, quien se inhibió de conocer el caso y remitió lo actuado al Juez Reinaldo Cevallos, juez de Durán, quien finalmente sobreseyó al Sr. Tibi. Todo esto produjo demoras en la tramitación de la causa que deben ser atribuidas a las propias autoridades judiciales.?"

310. Además, los mencionados jueces ecuatorianos excedieron ampliamente los propios plazos legales nacionales para cada una de las etapas del proceso. El proceso penal ecuatoriano se encuentra dividido en etapas: el sumario o etapa de investigación inicial clue sirve para probar la existencia de un delito y para individualizar e identificar los autores, cómplices y encubridores; la etapa intermedia, en la que el fiscal formaliza la acusación; el plenario, o juicio propiamente dicho; y la etapa de impugnación.

311. El artículo 231 del Código de Procedimiento Penal estipulaba que la etapa inicial debía, en cualquier caso, terminarse dentro de un plazo de 60 días. Los artículos 235 a 240 especificaban la duración de la etapa intermedia, la cual en casos excepcionales podía extenderse hasra ál días. El Código de Procedimiento Penal exigía, por lo tanto, clue la fase previa al juicio de un proceso penal sea desarrollada en un lapso de 111 días.

312. El sumario y la etapa intermedia en el presente caso, se prolongaron desde el 28 de septiembre de 1995 hasta el 3 de septiembre de 1997, fecha en que se sobreseyó provisionalmente al Sr. Tibi, es decir, cerca de dos años. Por su parte, la consulta del auto de sobreseimiento, que por ley debe hacerlo la Corte Superior, no podía durar más de quince días (Art. 401 Código de Procedimiento Penal), no obstante, la Corte tardó desde el3 de septiembre de 1997 hasta el 14 de enero de 1998. De igual manera, el Art. 130 del Código de Procedimiento Penal disponía que si *"el sindicado estuviera privado de la libertad, se le rec ibirá su testimonio dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde el momento en que fue puesto a órdenes del Juez. Este plazo podrá prorrogarse por otras veinticuatro horas cuando el Juez lo estimare necesario o cuando el sindicado lo pidiere.* " En el presente caso, ha quedado demostrado que se receptó el testimonio del Sr. Tibi a los seis meses de haber sido detenido y sindicado, y no fue el Juez de la causa quien receptó el testimonio, sino uno de sus escribanos.I"

---

[276] El Arr. 252 del Código de Procedimiento Penal dispone: *"Si se hubieran cumplido los plazos a los que se refiere el Arr.* 249 *y* 1/0 *se hubiere reabierto el sumario, el Juez dictará auto de sobreseimiento definitivo del proceso y del sindicado. a prticuin de parte o de oficio f...J*". Los peticionarios no tenemos constancia que el Estado haya cumplido las reglas procesales internas y haya dictado el correspondiente sobreseimiento definirivc .

[277] Ver Demanda de la Comisión págmas 27 y 28.

[278] Demanda cit, la Comisión, pág. 26.

313. En fin, las autoridades estatales incumplieron los plazos legales de tramitación del juicio penal, que dio como resultado la demora excesiva en la tramitación de la causa en violación delArt. 8.1 de la Convención Americana.F?

B. Presunción de inocencia (Art, 8.2)

314. El señor Tibi fue privado de su presunción de inocencia, en vista de haber pasado más de dos años privado de su libertad. Como bien lo afirma la Comisión:

> *"parecería que el Estado procuró mantener al Sr. Tibi detenido para hallar pruebas de que era responsable d,> un delito. por tanto, dificilmente podría existir simultáneamente una* ***presunción de*** *inorvncia".*[280]

315. La H. Corte se ha referido a la presunción de inocencia en los siguientes tėmimos:

> *"el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantias judiciales. al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el artículo* 8.2 *de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar. no punitiva* [...] *En caso contrario se estaría cometiendo una injusticia al privar de libertad. por un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado. a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia. lo cual está en contra de principios generales del derecho universalmente reconocidos."*[281]

316. Por su parte, la 1. Comisión ha dicho que

> *..La presunción de inocencia se torna cada vez más vacía y finalmente se convierte en una burla cuando la detención previa al juicio es excesivamente prolongada dado que. a pesar de la presunción se está privando de la libertad a una persona todavía inocente".*[282]

---

[279] A manera de excusa varios Estados h.m argüido que se ven imposibilitados de cumplir con los preceptos del plazo razonable porque sus tribunales tienen "sobrecarga de trabajo", Al respecto la Corte EOH ha puntualizado que tal argumento *"no debe tenerse en cuenta; el art.* 6.1 *[de la Convención Europea! obliga a los Estados contratantes a organizar su sistema judicial de tal manera que sus tribunales puedan cumplir cada una de sus exigencias".* (Corte EOH, Caso *Franceso Lombardo,* Sentencia del 26 de noviembre de 19')2.) Refiriéndose a lo anterior, la Comisión Interamericana puntualizó que: *"La gran cantidad de expedientes sin resolver por el recargo de trabajo del Poder Judicial no significa que el Estado se libere de su obligación de tramitar esos expedientes con la debida diligencia. y además tomar las medidas administnnivas que permitan superar esta situación, ya que de ninguna manera se puede privar a las víctimas o a sus familiares de su derecho a un juicio justo dentro de un 'plazo razonable* .... (CIDH, Inf. No. 52/97, *Arges Sequira Mangas,* 18 de febrero de 1998, párr. 133.)

[280] Oemandda de la Comision, pág. 32.

[281] Corte IOH, Caso *Suárez Rosero,* Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 77.

[282] C10I-l, Inf. 12/96, *Jorge Alberto Gimenez,* 1 de marzo de 1996, párr. 80.

317. En tal sentido, los representantes de la víctima consideramos que la excesiva duración de la prisión preventiva del Sr, Tibi comporta una violación a la presunción de inocencia. dado (Iue las autoridades ecuatorianas mantuvieron encarcelada a una persona inocente sobre la única base de una declaración preprocesa! de un coacusado, expresamente prohibida por la propia legislación intema y presumiblemente obtenida bajo tortura. En consecuencia, solicitamos a la H, Corte declare que el Estado ecuatoriano desconoció el Art, 8.2 de la Convención Americana.

C. Derecho del inculpado de ser asistido por un defensor de su elección (Art, 8.2.d) y derecho de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado (Art, 8.2.e)

318. El Sr, Tibi no tuvo acceso a un abogado defensor durante el primer mes de su detención. a pesar que la Constitución ecuatoriana disponía en el Art. 19.17,e) que *..[tjoda persona enjuiciada por una infracción penal tendrá derecho a contar con un defensor".*

319. Es así que el 28 ele septiembre de 1995, un clía después de su ilegal arresto, el Sr. Tibi rindió su declaración preprocesa! ante el Fiscal Oswaldo Valle Ceval1os, sin la presencia de un abogado defensor.P'

320. Lo sorprendente es que lo anterior guarda relación con las leyes secundarias. El Arr, 54.5 del Código de Procedimiento Penal vigente en la época de los hechos disponía que corresponde a la Policía Judicial '"*(r[ecibir. por escrito y con fidelidad, la versión que libre y espontáneamente haga el imputado sobre las circunstancias y móviles del hecho, su participación en el mismo, así como la de otras personas.* '" Y que esta versión debía ser "*firmada por el imputado. el Agente Fiscal y el respectivo Agente de la Policía Judicial..*. Es decir, que no se requería que esté presente el abogado defensor del acusado en las diligencias preprocesales. Únicamente cuando se iniciaba la etapa procesal mediante un "auto cabeza de proceso". el Art. 221 del mismo cuerpo de leyes mandaba al juez a citar al defensor de oficio que en ese mismo momento se nombraba para que represente al sindicado y a las personas que se sindicaren en el futuro.

321. Es asi que el 4 de octubre de 1995, el Juez Rubio Game dictó el auto cabeza de proceso que declaraba abierta la etapa del sumario y nombraba como defensor de oficio del Sr. Tibi y ele otras 14 personas a! Abogado .losé Alejandro Chica.[284] No

---

[283] Demanda de la Comisión, pág. 32. LI Comisión sustenta este hecho afirmando que *"No hayfirma de nadie identificado como el abogado del S,: Tibi en la declaración que este formulara el* 28 *de septiembre de* 1995",

[284] !\Uffl cabeza de proceso del Juzgado Primero de lo Penal del Guayas, de fecha 4 de octubre de 1995, ANEXO llJ. VOLU!vIEN TI.13.F) DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN,

obstante. el Ab. Chica nunca se entrevistó con el Sr. Tibi y nunca presentó nl11gún escrito o recurso a su favor. Es decir, su papel fue totalmente ilusorio. [285]

322. Este tipo de deficiencias en el sistema de justicia produjo que el Sr. Tibi ni siguiera conozca a su defensor de oficio. En palabras de la propia víctima: *"No hablé con nadie. ni siquiera con el abogado fantasmático el cual no había visto desde mi arresto"*.[286]

323. Tras un periodo de siete días después de su detención se permitió al Sr. Tibi el contacto con un abogado particular, pero al carecer de dinero en su poder, no pudo contratarlo. Esto, sumado a la falta de actuación de su defensor de oficio, dio como resultado que el Sr. Tibi no tenga patrocinio legal por un periodo de un mes, hasta que pudo pagar los servicios de un letrado.>"

324. Lo anterior produjo que el Sr. Tibi no pueda contradecir su detención arbitraria y la privación ilegal de su libertad, así como preparar adecuadamente su defensa por un mes.

325. En consecuencia, el Estado desconoció los derechos del Sr. Tibi consagrados en los artículos 8.2.d. y *8.2.e* de la Convención Americana porque no le otorgó asistencia letrada al momento de su declaración preprocesal de fecha 28 de septiembre de 1998; y porque el defensor de oficio que fue designado para representarlo no cumplió en absoluto con su papel.

326. Adicionalmente. el Sr. Tibi en su calidad de ciudadano francés debió haber sido notificado del derecho que tiene de comunicarse con los agentes diplomáticos de su país natal: Francia.

327. La H Corte Interaruericana determinó por unanimidad que

> *..El articulo* 36 *de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares reconoce al detenido extranjero derechos individuales, entre ellos el derecho a la informacián sobre la asistencia consular, a los cuales corresponden deberes correlativos a cargo del ESTado receptor* [...] *el articulo* 36 *de la Convención de Vi/'na sobre Relaciones Consulares concierne a la protección de los derechos del nacional del Estado que envía* v *está*

---

[285] La Comisión Inreramericana arribuvó esta falencia al número de defensores públicos que existe en el país. Así, se constató que *"se dispone de sólo cuatro defensores públicos en cada una de las dos ciudades de mayor población, QUiTo y Guayaquil. las cuales tienen más de dos millones y tres millones de habitantes respectivamente. Según se informa. hay unas dos docenas de defensores públicos en todo el país. Lo que es más. estos abogados se encargan de una gran variedad de casos civiles, administrativos y penales. Este numero es obviamente inadecuado, incluso si se tratara únicamente de defensores públicos para casos penales*." (C1DH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador, 1997, Capítulo]II Derecho al recurso judicial y la administración de justicia en el Ecuador.)

[286] Narración de los hechos realizada por el Sr. Tibi, pág. 7. ANEXO III, VOLUMEN !.l, DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN.

[287] Demanda de la Comisión, p.ig. 9.

integrada a la normativu internorionat de los derechos humanos [...[*Que la expresión "sin dilación ,. utilizada en el articulo 36.I.b) de la Convenrion de Viena sobre Relaciones Consillares, significa que "1 Estado debe cumplir con Sil deber de informar al detenido sobre los derechos que le reconoce dicho precepto al momento de privarlo de libertad y en lodo caso antes de oue rinda Sil primera declaración ante la aIlIOridl1d".288*

328. Es claro que el Estado ecuatoriano omitió notificar al Estado francés sobre la detención, procesamiento y enjuiciamiento del Sr. Tibi. De igual forma, no se notificó al Sr. Tibi de su derecho a comunicarse con las autoridades francesas. Al día de hoy no existe prueba alguna de esta notificación. No fue sino el propio Sr. Tibi y su esposa quienes informaron esta circunstancia a la Embajada de Francia.

329. De haberse cumplido con esta disposición en un tiempo oportuno, se hubiese podido prevenir otro tipo de violaciones a los derechos humanos.

330. El contacto con la Embajada de Francia fue realizado por la Sra. Bamet. La Sra. Bamet era miembro de la misión cultural de Francia. No obstante, cuando se enteró que el Sr. Tibi había sido arrestado, llamó al Consulado, pero le contestaron que no tenían poder para intervenir sobre la justicia ecuatoriana.

331. El Consulado empezó a actuar después de abril de 1996, cuando el Sr. Tibi había sido torturado y cuando empezaron a hablar de su caso en la prensa francesa. Al principio la Cónsul Durin lo fue a visitar en varias ocasiones y consiguió que médicos particulares le brindaran cierta atención médica por su mal estado de salud. Después, frente a la demora de la justicia ecuatoriana, el Embajador Laurent Rapin, en relación estrecha con el Gobierno francés, intervino ante la Corte Superior de Guayaquil, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano. También acudió ante la prensa.

332. El Embajador Laurent Rapin intentó que el proceso del Sr. Tíbí sea resuelto a la mayor brevedad posible y se respeten las garantías judiciales. En este sentido, el Embajador tachó de corruptos a los jueces que tramitaban el caso del Sr. Tibi, señalando que *"esperaban mimas para agilitar el caso"*.[289] No obstante, las autoridades judiciales en vez de agilitar el caso, demandaron al Embajador solicitando que se les indemnice por los 'perjuicios morales' que sufrieron.P"

333. El Gobierno francés, consternado por lo hechos, decidió enviar al Embajador Rapin a Chipre y no designó un reemplazo hasta que la situación del Sr. Tibi se resuelva.

---

288 Corte IDH. Opinión Consultiva UC-l(J/9lJ, *"El Derecho a la lnforma.ián .sobre la Asistenaa consular en el marco de las garantías del debido pmceso legal"*, Jo de octubre de 1999. Párrafo 1, 2, 3, 4.

289 Demanda de la Comisión, pág. *T],*

290 Li luez Angelita Albán entabló una demanda por daño moral el 12 de agosto de 1997 en contra del Embajador, solicirnndo ura indemnización por 20 mil millones de sucres. (Demanda de la Comisión, pág. 27)

334. Lo anterior solo muestra el desprecio por los derechos del Sr. Tibi y un desconocimiento de los compromisos que el Estado ecuatoriano adquirió con la ratificación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En consecuencia, los representantes de la víctima solicitamos a esta H. Corte que declare que el Ecuador conculcó las garantías judiciales mínimas del Sr. Tibi en violación al Art. 8 de la Convención Americana, en especial su derecho a una adecuada defensa.

D. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable (Art, 8.2.g)

335. Como ha quedado demostrado a lo largo de este escrito y de la demanda presentada por la 1. Comisión, el Sr. Tibi fue torturado con el objetivo de que se declarara culpable del deliro que se le imputaba.

336. El Sr. Tibi fue torturado en al menos siete ocasiones. Las torturas consistían en quemaduras con cigarrillos y metales al rojo vivo, descargas eléctricas, sumersiones en barriles de agua hasta casi la asfixia, golpes con bates de baseball, golpes de puño, patadas, insultos y amenazas de muerte en su contra y en la de su familia; todo esto con el único objetivo de obligarlo a que se declarara culpable de los hechos que se le imputaban.

337. Esta coacción fisica y psicológica no solamente representa una violación a su derecho a la integridad personal sino también una vulneración de sus garantías judiciales básicas.

338. En tal sentido. los representantes de la víctima solicitamos a la H. Corte determine que el Estado es responsable de la violación del derecho del Sr. Tibi consagrado en el Arr. 8.2.g de la Convención Americana a no ser obligado a declarar contra si mismo ni a declararse culpable.

Violaciones a la Protección Judicial e ineficacia del recurso de amparo de libertad
(Artículos 25.1 y 7.6 de la Convención Americane)

339. Con relación a la naturaleza del recurso de *babeas rorpns*, la Corte ha manifestado que dicho recurso *"tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad."*[291]

2., Corte IDH, *El Habeas Corpus Bajo Sttstensián de Caruntias (Ar!J.* 27.2, 25.1 *y* 7.6 *Convención Americana Sobre Derribos Hum.1IJo,),* Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie *i* No. 8, párrs, 33-35; Corte -*'DH, Garuntías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts.* 27.2, *25 y 8*

Asimismo, en cuanto a la finalidad del recurso la Honorable Corte expresamente ha señalado que:

> *Irll habeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de libertad. exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencíal lajunción que cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminacion de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o pellas crueles, inhumanas o degradantes.*[292]

340. En la legislación ecuatoriana el recurso de amparo de libertad o *hábeas rorpllJ judicial,* estaba consagrado en el Art. 458 del Código de Procedimiento Penal vigente en la época de los hechos, y disponía: *"Cualquier encausado que con infracción de los preceptos constantes en este Código se encuentre detenido, podrá acudir en demanda de su libertad al Jue: Superior de aquel que hubiese dispuesto la privación de ella [...j".* Es decir, permitía contradecir la legalidad de la detención provisional y de la prisión preventIva ante un Juez superior.

341. No obstante, tal y como lo afirma la 1. Comisión, el Sr. Tibi presentó infructuosamente dos recursos de amparo de libertad. El primero, fue presentado ello de julio de 1996 y alegaba que no había prueba alguna que vinculara al Sr. Tibi al delito que se le imputaba. No obstante, el Tribunal desestimó el amparo de libertad porque presuntamente había acusaciones pendientes en su contra. Cabe resaltar que la declaración del coacusado Eduardo García había sido retirada porque el Sr. Garda alegó que la misma fue producto de torturas. Recordamos también dicha acusación está expresamente prohibida por la legislación ecuatoriana porque el Art. 108 del Código de Procedimiento Penal prohíbe receptar las declaraciones de coacusados,

342. Además, la Corte Superior de Guayaquil demoró 22 días para dictar su resolución, cuando según el Art. 458 del Código de Procedimiento Penal, el juez que deba conocer la solicitud de amparo de libertad *"ordenará inmediatamente después de recibida ésta la presentación del detenido"* y *"dentro de cuarenta y ocho horas resolverá lo que estimare legal. "*

343. Lo anterior, de acuerdo con los criterios de la H. Corte, volvió al recurso de amparo en ilusorio e inefectivo, pues se incurrió en un retardo injustificado en la decisión sobre el mismo.r"

Conrenno» .Amaicana Sobre Derechos Humanos}. Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No. 9, párr, 31; Corte lDH, Caso *Neira Alegría y Otros,* Sentencie¡ del 19 de enero de 1995, Serie e No. 20, párr. 82; Corte IDH, Caso *Suárez RoJero,* Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, párr. 63.

[292] Ibid.

[29] Caso *De la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni rs. Nicaragna,* Sentencia de 31 de agosto de 2001, Serie e No. 79, párr.143; Caso *Ircher Bmnstei»,* Sentencia de 6 de febrero de 2001, Serie e No. 71, párr. 137; Caso *del Tti/mlla! Constitucional,* Sentencia de 31 de enero de 2001, Serie e Nu. 71, párr. 93.

344. El segundo amparo de libertad fue solicitado e! 2 de octubre de 1997, en vista de que el señor Tibi ya había sido sobreseído provisionalmente del proceso penal y debía ser puesto en libertad inmediatamente de conformidad con el Art. 246 del Código de Procedimiento Penal. Contrariamente a lo determinado por la Constitución y leyes penales ecuatorianas este recurso fue resuelto de manera negativa por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, alegando que el Fiscal debería dictaminar en el caso, por lo que la detención del Sr. Tibi tuvo que extenderse hasta el 21 de enero de 1998.

345. Todas estas inconsistencias y violaciones al propio derecho interno evidencian la inoperancia de las instancias judiciales en el Ecuador, situación que ya fue conocida por esta Corte en el caso *Suárez Rasero.*

346. Los recursos de amparo de libertad devinieron en ineficaces, para proteger los derechos violados en perjuicio del señor Tibi y contradecir su detención ilegal y arbitraria. La Corte ya ha establecido que la falta de eficacia del *babeas corpus,* en supuestos como el presente, constituye una violación conjunta de los articulas 7.6 y 25.1 de la Convención.F"

347. Por lo anterior, solicitamos a la H. Corte que declare que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los articulos 7.6 Y25.1 de la Convención Americana, en vista de que la víctima no contó con un recurso sencillo y rápido, o con algún otro tipo de reparación efectiva para la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución ecuatoriana y en la Convención Americana.

La obligación general de proteger y respetar los derechos humanos
(Art. 1. 1 *de la Convención Americana)*

348. El Estado ecuatoriano detuvo de forma ilegal y arbitraria al Sr. Tibi, sus agentes lo torturaron, estuvo detenido en condiciones carcelarias inhumanas, no se lo protegió contra maltratos de terceros, no investigó los hechos de tortura, su prisión preventiva fue excesiva, se le negó las garantías judiciales básicas y un recurso efectivo que lo proteja contra tales violaciones, no se protegió adecuadamente a su familia y hasta la fecha no se le han devuelto sus bienes incautados a pesar que existe una orden judicial que así lo ordena.. Por lo tanto, e! Estado ha incurrido en violación de! articulo 1.1 de la Convención Americana, pues no cumplió con su deber de garantizar y respetar los derechos a la libertad personal, la integridad personal, al debido proceso, a la protección Judicial, a la familia y a la propiedad del Sr. Tibi.

349. El primer párrafo del articulo I de la Convención Americana, establece que

---

29 Corte IDH, *Caso Cantora! Benarides,* Sentencia de L8 de agosto de 2000, párrafo 170.

> *1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condicion social,*

350. Respecto de esta obligación, la Honorable Corte ha reiterado que en virtud de tal el Estado está obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención y a organizar el poder público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, Según las reglas del derecho de la responsabilidad internacional del Estado aplicables en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la acción u omisión de cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la Convención .vrnencana.[295]

351. La importancia de tal cláusula convencional radica en que ésta es fundamental para determinar si una violación de los derechos humanos reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado Parte, En efecto, dicho artículo pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y de garantía, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención.?"

352. En este sentido, en el Caso *Castillo Páez*, la Corte sostuvo que

> *En relación con las violaciones a la Convención Americana anteriormente citadas, la Corte considera que el Estado peruano está obligado a investigur los hechos ql/e las produjeron. Inclusive, en el supuesto de que dificultades del orden interno impidiesen identificar a los individuos responsables por los delitos de esta naturaleza. subsiste el derecho de los familiares de la victima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso. dónde se encuentran sus restos, Corresponde por tanto al Estado, satisfacer esas justas expectativas por los medios a su alcance. A ese deber de investigar se suma el de prevenir la posible comisión de desapariciones forzadas y de sancionar a los responsables de las mismas, Tales obligaciones a cargo del Perú se mantendrán hasta su total cumplimiento. (...)*[297]

353. Por 10 anterior, los representantes del Sr. Tibi y sus familiares solicitamos a la Honorable Corte que declare que el Estado ecuatoriano ha incumplido con la obligación general consagrada por el Art. 1.1 de la Convención Americana,

---

[295] Corte 1DH, Caso de la *Commnidad Mayagna Sumo (Awas Tillglll),* Sentencia de 31 de agosto de 2001, Serie e: No. 79, párr. 15-1; Caso *Irchcr Branstein.* Sentencia de 6 de febrero del 2001, Serie e No. 7-1, párr. tri8; Caso *Velisquez Rodrigues*, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 210.

[296] *Corte* IDH, Caso *Velásquez Rodrigues*, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 164.

[297] Corte 1DH, Caso *Castillo Paez*, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie e No. 3-1, párr. 90.

La obligación general de adecuar la legislación intema a para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en la Convención
(Art. 2 de la Convención)

354. Los Estados tienen una obligación de prevención, consagrada en el artículo 2 de la Convención Americana, mediante la cual los Estados partes asumen el compromiso convencional de adoptar todas las medidas que sean necesarias para adecuar sus disposiciones internas a los ordenamientos y parámetros internacionales.

355. En este sentido la Corte ha reafirmado *"el compromiso de los Estados de respetar los derechos y libertades reconocidos en {la Convención Americana} y (/ garantizar SI/libre y pleno ejercicio (/ roda persona sometida a su jurisdicción y a adoptar, en* S/1 *caso, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades".*[298] Esto ha sido reafirmado por la Honorable Corte en sus opiniones consultivas.[299]

356. El Art. 2 manda

> *Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter. los Estados partes se comprometen a adoptar. con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convencián. las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.*

357. Ha quedado demostrado que la incompatibilidad de la legislación ecuatoriana en materia de tortura con los estándares internacionales no sólo configura una flagrante violación a la disposición antes citada, sino que pone en riesgo la violación de varios de los derechos protegidos por la Convención hasta en tanto no se adecue la legislación y se eliminen aquellas prácticas contradictorias a los parámetros interamericanos e internacionales en materia de prevención, protección y resarcimiento de la tortura.

358. De igual forma, ha quedado demostrado que los detenidos por la Policía no comparecen ante un juez para rendir su testimonio preprocesa!, sino ante un fiscal, quien, como lo señaló la Comisión.'?" no cumple funciones judiciales. Lo cual es violatorio al derecho de toda persona a ser Llevado sin demora ante un juez, consagrado en el Art. 7.5 de la Convención, y del derecho a ser oído por un juez o tribunal competente e imparcial, consagrado en el Art. 8.1 del mismo instrumento internacional.

---

[298] Corte IDH, *"Responsabilidad Internaaona] por expedición y aplicación de leyes natatorias de la Conrenaon (Arts. / y 2 contenaon americana sobre derechos Inonanos],* Opinión Consultiva OC-14/94, de 9 de diciembre de 1994, p.irr. 32

[299] Corte lDH, *"Responsabilidad Internacional por expedición y aplicación de leyes tiolarorias de ia Canrendán (ArtJ. ! y 2 conren.io» americana sobre derechos humanos).* Opinión Consultiva OC-14/94, de 9 de diciembre de 1994, párr. 37. Corte IDH. *Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Hronunos (Arts. 41, 42, 44, 46. 47. 50 y 51 de la Coniencion .Americanu sobre Derechos Humanos].* Opinión Consultiva OC-13/93 de 16 de julio de 1993. Serie A No. 13, párr. 26.

[300] Demanda de la Comisión, pág. 24

359. Finalmente, les representantes de la víctima deseamos reafirmar las aseveraciones de la Comisión en el sentido que:

> *"En el caso Suáre: Rasero, la Honorable Corte dictaminó que el Ecuador había violado los Articulas 7 y 8 de la Convención Americana, y le ordenó adoptar las medidas necesarias para asegurar que violaciones tales como las establecidas en el presente caso no volvieran a repetirse en su jurisdicción, Sin embargo, de lo que se trata el caso Tibi es precisamente de una reiteración de las mismas violaciones".*[301]

360. Y que esta falta de adecuación de la legislación interna a la internacional pone en riego la violación de los derechos de varias personas, tanto así que *"hay decenas de casos similares que están pendientes ante la Comisión".*[302]

361. Por todo ello, solicitamos a la Honorable Corte que declare que el Estado ecuatoriano ha incumplido con la obligación derivada del artículo 2 de la Convención Americana y que, por tanto, está en la obligación de adoptar todas aquellas medidas tendientes a derogar prácticas y leyes que sean contrarias a la propia Convención.

REPARACIONES
(Art. 63.1 *de la Convención Americana)*

A. Consideraciones previas

362. Es un principio general de derecho internacional reiteradamente reconocido que una violación de normas supranacionales, que pueda ser atribuida a un Estado, genera para éste responsabilidad internacional y como consecuencia el deber de reparar.

363. La Convención Americana prescribe en su articulo 63.1 el deber de reparar. La Corte en interpretación del mencionado artículo, ha reiterado en su jurisprudencia *"que es un principio de derecho internacional que toda violación de una obligación internacional que hava producido un daño, comporta el deber de repararlo adecuadamente.* "303 Igualmente la Corte ha señalado que el Art. 63,1 *"constituye l/na norma consuetudinaria que es, además, uno de los principios fundamentales del actual derecho de gentes "304*

---

301 Demanda de la Comisión, pág. 38.

302 Demanda de la Comisión, pág. 39.

30.1 Corte IDH, Caso *Velásquez Rodríguez.* Sentencia de indemnización compensatoria. Serie e No. 7, párr. 25; Caso *Baen« Ricardo y Otros,* Sentencia de 2 de febrero de 2001, Serie e No. 72, párr. 201. Cfr. Corte IDI-I, Caso *de la "Pane! blanca'* (Caso Paniagua Molares y Otros), Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie e No. 76, p.irr. 75; Caso *Villagrán Moralesv Otros,* Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 59; Caso *Cesti Hurtado,* Sentencia de 31 de mayo de 2001. Serie C No. 78, párr. 32

;"4 Corte IDH, Caso *.Aloeboetoe,* Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie e No, 15, párr. 43.

364. Por otra parte, en al ámbito de los derechos humanos, el derecho a la reparación. también cumple una función preventiva y constituye una de las bases para combatir la impunidad de las violaciones de los derechos humanos. De acuerdo con los términos de la Convención, una vez establecida la responsabilidad del Estado, éste tiene la obligación primordial de reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de los derechos o libertades conculcados y. en segundo lugar, pagar una justa indemnización a la parte lesionada.v"

B. Beneficiarios del derecho a la reparación

365. La Corte ha establecido que son titulares de este derecho todos aquellos que resulten directamente perjudicados por las violaciones a los derechos humanos establecidos en la Convención.v" Igualmente. ha reiterado, que los familiares de una persona que ha sido víctima de una grave violación a los derechos humanos, son igualmente víctimas de los hechos, ya que la afectación y el dolor al que los familiares son sometidos, los hace sujetos del mismo daño sufrido.

366. En este sentido, la Corte ha manifestado que el término "familiares de la víctima" debe entenderse como un concepto amplio, que abarca a todas aquellas personas vinculadas por un parentesco cercano y que, por tanto, los hijos de la víctima, sus padres y hermanos deben ser tenidos como familiares y podrían tener derecho a recibir una indemnización siempre que cumplan los requisitos fijados por la jurisprudencia ele la Corte.v'"

367. En el presente caso los representantes de la víctima consideramos que el Estado ha violado los artículos 1.1,2, S, 7, 8, 17,21 Y 25 de la Convención Americana y los artículos 1, 6 Y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio del Sr. Daniel David Tibi, así como los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención en perjuicio de la Sra. Beatrice Baruet, sus hijas Sarah Vachon y Jeanne Camila Vachon, la hija de ambos, Lisianne Tibi, y el hijo del Sr. Tibi, Valerian Tibi.

C. Representación

368. Los representantes de las víctimas tenemos la representación legal otorgada mediante poder de las siguientes personas:

1. Daniel David Tibi a la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y al Centro por la Justicia y el Derecho Inrernacional, CE) IL. 30S

'"5 Fi\IINDEZ LEDESMA, Hector, *El Sistema Interamencano de Protecaon de los Derechos Hsonanos. Aspectos Institucionales y Procesales.* Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 1999, p. 497.

306 Corte IDH, Caso *El Amparo*, Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie e No. 26, párr. 38.

307 Corte [DH, Caso *Loayza Tamayo*, Sentencia de 27 de noviembre de 1998, párrafo 92.

308 Anexo 20 de la presente demanda.

2. Beatrice Baruet, a la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL.[309]
3. Lisianne Tibi, Valerian Tibi, Jeanne Camila Vachon y Sarah Vachon a la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL.[310]

D. Modalidades de la reparación

369. La expresión "reparación" es el término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido, ya sea a través de la "*restitutio in integrum*" de los daños causados, de la indemnización, de la satisfacción o de garantías ele no repetición.[311]

370. En su jurisprudencia reciente, la Corte considera corno parte de la reparación, además ele la justa indemnización, el resarcimiento de las costas y gastos en que hubiese incurrido la víctima o sus familiares con motivo de las gestiones relacionadas con la tramitación de la cama ante la Justicia, tanto en la jurisdicción interna como internacional.[312]

371. La indemnización pecuniaria permite compensar con un bien útil, universalmente apreciado, como lo es el dinero, la pérdida o el menoscabo de un bien diferente que no es posible reponer o rescatar en virtud de su propia naturaleza. Así, cuando no es posible, suficiente o adecuada la reparación integral de las consecuencias en especie, resulta procedente el pago de una justa indemnización en valor monetario que compense las perdidas y los daños ocasionados por la violación.

372. Esta indemnización debe procurar compensar los daños patrimoniales y extra patrimoniales. Es decir, comprende el daño material (daño emergente y lucro cesante) y el daño moral.[313] La C011e ha establecido, asimismo, que *"la indemnización debe ser otorgada en la extensión y medida suficientes para resarcir tanto los daños materiales como los morales'T"* y ésta debe proveerse en *"términos suficientemente amplios para compensar. en la medida de lo posible, la perdida sufrida"*.[315]

---

[309] Anexo 20 de la presente demanda.
[311] Corte IOH, Caso *Godinez Cruz*, Scnrcnci.r de 21 de julio de 1989, p.irr. 24; Corte IOH, Caso *Castillo Paéz*, Sentencia de 27 de noviembre de 1998, párr 48; Corte IOH, Caso *Loayza Tamavo,* Sentencia de 27 de noviembre de 1998, p.irr 85,
[312] Corte IOH, Caso *Baena Ricanlov Otros,* Sentencia de 2 de febrero de 2001, p:irr 204.
[313] Corte IOH, Caso *Aloeboetoc.* Sentencia de de 10 de septiembre de 1993, párrafos. 47 y 49; Corte]DH, Caso E! *Amparo*, Sentencia de 14 de septiembre de 1996, párr. 15; Corte IOH" Caso *Neira Alegría y Orm,.,* Sentencia de 19 de septiembre de 1996, p.irr. 38.
[31 1] Corte lDH, *Caso Aloeboetoe*, Sentencia de 10 de septiembre de 1993, párrafos 47 y 49; Corre lDH, Caso E! *Amparo*, Sentencia de 14 de septiembre de 1996, párr. 36; Corte lOH, Caso *Nara Alegría y*

373. De otra parte, es importante resaltar que el Sistema Interamericano, en su loable esfuerzo de ampliar los criterios de reparación, ha desarrollado conceptos novedosos como el denominado *"proyecto de vida de la víctima"*, considerando que éste atiende a la realización futura de la persona afectada[316]

374. Como bien lo sostiene la 1. Comisión, en el presente caso *"no es posible aplicar la norma de la restitucion in integrum debido a la naturaleza de los daños sufridos, la cunntificacion de las pérdidas en términos pecuniarios surge como alternativa necesaria"*.[317] En tal sentido, los representantes de la víctima pasamos a detallar todos los daños que el Sr. Tibi y su familia sufrieron y los consecuentes medios de reparación.

i. Daños materiales

a. Daño Emergente

375. El daño emergente es el detrimento directo, menoscabo o destrucción material de los bienes, con independencia de los otros efectos, patrimoniales o de otra índole, que puedan derivar del acto que los causó. Comprende el valor de los bienes destruidos, los gastos realizados para obtener información acerca del paradero de las víctimas y cualquier costo adicional que la violación cometida pueda haber causado a la victima.'!" Dentro de este rubro :;e pueden incluir los gastos de rehabilitación en el caso de una persona lesionada cuando exista evidencia suficiente que demuestre la necesidad, por ejemplo, de un tratamiento psicoterapéutico.'!"

376. Los representantes de las víctimas queremos destacar que en casos como el presente, donde el Estado ha mostrado un completo desprecio hacía la víctima y sus familiares, éstos deben acudir a abogados, juristas, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, autoridades extranjeras, etc., con el objeto de denunciar los hechos o presionar a las autoridades para que realicen actividades encaminadas a garantizar la justicia. Todas estas gestiones suponen un gasto enorme y debe ser considerado y reconocido por la Honorable Corte como parte del daño emergente.

377. Procederemos a especificar los gastos realizados por la víctima y sus familiares, informando a la Honorable Corte que los montos de los mismos son estimados con base en los cálculos realizados por la misma víctima, sui que los representantes de la

---

Otros, Sentencia de 19 de seotiembre de 1996 párr. 38; Corte IDH. Caso *Castillo Páez*, Sentencia de 27 de noviembre de [')98, párr. 69.

[315]Corte IDH, Casu ¡ *'elásquez Rodríguez*, Interpretación de la sentencia de indemnización compensatoria, parr 27.

[316] Curte lOH, Caso *Loayza Tamayo*, Sentencia de 27 de noviembre de 1998, párr, 147.

[317] Demanda de la Comisión, pág. 45.

[318] FAUNDEZ LEDESMA, Hecror. *El Sistema lnteramericano de Protecaon... Ob.*, cir., p. 514.

[319] Corr« JDB, Caso *Cantoral Benavides*, Sentencia de 3 de diciembre de 2001, No. 88, párr. 51.

victima tengamos recibos de cada uno de ellos, por lo cual realizaremos un detalle aproximado de éstos. Además, dadas las dificultades de idioma y la distancia entre la vicrima y sus representantes, nos reservamos el derecho de presentar nuevos recibos en una etapa postenor.

378, La indemnización por el daño emergente debe comprender lo siguiente:

1. Gastos ocasionados durante la detención del Sr. Tibi.

379. Una suma de dinero correspondiente a los gastos de traslado de los familiares, en particular de la Sra. Beatrice Baruet, para visitarlo al Cuartel Modelo de Guayaquil y al Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil.

380. La víctima refiere que durante los 849 días en que estuvo detenido, su compañera realizó 74 viajes desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil, y que en varias ocasiones una de sus hijas la acompañaba, La Sra. Baruet permanecía alrededor de tres días en cada visita. El costo aproximado de cada viaje (incluida la estadía) era de cien dólares ($100,00). Es decir que 74 viajes por $100,00 dólares dan un total de $7.400,00 dólares. Como sustento de lo anterior, los representantes de la víctima solicitamos a la H, Corte requiera al Estado ecuatoriano que presente los libros de visitas del Cuartel Modelo y Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil para dar cuenta de cuántas veces la Sra. Baruet visitó al Sr. Tibi,

381. Además, en octubre de 1995 fue necesario que Sarah sea trasladada a Francia, por la seria situación en la que se encontraba la familia. El costo aproximado del pasaje de la niña fue de $1.500,00 dólares.

382. A esto hay que agregar los gastos de supervivencia en la cárcel (alimentación vestuario, implementos d-e aseo, etc.)[320] y las llamadas telefónicas tanto desde la cárcel como hacia la misma. El monto total de estos gastos ha sido calculado por la víctima en $3.000,00 dólares.

383. En consecuencia, el total de gastos en que el Sr. Tibi y su familia incurrió mientras estuvo detenido ascienden a $11.900,00 dólares. Solicitamos a la Corte que fije en equidad los mismos, teniendo en cuenta los cálculos aqui realizados.

2. Gastos de viaje a la sede de la Comisión

384. Durante las gestiones (¡ue se realizaron ante la 1. Comisión Interamericana, hubo la necesidad de viajar desde Francia a la ciudad de \Vashington De., Estados Unidos de

---

-",- Recordamos a la H. Corte que los primeros 45 días de detención del Sr. Tibi, nunca se le proporcionó alimento, era él quien tenía que comprarlo a otros internos. De igual forma, durante los 28 meses de detención del Sr. Tibi, el Estado nunca le proveyó de vestuario o implementos de aseo, su familia tenia que proporcionárselos.

Norteamérica, para la audiencia de 14 de noviembre de 2001, en el 113° período de sesiones. En dicho viaje se tuvo que comprar boletos de avión de viaje redondo; el Sr. Tibi tuvo que hospedarse por cinco días, e incurrir en gastos de alimentación y transporte. a un costo total de **$3.000,00** dólares.

385. En consecuencia, los representantes de la víctima solicitamos a la Corte que fije en equidad el monto de los gastos incurridos durante las gestiones ante la Comisión, teniendo en cuenta los cálculos aquí realizados.

3. No devolución de los bienes incautados

386. Como ha quedado demostrado, el Estado incautó una serie de bienes del Sr. Tibi y hasta la presente fecha no han sido devueltos. La lista oficial de la Policía ecuatoriana de pertenencias incautadas al Sr. Tibi es la siguiente:

> *"l. una caja de piástico 1'011 vidrio dos piedras color amartillo y ocho piedras de color lila de diferentes tamaños.*
> *2. una funda de gamuza pequeña conteniendo 1/11 anillo de metal amartillo. en .11/ centro una piedra de color verde, 1'011 12 piedras color blanco en .11/ alrededor.*
> *3. dos pedazos de papel contenirndo cuatro piedras color lIegro, dos color aZI/I. una color blanco v una color morado. 'oral 7.*
> *4. dos pedazos de papel conteniendo dos piedras de color blanco.*
> *5. Dos pedazos de papel conteniendo 31 piedras color verde de distintos lamwios.*
> *7. dos pedazos de papel conteniendo una piedra de rolar verde.*
> *8. dos pedazos de papel conteniendo una piedra de color verde.*
> *9. dos pedazos de papel conteniendo 21 piedras de color verde de distintos tamaños.*
> *10. dos pedazos de papel rontrniendo 5 piedras de color verde.*
> *11. dos pedazos de papel conteniendo 17 piedras de color verde.*
> *12. dos pedazos de papel conteniendo 2 piedras de rolar verde.*
> *13 dos pedazos de papel conteniendo 14 piedras de color verde.*
> *14. dos pedazos de papel conteniendo 2 piedras de color verde.*
> *15. dos pedazos de papel conteniendo 2 piedras de color verde.*
> *16. dos pedazos de papel conteniendo 33 piedras de color azul oscuro.*
> *17. dos pedazos de papel.*
> *18.1/11 estuche de madera con una mini pesa color placeada compuesta de 18 piezas.*
> *19. una moneda de 5 francos.*
> *20 dos monedas de dos francos.*
> *21. dos monedas de unfranco.*
> *2). una moneda de 20 francos.*
> *23. dos monedas de ltlfrancos.*
> *24. dos monedas de 20 centavos defranco.*
> *25. dos monedas de lO centavos defranco.*
> *26. un par de lenter con estuche, 1'011 marco color café con rayas amartillas en /1110 de SI/S cristales tiene <«[aconnable jeans lunenes»:».*
> *27. una tarjeta visa No. 4976930000335448 a 110mbre de DANIEL DAVID TiB1.*
> *28. una tarjeta NORPLUS No. 6200173858 a nombre de DAN1EL DAvto TIB1*
> *29. una tarjrta llave CALU HOME.*
> *.lO. /111 pasaporte N". 931D62605. de la República de Francia a nombre de DANIEL DAVID TIBI.*
> *31. una cedula de identidad del Ecuador No. 171493206-6 a nombre de DANIEL DAVID TIBI.*
> *32. /111 cenit/cado dr empadronamiento a nombre de DANIEL DAVID TlBI*
> *33. un formulario de migración a nombre de DAN1EL DAVID TlBl.*
> *34. unafotocopia del pasaporte v de la crdula de identidad de DANIEL DAV1D TlBl.*

35. una [otocopia de tarjeta indice del ciudadano WOJCIECH KONRAD KULWIEC NOWAKOWSKY
36. una matricula del vehículo ml/rca Volvo de plazas PGN244 a nombre de HERRERA SANTA.CRUZ EDGAR
37. IIn vehiculo marca Volvo de placas PGN244, color vino, el mismo que se encuentra retenido en rl patio de las oficinas de INTERPOL de Pichincha.
37. 1111 porra directorio color concha de vino conteniendo un directorio telefónico conteniendo varias tarjetas de presentarián. dosjotogratias de mujer, varios pedazos de papel con varias anotaciones.
38 IIn directorio color negro, en su interior varias anotaciones.
39. Ill1a agenda de color azul conteniendo varias tarjetas de presrntarián y una fotografia de hombre
40. doce bauchers de consumo a nombre de DANIEL TIBI
41. una papeleta de depósito del Banco del Pichincha a la cuenta corriente No. 522426 a nombre de HEATRICE B. VACHON
42. unafunda de papel pequeña conteniendo cuatro papeles varios
43. 1111 cheque del B4.NQUE COURTOlS a nombre de DANIEL TIBI.
44. una factura de AMC Automovilcs S.A. a nombre de TIBI DANIEL
45. una fotocopia coll el logotipo de MANUFACTURES MACHINES DU HAUT-RHIN.
46. una [actura de compra de divisas a nombre de DANIEL TIBI
47. 1111 oficio coll el logotipo COF/CA
48. tres papeles con el logotipo BANQUE COURTOIS a nombre dr DANIL TIBI.
49. tres recibos afavor de DANIEL TlBI
50. unafactura de ECUACAMBIO afuvor de DANIEL TIBI
51. tres catálogos de Fondo Arte Contemporáneo
52. un catálogo de CATASSE
53. un libretin de anotaciones color blanco.
54. un detalle de muestra privada del pintor CARLOS CATASSE
55. unafunda de gamusa color nesro
56. dosfundas pequeñas de color verde y turquesa conteniendo papeles para envolver cigarrillos
57. una funda pequeña color blanco conteniendo un poco de semilla.
58. una lupa color plateada.
59. tres esferográficos color negro de tres servicios, otro de color rojo y otro de color negro
603 pinzas de metal, color plateado de distintos tamaños
61. dos navajas IInG coll cabo de madera y otra de aluminio con empuñadura
62. IIn resaltador color lila.
63. tres boquillas para cigarrillos y 1111 protector de aluminio
64. Ull palo de madera con muescas
65. Ill1a tableta de Baygon
66. unufuctura de MARCOS YARTE afavor de DANIEL 17BI.
67. una porta chequera color azul oscuro coll amartillo conteniendo IIn talonario de una chequera del BANQUE COURTOIS v varios papeles
68. Ill1a billetera conteniendo una licencia de conducir de motocicleta y licencia sportman a nombre de DANIEL DAVID TIBI. una cédula de identidad de la menor OCEANE TIBI CONILH DE BEYSSAC, una tarjeta de GLOBAL COM a nombre de DANIEL DAVID TIBI. tres fotografías tamaño carnet y varias tarjetas de presentación.
69. Ull control remoto marca UF[MASTER serie No. HBWlD3505
70. un llavero con diez llaves
71. una caja 18 balas 9 111m.
72. Ull reloj color plateado coll amarrillo marca TIMEX INDIGLO
73. una calculadora color blanco marca ELECTRONIC CALCULATOR
74.una cadena de metal amarrillo coll eslabones 3 pequeños y un grande con un dije de una figura de un rostro, en el centro se encuentra una piedra de color verde.
75.41 billetes de lO.000 sucres
76. un billete de 5.000 SUC1'es.
77. 'res billetes de !.000 surres.
78. cuatro billetes t'e 500 sucrcs

79. diez billetes de 100.1//("','.1. dando 1/11 Toral de 421.000 sucres
SO una correa de color negro
81. 1/11 *frasco de Visina*
82. ***varios*** *papeles* ***consistentes*** *en recibos,* ***anotaciones varias*** *yfundas* ***de sobre***
S3. unafotografia de mujer ,'1/ blanco y negro
8-/. ***una ma era e color negro.*** [321]

387. En tal sentido solicitamos a la H. Corte reconozca la cantidad estimada por el Sr. Tibi de $135.000.00 dólares correspondientes al avalúo comercial de las piedras preciosas y demás objetos incautados. incluido el avalúo del vehículo marca Volvo del Sr. Tibi, que hasta la presente fecha no han sido devueltas.

388. De la misma manera, las tarjetas de débito y crédito que fueron incautadas al Sr. Tibi (ítem 27 y 28 de la lista citada) fueron ilegalmente usadas mientras en Sr. Tibi estaba detenido, por lo que su cuenta de banco en Francia fue vaciada. perdiéndose un monto de $6.UOO,OO dólares de la cuenta de ahorros y cargándose un gasto de $4.857,00 dólares en la tarjeta de crédito.

389. El total de todos estos perjuicios asciende al monto de $145.857,00 dólares. Solicitamos a la Corte que fije en equidad esta suma, teniendo en cuenta los cálculos aquí realizados.

4. Gastos Médicos

390. Los representantes de la víctima hemos demostrado que el Sr. Tibi fue torturado brutalmente a manos de agentes del Estado y además sufrió condiciones de detención deplorables y maltrato de otros internos, todo lo cual afectó su integridad física y psicológica. Entre los gastos que el Sr. Tibi incurrió se cuentan:

- 150 sesiones ele psicoterapia, cada una por el costo trescientos francos franceses (FF 300,00) que equivalen a $47.61 dólares[322], que en total suman aproxunadarnente $7.141,00 dólares. Solicitamos a la Corte que fije en equidad este monto, teniendo en cuenta los cálculos aquí realizados.
- necesitó una dieta alimenticia especial, tratamiento para sus dificultades auditivas. visuales y respiratorias. y demás tratamientos fisicos. Además el Sr. Tibi deberá seguir incurriendo en gastos médicos futuros. Solicitamos a la Corte que fije en equidad este monto.
- la reparación de sus dientes y la compra de prótesis dentales está estimada en un monto de FF SO.000,00 francos franceses por S implantes en el maxilar superior; FF 80.000.00 francos franceses por 8 implantes en la mandíbula; FF

---

[321] Lista de las pertenencias encontradas "n poder de Daniel Tibi el día de su arresto. ANEXO 111, VOLUMEN I.2.G) DE L:\ DEMANDA DE LA COMISION.

[322] El promedio de la corizacion del franco francés desde el año de 1998 hasta el 2001 es de 6,30 francos por dólar. Ver cotizaciones del franco, Anexo 21 de la presente demanda. http://www.bcentral.cl/esp/infoeconornica/seriesindicadores/pdf'/Monedasj-xrranjeras.pdf

126.000,00 francos franceses por 28 dientes de cerámica, todo lo cual da un total de FF 286.000,00 francos franceses, aproximadamente $45.397,00 dólares,[323] que solicitamos sean canceldos en su totalidad por el Estado ecuatoriano.

b. Lucro cesante

391. El lucro cesante se refiere exclusivamente a la pérdida de ingresos económicos como consecuencia de la interrupción no voluntaria de la vida laboral de la víctima, es la expectativa cierta que se desvanece por la violación sufrida.

392. Cuando el destinatario de la indemnización es la misma víctima, e! lucro cesante debe comprender todo lo que ésta dejó de recibir en virtud de la violación. El cálculo debe tener en cuenta, entre otros factores, el tiempo que la víctima permaneció sin trabajar.

393. La base para fnar el monto de la indemnización debe ser calculada de acuerdo con los ingresos correspondientes al periodo que estuvo sometido a detención y prisión.'>'

394. Como lo hemos demostrado, el Sr. Tibi fue despojado de todo: de su libertad, sus bienes, dinero en efectivo, su automóvil, documentos, objetos personales, las piedras preciosas y otros objetos con Jos que comerciaba. Además se interrumpió su actividad comercial y con ello las ganancias para él y su familia. Razón por la cual evidentemente la cuantificación de la indemnización debe ser a partir de! día 27 de septiembre de 1995. Ahora bien, dada la gravedad de las lesiones de la víctima, éste no puede desplegar una actividad productiva, por lo que el lucro cesante se extiende en el tiempo. Así, el Sr. Tibi en la época de los hechos ganaba un aproximado de $2.500,00 dólares mensuales, multiplicados por los 28 meses que estuvo recluido dan la cantidad de $70.000,00 dólares. El Estado también debe reconocer un salario mensual al Sr. Tibi ya que, como lo manifestamos anteriormente, el Sr. Tibi no puede trabajar de forma normal, no puede realizar actividades fisicas como lo hacía antes y no puede movilizarse y desplegar una actividad laboral regular. Este salario se contabilizará desde la fecha de liberación del Sr. Tibi, es decir desde el mes de enero de 1998 en adelante, debiendo el Estado entregar en el primer pago que haga a la víctima después de que la Corte así Jo haya ordenado la cantidad correspondiente al periodo entre enero de 1998 hasta la fecha de pago, y de alú en adelante un salario rnensal fijado en equidad por la Corte.

ii. Daño Moral

---

[323] Proyección de gastos realizada por el Dr. Gérad Ohayon. Anexo 22

[324] Corte IDH, Caso *Cantora/ Benaridcs,* Sentencia de 3 de diciembre de 2001, No. 88, párr. 49; Corte lDH, Caso *Velásquez Rodríguez,* Indemnización Compensatoria, Sentencia de 21 de julio de 1989, párr. 40

395. La reparación por daño moral proviene de los efectos psíquicos sufridos como consecuencia de la violación de los derechos y libertades. Al respecto la Honorable Corte ha expresado que el daño moral es *"resarcible según el Derecho Internacional y. en particular, en los casos de violación de los derechos humanos'í.e>*

396. La H. Corte ha dicho que resulta *"propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a las agresiones y vejamenes -CO/110 en el presente caso- experimente un sufrimiento moral"*,[326] estimando que *"no se requieren pruebas para llegar a esta conclusión"*.[327] La jurisprudencia de la H. Corte ha señalado que tanto la víctima, como sus familiares experimentan un sufrimiento moral,[328] el cual deberá ser reparado.

a. El daño moral respecto de Daniel Tibí

397. El daño moral del Sr. Tibi proviene de varios hechos. En primer lugar, de la violación a su integridad personal que involucra el sufrimiento en distintos ámbitos: el fisico, el psíquico y el moral, reflejados en la tortura que fue víctima y, a más de ocho años de ocurridos los hechos, de las secuelas físicas y psicológicas que aún sufre, En segundo lugar, en virtud de la ilegalidad y arbitrariedad de su detención, la impotencia de no poder demostrar su inocencia, la falta de investigación de la tortura, la duración excesiva de la prisión preventiva, las pésimas condiciones carcelarias que sufrió y de todas las demás violaciones que han sido detalladas en este documento.

398. Además hay que cı msiderar que no pudo ver a sus hijas e hijo, se afectó su honra en el Ecuador y Francia, sufre y sufrió dependencia psicológica y material y su familia se vio destruida.

399. La vida del Sr. Tibi fue deshecha, todo su mundo se vino abajo y nunca podrá l"eCUperarse totalmente de todos los perjuicios que el Estado ecuatoriano cometió en su contra. Las torturas en contra del Sr. Tibi rompieron su personalidad y sus lazos familiares, cambió radicalmente su vida y lo puso en una situación de desventaja que hasta la fecha perdura. El Sr. Tibi tiene problemas psicológicos importantes y para dormir, pesadillas frecuentes, se despertaba por la noche, tiene flashbacks permanentes de lo sucedido, tuvo problemas de carácter con irritabilidad, síndrome depresivo y momentos de gran depresión, comportamientos de hiper-vigilancia, no puede mantener ningún tipo de relación con la policía y se cansa fácilmente, Por todo esto, el Estado debe reconocer este

---

[325] Corte [DH, Caso *Velásquez Rodriguez*, Sentencia de 21 de julio de 1989, párr. 27; Corte [DH, Caso *Godínez Cruz*, Sentencia de 21 d- julio de 1989, p.irr. 24; Corte IDH, Caso *El Amparo*, Sentencia de 14 de septiembre de 1996, párr 35; Corte lDH, Caso *C'¡J/i!o Páez*, Sentencia de 27 de noviembre de 1998, párr 85.

[326] Corte lDH, Caso *¡ Velásquez Rodriguez*, Sentencia de 10 de septiembre de 1993, párr. 52.

[327] Corte IDH, Caso *Aloeboetoe y Otros*, Sentencia de 10 de septiembre de 1993. párr. 52; Corte ¡DH, Caso *El Amparo*, Sentencia de 14 de septiembre de 1996, parr. 36.

[328] Cnrre IDH, *CIJO Aloeboetoe*, Sentencia de 10 de septiembre de 1993, párr, 52.

daño y compensar al Sr. Tibi con una justa indemnización. Si bien es cierto que no puede estimarse en dinero rodas estas violaciones, al menos el Estado debe proveer una suma adecuada que ejemplifique la gravedad de la tortura y las secuelas morales de la misma.

400. En este sentidc sus representantes solicitamos a la Honorable Corte que atendiendo a casos similares le conceda por este concepto la suma de $100.000,00 dólares.

b. El daño moral en relación con los familiares del Sr. Tibi.

401. La Sra. Beatrice Baruet, sus hijas Sarah Vachon y Jeanne Camila Vachon, la hija de ambos, Lisianne Tibi, y el hijo del Sr. Tibi, Valerian Tibi también sufrieron las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos.

402. La Sra. Beatrice Baruet se trasladaba todos los viernes a la ciudad de Guayaquil y permanecía ahí todo el fin de semana; igualmente viajaba en sus días de vacaciones. Así pues constató las lesiones del Sr. Tibi y no pudo sino producirle dolor y desesperación. Por su parte, Sarah, de 12 años, tuvo que ir a Francia y no pudo estar con su familia por alrededor de dos años Jeanne Camila, de 6 años, en la navidad de 199S estuvo en la cárcel cuando se produjo una pelea entre dos bandas carcelarias que dio como resultado 4 muertos V 16 heridos; la niña quedó traumatizada y desde ahi no quiso volver a visitar al Sr. Tibi. El hijo del Sr. Tibi, Valerian. de 11 años de edad, que al momento de la detención del Sr. Tibi estaba en Francia, no pudo ir al Ecuador en el verano de 1996, como estaba previsto, y no pudo ver al Sr. Tibi durante los 28 meses en que estuvo detenido. Según el Sr. Tibi, Valerian *"perdió toda la confianza que un adolescente tiene a su padre, y desde entonces queda secuelas en su mente porque la imagen del padre se mancho en forme irreversíble".*[329] Finalmente. la pequeña Lisianne nació cuando el Sr. Tibi estuvo preso y, en consecuencia, sus primeros dos años de vida no los pasó con su padre.

403. Según la doctrina especializada el recién nacido

> *"descubre* SII *entorno* a *partir de sensaciunes físicas y emocionales qlle siente desde qlle nace. No se percibe* CO/IIO *un ser diferente de* Sil *madre, qlle constituye todo* Sil *universo.* SI/S *relaciones se organizan en tO/1/0 a su necesidad de alimentación, (jase oral),*
> *Es difici! imaginarse cual es el impacto de la scparación de los padres en el recién nacido. En general se refuerza la relación madre -- hijo y se crea U/la cierta dificultad afectiva entre el padre y el bebé. La madre debe encauzar sus sentimientos y crear una relación de confianra y comprensión entre padre " hijo. „330*

404. Por su parte, cuando alcanzan los niños de seis meses, y hasta los llueve meses,

---

[329] Recuento de los sufrimier.ros de la familia del Sr. Tibi. Anexo **23**.
[330] MEÁN, Carolina, *Los niños y la srparaaon de los padres*, http://www.babyespana.com/reference/art063.htm

"Por la ausencia fisico del padre, el niño conoce la separación de los progenitores, AI principio le busca y luego se acomoda a la situación, cuando comprueba que ésta búsqueda es en vano.
{...}
El bebé es muy sensible al estado psíquico de sus padres y puede serle diftcil comprender las razones de los problemas a los que no es capa: de encontrar sentido. Puede, en este momento, reacciot.ar con un comportamiento agitado (lloros súbitos por la noche sin que aparentemente le pase nada...) v *la mínima ruptura en su estabilidad le provocará ansiedad. Al año, la agresividad esfreruente. Cuando sepa hablar podrá dar rienda suelta* ***a sus sentimientos...***[331]

405. En el periodo ele los dos a tres años edad,

"a separación di' los padres puede perturbar el desarrollo psicomotor del pequeño disminuyendo su capacidad di' afrontar nuevas etapas, Se constatan frecuentes rabietas, y regresiones ***en su comportamiento.***
{,.,/
El pequeño puede tener perturbaciones del sueño (pesadillas o insomnio). de la alimentacitin. de su capacidad de manifestar su alegría o síntomas psicosomáticos: dolor de cabe:a, de estomago, vomito.
A *pesar de que el niño no esté separado de su madre, se pueden observar características que se aproximan al sindrome de separación precoz del objeto de amor. El niño reaccionará a une modificacion de la calidad de! cuidado que le profesa su madre, Esta situarián provoca en e! niño un sentimiento de abandono y de amenaza. Además, como cuanto más pequeño, nllís egocéntrico es el niño, se sentirá culpable de los problemas de los* ***pal****i****res.*[332]

406. Las niñas no solamente sufrieron de la ausencia de! Sr. Tibi en etapas clave de sus vidas, sino también vieron sufrir a su madre y tuvieron que incluso separarse de ella en reiteradas ocasiones cuando viajaba a Guayaquil, Evidentemente, los cuidados y atenciones que recibieron en esa época no son los mismos que hubiesen recibido si el Sr. Tibi hubiese estado con ellas, A esto hay que sumar que para los hijos de mayor edad, en especial Valerian y Sarah, la situación de saber que su padre está en prisión les causa un perjuicio moral y una angustia en su entorno social, escolar y familiar.

407. Es decir, la detención arbitraria y prolongada y las secuelas de la tortura afectaron el desarrollo normal de la vida de las niñas y e! niño y produjeron serios trastornos a la Sra. Beatriz Baruet, quien además era la persona que se hacía cargo de los trámites para la defensa de! Sr. Tibi, quien se contactaba con los abogados y con los miembros de la embajada de Francia, es decir, quien vivió personalmente las injusticias que se cometían en contra de su compañero, Además la vida familiar nunca pudo ser la misma, el Sr, Tibi y la Sra, Baruet se separaron y sus hijas e hijo manifestaron problemas escolares y afectivos,

408. Por lo anterior solicitamos a la H. Corte que indemnice el daño moral sufrido por la Sra, Beatrice Baruet, sus hijas Sarah Vachon y Jeanne Camila Vachon, la hija de

---

331 Ibid.
332 Ibid.

ambos. Lisianne Tibi, y e! hijo del Sr. Tibi, Valerian Tibi con la suma de $100.000,00 dólares para cada uno.

iii. Frustración del Proyecto de vida del Sr. Tibi.

409. Los representantes de la víctima y sus familiares consideramos que las violaciones a los deree hos humanos cometidas por e! Estado ecuatoriano en contra del señor Tibi lo privaron de la posibilidad de desarrollar su "proyecto de vida" impidiéndole alcanzar las metas personales, profesionales y familiares que se había planteado junto a su familia. Por tanto el Estado debe reparar los daños ocasionados.

410. La Corte, así corno la doctrina, han desarrollado recientemente el concepto de "proyecto de vida".[333] La máxima instancia de! Sistema Interamericano ha definido que el concepto atañe a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias potenciales y aspiraciones que le permitan fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas.'>'

411. El ser humano, para realizarse en el tiempo. en tanto ser libre, debe proyectar su vida. Ésta resulta así de un continuo quehacer de opciones condicionadas por la temporalidad yen especial por el futuro, es decir por la proyección de éste. Todos los seres humanos, en cuanto libres generamos proyectos de vida, nos proponemos realizarlos, vivir de determinada manera, haciendo aquello que se nos plazca de acuerdo a nuestra opción personal. Esta decisión intima esta ligada a la libertad de elegir lo que le va a dar sentido a nuestra vocación personal. La doctrina lo ha entendido de esta forma al considerar que *"difícilmente se diría que una persona es verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación".*[335]

412. El Sr. Tibi tenía planes muy concretos tanto profesionales como personales para su futuro; sin embargo, estos planes tuvieron que ser descartados involuntariamente cuando su vida se desvió de su propósito en el momento en que fue privado de su libertad arbitrariamente durante más de dos años, Antes de este momento, tenía planes para continuar con sus actividades como comerciante de piedras preciosas y arte ecuatoriano; tenía planes de comprar un terreno y desarrollar sus actividades en un país distinto al de su nacimiento. Sus hijas se estaban adaptando a un nuevo ambiente con grandes esperanzas para su futuro. Sin embargo, los hechos tantas veces referidos en

---

[33] Corte IDH, Caso *Loayza Tamayo*, Sentencia de 27 de Noviembre de 1t)t)8, Serie C. No. 42, párrafos 144- 154: En igual forma ver: FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, "Daño al Proyecto de Vida", en *Derecho-Puc*, Revista de la Facultad de Derecho Universidad Católica de! Perú, Núrn 50, diciembre de 1996, pags 47-97.

[334] Corte IDH, Caso *Loayza Tamayo,* Sentencia de 27 de Noviembre de 1998, párr. 147; En este sentido ver GARCÍA RAMÍREZ Sergio, "Las Reparaciones en el SIstema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos" en *EI Sistema Interamericano de Protecaán de IOJ Derechos Humanos en el Umbra! de! Siglo XXI,* Corte Inreramcricana de Derechos Humanos, San josé, Costa Rica, Tomo l., p. 147.

[335]Ibíd., pág. 151.

este escrito, cambiaron drásticamente el curso de la vida del Sr. Tibi y su familia, imponiendo una serie de circunstancias nuevas y adversas que modificaron sus planes y proyectos, así como minimizaron las facultades y aptitudes para desarrollarlos con éxito.

413. En este sentido nos parece pertinente resaltar, los argumentos de la propia Corte al otorgarle al concepto de "proyecto de vida", autonomía propia en las reparaciones:

> *"Se {rata de una noción distinta del "daño emergente" y "el lucro cesante". Ciertamente no corresponde a la afectacion patrimonial derivada inmediata y directamente de los hechos, COIIJO sucede en el "daño emergente". Por lo que hace al "lucro cesante". corresponde señalar que mientras éste se refiere en [orma exclusiva a la perdida de ingresos económicos futuros, qlle es posible cuantijicar a partir de ciertos indicadores mensurables y objeuvos, el denominado "proyecto de "ida" atiende a la realización de la persona afecta da".*[335]

414. Igualmente el Juez Carlos Vicente de Roux, en su voto parcialmente disidente a la sentencia del Caso *Loayza Tonmyo.* consideró:

> *"esas alteraciones no hace relación el1 cuantotorma especifica del daño al sufrimiento a la aflicción subjetiva de la victima. que son indemnizados como perjuicios morales. mediante el reconocimiento del pretium doloris....Estamos en rigor, 111 el campo de 1111 daño inmaterial, pero distinto del perjuicio moral".*[337]

415. Los representantes de las víctimas, compartimos este criterio y consideramos que al afectar el proyecte de vida, no solo se afecta la capacidad futura de producción económica de la víctima, ni su dolor moral temporal, sino que se afecta a la persona en su esencia vital y por ello, se debe concretar autónomamente ese daño en términos económicos. Pues como la Honorable Corte ha dicho:

> *"El 'tlaño al proyecto dr vida', entendido como una expectativa razonable y accesible en el caso concreto, implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal. en forma irrrparable o muy dificilmente reparable. Así, la existencia de una persona sr 1',' alterada por factores ajenos a ella. que le son impuestos en forma injusta y arbitraria. con violación de las normas vigentes y de la confianza que pudo depositar en órganos del poder público obligados a protegerla y a brindarle seguridad para el ejercicio de sus derechos y la satisfacción de sus legiumos intereses."*[338]

416. Entendemos que no basta con garantizar justicia y sanción a los responsables de un dano producido mediante la violación a los derechos humanos, pensamos que ello sería reducir la consideración fundamental del término y su significación, y precisamente por ser este un concepto autónomo. trasciende del daño moral, material,

---

[336] Ibíd.. pág 147.

[337] Voto parcialmente disidente cel Juez Carlos Vicente de Roux Rengifo. párr, 4. Corte IDH, Caso *Loayza Tamayo,* Sentencia de 27 de noviembre de 1998.

[338] Corte IDH, Caso *Loayza Tam"vo,* Sentencia de 27 de noviembre de 1998, p.irr 150

y de la sanción de sus responsables, para consolidarse en la frustración total de la vida de la víctima, situación que debe ser valorada.P?

417. Queremos resaltar en el caso concreto del Sr. Tibi, que las violaciones de las que fue objeto ocasionaron una grave alteración del curso que normalmente habría seguido su vida. Los trastornos que esos hechos le impusieron, impidieron la realización de su vocación, sus aspiraciones y sus potencialidades. Todo esto ha representado un serio menoscabo para su "proyecto de vida". Hay que recalcar nuevamente que las torturas que sufrió el Sr. Tibi fueron de tal gravedad que su original proyecto de vida nunca podrá ser reiniciado. El Sr. Tibi no podrá nunca más desarrollar actividades físicas normales. lo cual representa una gran frustración en su vida y merece que el Estado lo repare económicamente con una cantidad lo suficientemente alta para como para mostrar la seriedad del hecho.

418. Atendiendo a los argumentos antes citados, solicitamos a la H. Corte que en equidad ordene al Estado ecuatoriano reparar el daño producido al "proyecto de vida" del Sr. Tibi.

E. Otras Formas de Reparación

i. Medidas que hagan cesar las violaciones

419. La Corte ha reconocido anteriormente que las medidas de satisfacción tienen el objeto de reparar integralmente a las víctimas *"mediante la realizacion de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las victimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir* ",3411

420. Asimismo, este tipo de medidas tienden a garantizar que hechos como los narrados en el presente caso no vuelvan a perpetrarse; por lo que son conocidas como "garantías de no repetición". Para el presente caso, las medidas solicitadas son:

1. Investigación y sanción de los responsables.

421. El esclarecimiento total de los hechos y la garantía que se pueda ofrecer a la víctima y sus familiares, con respecto al adecuado castigo que deben recibir los autores de las violaciones, es un compromiso que el Estado debe asumir con seriedad y prontitud.

---

339 Caso *Cantoral Benaiides,* Sentencia de 3 de diciembre de 2001, párrafo. 60.

340 Caso *1'illagrán Morales y Otros,* Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 84..

422. Corresponde al Estado el ejercicio de la acción penal. De no hacerlo, se estaría incumpliendo con la obligación tutelar de los derechos humanos, impidiéndose así la erradicación de la impunidad en un Estado de Derecho.

423. Así lo entendió la Honorable Corte cuando ordenó en otros casos similares:

> *„1 Estado debe ordenar una investigación para determinar las personas responsables de las vialaciones de los derechos humanos a que se ha hecho referencia* ell *esta Sentencia, así como divulgar públiramenu los resultados de dicha investigación, y sancionar a los responsables".*[341]

424. Por lo tanto, el Estado en el presente caso deberá completar de manera seria, expedita, imparcial y efectiva la investigación de las circunstancias que produjeron las violaciones que se le imputan y que trajeron como consecuencia los graves hechos probados, El Gobierno ecuatoriano tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias que sirvan pan determinar la responsabilidad individual por las violaciones de los derechos humanos y sancionar como en derecho corresponda a los autores de tales hechos.

425. Hasta la fecha nunca se ha iniciado una investigación seria y conforme a las pruebas obtenidas en derecho, que conlleve a determinar quién o quiénes detuvieron ilegal y arbitrariamente al Sr, Tibi y quién o quiénes 10 torturaron.

426. Por lo tanto, solicitamos a la H. Corte que, de acuerdo a su jurisprudencia.>" ordene que el Estado ecuatoriano investigue y aplique las sanciones pertinentes a los sujetos activos que cometieron las violaciones a los derechos humanos del Sr. Tibi y a todos aquellos que en forma dolosa u omisiva han permitido que prevalezca la total impunidad.

2. Desagravio y reconocimiento público

427. A través de su jurisprudencia, la H. Corte ha reconocido que la sentencia *per se* constituye una forma de reparación. Sin perjuicio de esto, este Tribunal también ha considerado, como medida de satisfacción, la publicación de la sentencia sobre el fondo corno un medio para lograr la no repetición de las violaciones cometidas.[343]

428. Junto con el juzgamiento y la sanción de los responsables de los hechos acaecidos. consideramos igualmente importante **la** reivindicación de **la** imagen del Sr.

---

[341] Corte IDH, Caso *Bámaca Velásquez*, Sentencia de 25 de noviembre de 2000, Punto Resolutivo 8,
[342] Corte IOH, Caso *Velásquez Rodríguez*, Indemnización Compensatoria de 2 de julio de 1989, párr 34-35; Corte IDH, Caso *Godinez Cruz*, Indeminizacrón Compensatoria de 21 de julio de 1989, párrafos 32-33; Corte IDH, Caso *Caballero Delgado y Santana*, Sentencia de 18 de diciembre de 1995, parr 69; Corte (OH, Caso *El Ampam*, Sentencia de 14 de septiembre de 1995, párrafos 53-55; Corte IDH, Caso *Neira Alegria y Citra«*, Sentencia de 19 de septiembre de 1996, parr 69.
[343] Corte JDH, Caso *Cantora! Bena.ides*, Sentencia del 3 de diciembre de 2001, p.irr. 79.

Tibi, asi como el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado. Los representantes de la victima consideramos que la Corte debe ordenar al Estado que realice un desagravio público en reconocimiento de su responsabilidad en este caso y a fin de evitar que hechos como estos se repitan.

429. Para ello, los representantes de la víctima *y* de sus familiares solicitamos a la Corte que ordene al Estado ecuatoriano que publique en los tres diarios de mayor circulación del Ecuador y financie otra publicación en los tres diarios de mayor circulación en Francia que contenga la parte de hechos, derecho y los puntos resolutivos de la sentencia de la Corte, una disculpa a la víctima y a sus familiares y el compromiso del Estado de que hechos como los acontecidos nunca se volverán a repetir. Los representantes de la víctima, además, consideramos que la Honorable Corte, de acuerdo a la jurisprudencia reciente, debe también ordenar la publicación de la sentencia del caso en el Diario Oficial del Ecuador.>"

430. La razón que sustenta la solicitud de la publicación en los diarios de Ecuador y de Francia radica en que la honra del Sr. Tibi se afectó en ambos países. Además, el Sr. Tibi está radicado en Francia por lo que el desagravio público surte también efecto allá. Del mismo modo, las autoridades francesas en el Ecuador estuvieron involucradas en la defensa de los intereses del Sr. Tibi y por ello, fueron incluso enjuiciadas por los jueces a los cuales tacharon, con razón y pleno sustento, de corruptos.

431. Asimismo. los representantes de la víctima solicitamos la edición de un video de 30 minutos en el que se narren los hechos del caso, se haga un reconocimiento público de la participación de agentes del Estado en los hechos violentos hacia el Sr. Tibi y la falta de investigación por las violaciones cometidas. Este tipo de medidas son especialmente importantes cuando existen patrones sistemáticos de violaciones a los derechos, círculos viciosos de arbitrariedad e impunidad, que son muy difíciles de quebrar.

3. Tratamiento psicológico y médico para el Sr. Tibi y su familia

432. Es necesario, como lo ha establecido la COl-te en casos anteriores, tomar en cuanta el tiempo que la víctima permaneció encarcelada y los sufrimientos que padeció, derivados de las torturas y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes a que fue sometida y las restricciones que sufrió en el régimen carcelario, porque estos hechos tienen consecuencias respecto de las cuales **la** víctima no puede ser resarcida integrarnente.:[345]

---

[344] Corte IDI J, Caso *l.a: Paimeras,* Sentencia de 26 de noviembre de 2002, párr. 75; Corte IDH, Caso *Bámaca*] *elásquez* Sentencia de 22 de febrero de 2002, párr. 106; Corte JDH., Caso *Trujillo Oroza,* Sentencia de 27 de febrero de 2002, párr. 119.

[345] Corte IDE, Caso *Loayza Tamayo,* Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr, 58

433. Resulta necesario buscar formas sustitutivas de reparación.':" los representantes de la víctima consideramos que estas formas sustitutivas deben ir más allá de la propia indemnización pecuniaria. Los daños ocasionados a la víctima y el sufrimiento provocado a su familia han dejado secuelas que deben ser atendidas por expertos psicólogos y médicos a través de terapias individuales.

434. Este tipo de terapias deben prolongarse por el tiempo que sea necesario para la total recuperación de la víctima y, de ser necesario, deben ser de por vida.

4. Otras garantías de no repetición de los hechos

435. La práctica jurisprudencia desarrollada por la Honorable Corte en los casos contenciosos, ha ordenado modificaciones legislativas con el efecto de que los Estados Parte de la Convención adecuen su legislación interna a los estándares internacionales en la materia'!'. La Corte ha determinado que el deber general del Estado contenido en el artículo 2 de la Convención, incluye la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de dichas garantías.[3-IS] Para que hechos como los narrados en el presente caso no vuelvan a repetirse es necesario que el Ecuador adopte las siguientes medidas:

a. Adecuación de la legislación penal a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

436. Como lo detallamos en el acápite referente a las violaciones al derecho a la integridad personal, el Estado ecuatoriano aún no ha adecuado su normativa nacional a los estándares internacionales sobre tortura.

437. El tipo penal de tortura Ita cumple con los estándares internacionales establecidos por el Sistema Interamericano. Es más, como lo hemos demostrado, no existe un tipo penal específico de tortura, ni de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

438. En consecuencia, solicitamos a la H. Corte que requiera al Ecuador que adapte su normativa interna a los estándares internacionales y sancione la tortura como un delito específico que merece una sanción ejemplar y que no acepta ningún tipo de disculpa o excusa como por ejemplo el cumplimiento de una orden superior.

---

[346] Corte IOH, Caso *Loayza Tamayo*, Sentencia de 27 de noviembre de 1998, Serie C No...42, p.irr. 124.
[347] Corte IOH, Caso *Trujillo Oroza*, Sentencia de 27 de febrero de 2002, párrafo 98
[348] Corte IOH, Caso *la Ultima Tenraao» de Cristo.* Sentencia de 5 de febrero de 2002, párrafos 85 y 87.

b. Promulgar legislación tendiente a reparar a víctimas de tortura

439. La Convención Interarnericana para Prevenir y Sancionar la Tortura señala en su Arr, 9:

> *Los Estados partes se comprometen a incorporar en sus legislacioncs nacionales normas qui: gamntuen una compensación adecuada para la victima del delito de tortura.*

440. El Estado ecuatoriano debe consolidar en su legislación interna el cumplimiento de esta obligación con la finalidad de asegurar una justa reparación a las víctimas de tortura. En especial. debe ofrecerse un tratamiento especializado a las víctimas de tortura y una justa indemnización económica.

c. Modificación de la legislación procesal con el objeto de que únicamente sean válidas las diligencias y testimonios rendidos ante los jueces

441. En el presente caso ha quedado comprobado que el Sr. Tibi nunca compareció ante el juez que llevó su causa y que su declaración preprocesal la vertió ante un fiscal y varios agentes de policía. sin la presencia de un abogado defensor.

442. Por ello y tal como Jo recomendó el Relator Especial contra la Torrura>'? y la Comisión lnteramericana sobre Derechos Humanos.v" solicitamos a la H. Corte lnterarnericana (lue ordene al Estado que realice las reformas legislativas necesarias para que únicamente las confesiones y declaraciones rendidas ante el juez con las debidas garantías del debido pr'xeso legal. tengan valor probatorio. y no las recabadas por la policía judicial o el ministerio público en ausencia de un defensor y sin la presencia de un Juez.

d. Implementación del derecho a la notificación consular

443. Los representantes de la víctima hemos demostrado que el Ecuador faltó a su deber de notificar al Sr, Tibi de su derecho a comunicarse con las autoridades francesas. De igual forma. el Estado no notificó a las autoridades francesas de la detención del Sr. Tibi. De tal suerte. el Sr. Tibi no pudo contar con el asesoramiento del Consulado de su

---

[349] Relator Especial soore Tortura de l.rs Naciones Unidas. E/CN.4/1998/38/Add.2 La Recomendación d. señala: *"No debe considerarse que las declaraciones hechas por los detenidos tengan un vnlor probatorio a menos ql/e se hagan antes 1111 juez:"*

[350] CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, 24 de septiembre de 1998. El p.irr. 723 seúal.r: *"Que adopte las medidas legislativas o de aira tuuuraleza, afin de que la declaración del inculpado prestada ante el juez competente de la causa sea la única confesián válida para el proceso, «Iiminudo rxpresamentc el valor incrirninatorio de la confesion prestada ante la Policia Judicial"*

país natal, como tampoco el Consulado pudo intervenir oportunamente en la defensa del Sr. Tibi.

444. En consecuencia. solicitamos a la H. Corte que requiera al Ecuador que adopte las medidas que sean necesarias para que se informe a todo detenido extranjero de su derecho a comunicarse con las autoridades consulares de su país natal; y que a su vez las autoridades estatales notifiquen al Consulado del país de origen del detenido de la detención del mismo.

e. Campaña de instrucción y capacitación a funcionarios judiciales, policiales, penitenciarios, médicos y psicólogos

445. El artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura señala la obligación de los Estados respecto del adiestramiento de agentes de la policía y otros funcionarios públicos con la finalidad de prevenir actos de tortura.

446. En este sentido: la actuación de médicos y psicólogos constituye un elemento clave en la pronta detección y documentación de posibles casos de tortura, pudiendo dar fe de las lesiones e iniciar la debida investigación de los hechos. Sin embargo en Ecuador han faltado procedimientos adecuados para asegurar que se realice la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.

447. Por lo anterior, solicitamos a la H. Corte que ordene al Estado (lue capacite a sus funcionarios públicos. en especial a los policías, guías penitenciarios, médicos y psicólogos de los Centros de Rehabilitación Social y de atención al público, sobre cómo prevenir la tortura y sobre cómo documentar las denuncias de tortura. Para ello sería prudente que se sigan los procedimientos y disposiciones de manuales internacionales especializados como el Protocolo de Estambul.v! para que de esta forma se logre una efectiva prevención, investigación y sanción de la tortura,

f. Adecuación de las condiciones carcelarias a los estándares internacionales

448. Como ha sido analizado a lo largo de esta demanda, las cárceles ecuatorianas representan un riego a la integridad física y a la vida de las personas privadas de su libertad. El Sr. Tibi sufrió de hacinamiento y tuvo que dormir en el suelo de un pabellón simplemente porque se negó a pagar a un guía penitenciario. Tampoco recibió atención médica, dental o psicológica mientras estuvo retenido yeso agravó aún más las lesiones que le produjeron las torturas de que fue víctima.

---

[351] Protoc:.lo de Estambul, Oficina del Alro Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Serie de Capacitación Profesional No. 8, Nueva York y Ginebra, 2001.

449. Para que hechos como los detallados no vuelvan a repetirse en el Ecuador es necesario que el Estado desarrolle políticas y estrategias destinadas a descongestionar la población de los centros de detención; establezca programas de rehabilitación y reinserción de acuerdo a las normas nacionales e internacionales; prevenga la violencia en dichos establecimientos; controle y sancione la corrupción en las cárceles; así como desarrolle políticas, estrategias y entrenamiento especial para el personal penitenciario y policial para el manejo adecuado de los reclusos. Para ello es necesario que dote de mejores recursos a la Dirección Nacional de Rehabilitación Social que, como vimos, cuenta únicamente con un porcentaje mínimo que lo obtiene de las multas a los giros de cheques y que ponga especial énfasis a la atención médica y psicológica de los internos.

g. Otras medidas de no repetición

450. Los representantes de la víctima nos sumarnos a la petición de la Comisión, en el sentido de ordenar al Estado:

> *"a. Adoptar las medidas necesarias para dar efecto al recurso de amparo de libertad, para que sus disposiciones. de acuerdo con la legislación ecuatoriana. puedan ser implementadas tanto desde el punto de vista procesal como sustantivo;*
>
> *b. Adoptar las medidas necesarias para que el sistema judicial penal cumpla efectivamente con la legislación ecuatoriana;*
>
> *c. Crear un mecanismo interno conforme al cual los peticionarios puedan presentar sus denuncias en relación con las faltas del sistema de la justicia penal en cuanto a su funcionamiento oportuno y efectivo y conforme al cual puedan obtener reparaciones."*[352]

F. Gastos y Costas

451. La Corte ha estimado que las costas forman parte de las reparaciones a que se refiere el artículo 63.1 de la Convención, *"puesto que derivan naturalmente de la actividad desplegada por la víctima. sus derechohabientes o sus representantes para obtener la resolución jurisdiccional en la que se reconozca la violación cometida y se fijen sus consecuencias jurídicas".*[353] Asimismo, ha establecido que dichas costas *"comprenden los diversos gastos que la víctima hace o se compromete a hacer para acceder al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, entre los que figuran los honorarios que ha de cubrir, convencionalmente. a quienes le brindan asistencia jurídica".*[354]

---

[352] Demanda de la Comisión, pago 47.

[353] *Cfr.* Corte IDH, Caso *Caballero Delgado y Santan«;* Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 31, p.irr. 79; *Garrido y Baigorria,* Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie e No. 39, párr. 79; Caso *Loayza Tamayo,* Senrenria de 27 de noviembre de 1998, Serie C No. 42, párr. 176.

[354] *Cfr.* Corte IDH, Caso *Caballero Delgado y Samana,* Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 31, p.irr. 80; *Garrido y Baigol7i'l,* Sentencia de 27 de agosto de 19')8. Serie e No. 39, párr. 80; Caso *Loayza Tamayo,* Sentencia de 27 de noviembre de 1998, Serie C No. 42, párr. 177.

452. Los gastos en que se han incurrido tanto en el ámbito interno como en la esfera internacional se han realizado principalmente por el propio Sr. Tibi y por diferentes organizaciones no gubernamentales, por lo que se aportarán por separado cada una de las cifras.

453. Antes de enumerar cada uno de los gastos y las costas que por servicios profesionales se han cobrado en este caso, los representantes de la víctima y sus familiares queremos solicitar a la Corte que en la etapa procesal correspondiente, se nos otorgue la oportunidad de presentar un documento con cifras actualizadas sobre los gastos incurridos durante el proceso contencioso internacional, puesto que en este momento únicamente se especularía sobre una cantidad incierta, ya que se desconocen los gastos en los que se pueda incurrir tanto en Francia, Ecuador y Costa Rica, lugares donde tienen sede las organizaciones que estamos actuando en representación de la víctima y la víctima misma.

i. Gastos y costas realizados por el Sr. Tibi y su familia.

454. El Sr. Tibi y su familia durante el proceso penal solventaron diversos gastos Jurídicos. El Sr. Tibi tuvo que contratar varios abogados en el Ecuador para que lo defiendan de las acusaciones infundadas que pesaban en su contra. Igualmente tuvo que contratar un abogado, el Sr. Arthur Vercken, en Francia para que lleve su causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dichos gastos se realizaron hasta agotar los recursos económicos con los que contaban en aquel entonces. Incluso, tal y como lo señala la Comisión, el 9 de noviembre de 2001 *"el Sr. Tibi informó a la Comisión que el Sr. Yercken ya no era su representante y se representaría a* sí *mismo en la audiencia del* 14 *de noviembre de 2001"*,[355] puesto que carecía de los recursos económicos suficientes para seguir pagando al letrado.

455. En el procedimiento interno, la víctima refiere que gastó $30.000,00 dólares, monto que incluye los honorarios profesionales de sus abogados defensores, fotocopias, gastos de traslado de los abogados a la ciudad de Guayaquil (movilización, alimentación, estadía), y demás costas procesales. Los representantes de la víctima contamos con un recibo que corresponde a los costos que el Ab. Nelson Martinez cobró a la Sra. Beatrice Baruet, esposa del Sr. Tibi, el 13 de noviembre de 1995. Solamente hasta esa fecha se abonaron cinco millones quinientos mil sucres (S/.5'500.000,OO), que corresponden a aproximadamente $1.544,00 dólares.[356] Haciendo una proyección de este valor por los 28 meses en (lue estuvo detenido el Sr. Tibi, se justifica el monto de $30.000,00 dólares. Solicitamos a la Corte que fije en equidad el monto de las costas en que incurrieron el Sr. Tibi y su familia en el ámbito interno, teniendo en cuenta las proyecciones presentadas.

---

[355] Demanda de la Cornis.ón, pág. 5.

[356] Ver carta del Ab. Nelson Martinez dirigida a la Sra. Bearrice Vachon, de fecha 13 de noviembre ele 1995. Anexo 24, Ver también la tasa de cambio vigente a la época de los hechos en http:/,/ww\v.cideiber.con'/lnfopaisE·s/Ecuc¡d{)r/Ecuador-Ox-Olhrml).

456. En el proceso internacional. el Ab. Arthur Verken cobró al Sr. Tibi FF 155.480,00 francos franceses. aproximadamente $21.000,00 dólares.[357] En consecuencia, los representantes de la víctima solicitamos que se ordene al Estado la restitución total de la mencionada cantidad.

457. Igualmente el Sr. Tibi tendrá que incurrir en gastos y costas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Sr. Tibi deberá trasladarse desde Francia a la sede de la Corte en San José, Costa Rica, a fin de comparecer a las audiencias sobre su caso. Igualmente deberá enviar correspondencia, faxes, curiers, tanto a la Corte como a sus representantes. E, valor estimado de estos gastos es de $ 3.000,00 dólares. En atención a la proyección anterior nos reservamos la oportunidad de presentar los documentos que acrediten el monto de gastos que se incurran en el futuro.

ii. Gastos incurridos en el ámbito internacional por la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Clínica DDHH-PUCE) y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

458. La Clínica DDHH-PllCE y CEJIL han incurrido en diversos gastos desde que asumieron la representación del presente caso en el mes de diciembre de 2001. Así, varios abogados han estado involucrados en la investigación, redacción y presentación del caso. Durante este período se ha incurrido en gastos por papelería, fotocopias, llamadas telefónicas y envío de faxes a Francia. Ecuador y Costa Rica, así como envíos de courrier:

Los gastos aproximados y la proyección de gastos son:

1. *Clinica DDHH-PUCE*

Audiencia ante la Corte IDH

Pasajes para dos personas desde Quito a San José por dos ocasiones	$1.800
Viáticos para 2 personas x 5 días en cada viaje (120 x día x persona)	$ 2.400
Subtotal	$ 4.200
Teléfono y fax	$ 1.200
Envio de courrier	$ 800
Suministros (copias, papelería, etc)	$ 750

[357] Ver Nota de Honor.irios del Ab. Arthur Vercken, de fecha 12 de noviembre de 2001. Anexo 25. Para noviembre de 2001 el franco francés estaba cotizado en 7.3019 francos por cada dólar. Anexo 21.

Subtotal	$ 2.750
Honorarios profesionales por dos abogados (200 horas de trabajo x 15 dólares la hora)	$ 3.000
TOTAL:	$ 9.950

ii. *CE11L*

Pasajes para dos personas desde \\!ashington a San José por dos ocasiones	$ 3.000
Viáticos para 2 personas x 5 días en cada viaje (120 x día x persona)	$ 2.400
Subtotal	$ 5.400
Teléfono y fax	$ 1.400
Envío de courrier	$ 900
Suministros (copias, papelería, etc)	$ 800
Subtotal	$ 3.100
Honorarios profesionales por dos abogados (400 horas de trabajo x 15 dólares la hora)	$ 6.000
TOTAL:	$ 14.500

459. En atención a la proyección anterior de los gastos ocasionados por los representantes de las víctimas y en atención a la imposibilidad de acreditar la totalidad de los gastos en los que se incurrió, solicitamos a la Honorable Corte que sobre la base de estas sumas, reconozca en equidad los gastos que por costas en el litigio han ocasionado y se ocasionarán ante los órganos de protección del sistema interamericano y en este sentido nos reservamos la oportunidad de presentar los documentos que acrediten el monto de gastos que incurramos en el futuro.

Instrumentos Probatorios

A. Prueba Documental Anexos

460. Los representantes de las víctimas hacemos nuestros los anexos presentados por la Ilustre Comisión Interamericana en su Demanda, igualmente ampliamos la prueba documental mediante las siguientes:

Anexo 1: Parte informativo elevado al Jefe Provincial de INTERPOL del Guayas por el Subteniente de Policía, Carlos Blanco, de fecha 26 de septiembre de 1995.

Anexo 2: Parte informativo de fecha 27 de septiembre de 1995.

Anexo 3: Providencia de fecha 28 de septiembre de 1995 que ordena la detención del Sr. Tibi.

Anexo 4: Boleta de detención en contra del Sr. Tibi de fecha 28 de septiembre de 1995.

Anexo 5: Partes pertinentes del trámite de consecución de visa, y visa de inmigrante de validez indefinida del Sr. Tibi.

Anexo 6: Declaración procesal de Eduardo Edison Garcia de fecha 8 de diciembre de 1995.

Anexo 7: Declaración procesal de Eeluardo Edison Garcia ele 6 ele marzo ele 1996.

Anexo 8: Oficio ele 14 de octubre ele 1996 firmado por el Secretario de la Comisión Nacional de Quejas de la Corte Suprema de Justicia.

Anexo 9: Oficio No. 3291-JPA-G-99, del 21 de julio de 1999, suscrito por el Mayor de Policía, José Alonso Suárez Guevara, Jefe Provincial Antinarcóticos del Guayas, dirigido al Sr. Presidente de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos.

Anexo 10: Providencia del Juez Décimo Octavo de 10 Penal del Guayas de 23 de septiembre de 1998.

Anexo 11: Oficio No. 389 DNRS-SG, de 8 de agosto de 2000, dirigido al Dr. Alberto Rarnirez M, Director Nacional de Rehabilitación Social.

Anexo 12: Oficio GOS-CRSVG-DMO, de fecha 13 de noviembre de 1996, suscrito por el Dr. Jorge Vivas Tobar, Médico 3 del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, dirigido al Dr. Juan Defas Mora, Presidente de Diagnóstico y Evaluación de! mismo Centro.

Anexo 13: Informe de la Comisión Nacional de Quejas y Reclamos de la Corte Suprema de Jusricia, de 10 de marzo de 1997, dirigido al Dr. Carlos Solórzano Constanrine, Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador.

Anexo 14: Informe de Ms, Corrine Brown, Congresswoman of the third Congressional District of Florida, *Plighl of Eatadorian prisoners* (House of Represenratives), mayo 14 de 1997, y su traducción.

Anexo 15: ANDRADE, Betty, *Situación Legal de IOJ Presos en la Penitenciaría de! Litoral*, Comité de Familiares de los Presos.

Anexo 16: Estadísticas del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, elaboradas por e! Comité de Internos del mismo Centro.

Anexo 17: Carta de Oscar Darío Lujiu y Wilson Morales, Coordinadores de la Comisión de Denuncias y Reclamos de Derechos Humanos del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, dirigida a la Hna. Elsi Monge de la Comisión de Derechos Humanos, de fecha 28 de octubre de 1996.

Anexo 18.1: Carta de los Reclusos de Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil "Penitenciaría del Litoral". dirigida al Dr. Fabián Alarcón, ex Presidente de la República del Ecuador, César Verduga, ex Ministro de Gobierno, Roberto Gómez, ex Gobernador del Guayas, José Ayala Laso, ex Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de fecha 25 de febrero de 1997.

Anexo 18.2: Carta de de Osear Daría Luján y Wilson Morales, Coordinadores de la Comisión de Denuncias y Reclamos de Derechos Humanos del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, dirigida al Dr. Víctor Rodríguez Rescia, ex Secretario Adjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 10 de noviembre de 1996.

Anexo 18.3: Carta del Comité de Internos Colombianos del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil dirigida al Dr. Ernesto Samper Pizarro, ex Presidente de la República de Colombia. de fecha 4 de abril de 1997.

Anexo 19: Constancias del ingreso del Sr. Tibi al Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil. (los representante de la víctima y sus familiares no tenemos copias más legibles de estos documentos)

Anexo 20: Poder de Daniel Tibi, Lisianue Tibi, Valerían Tibi, Jeanne Camila Vachon y Sarah Vachon a nombre ele Viviana Krsticevic, Juan Carlos Gutiérrez, Oswaldo Ruiz Chiriboga y María Clara Gladis, abogados de CEJIL y Farith Simon Campaña de la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de fecha 2 de septiembre de 2003, y su traducción. Poder de Beatrice Baruet a nombre de Viviana Krsticevic, Juan Carlos Gutiérrez, Oswaldo Ruiz Chiriboga y Maria Clara Gladis, abogados de CEJIL y Farith Simon Campaña de la Clínica de Derechos 1Iumanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de fecha 3 de octubre de 2003.

Anexo 21: Promedio de la cotización del franco francés desde el año de 1998 hasta el 21JO1 htrp.z /www.bcentral.cl¡esp/infoeconornica/seriesindicadores/pdf/Monedas_extranjeras.pdf

Anexo 22: Proyección de gastos de las reconstrucciones dentales, elaborado por el Dr. Gérad Ohayon.

Anexo 23: Recuento de los sufrimientos de la familia del Sr. Tibi.

Anexo 24: Carta del Abogado, Nelson Martínez dirigida a la Sra. Beatrice Vachon, de fecha 13 de noviembre de 1995.

Anexo 25: Nota de Honorarios del Abogado Arthur Vercken, de fecha 12 de noviembre de 200 l.

Anexo 26: Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, CCPR/C/S4/Add.S, *Información adicional presentada por el Estado Parte: Ecnador*, 17 de diciembre de 1998.

Anexo 27: Informe de Amnistía Internacional: Ecuador, 2003, http://w\vw.derechos.net/cedhu/amnistia_06_17.htm

Anexo 28: Fundación Regional de Asesoria en Derechos Humanos, *El ocaso de 1(/ dignidad: la tortura /JI el Ecuador*, http://www.derechos.org/rnredb/doc/ocasc/mdice.html

Anexo 29: Plan Nacional de Derechos Humanos. Aprobado mediante decreto del Sr. Presidente Fabián Alarcón, publicado en el Registro Oficial No. 346 de 24 de junio de 1998.

Anexo 30: Federación Internacional de los Derechos Humanos, Misión Internacional de Observación, *Las cárceles en Ecuador.* junio de 200a, No. 293/3.

Anexo 31: César Duque Chasi, Raúl Naranjo Naranjo, Grirnaneza Narváez Silva, Ramiro Rivadeneira Silva, AAJ, UNESCO, ILDIS, *Dererbos de los Detenidos.* Propuesta de Plan Operativo de Derechos Humanos del Ecuador, http://www.ildis.org.ec/planddhh/planI4te.htm.

Anexo 32: Diligencia médico legal, del 19 de septiembre de 1997, realizada por el Departamento Médico Legal de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Policía Nacional, dirigido al Juez Décimo Octavo de lo Penal del Guayas.

Anexo 33: Certificado médico del *Centre Ho.rpitalil'r Unhersitaire de Dijon*, de fecha 16 de febrero de 1998, realizado por el Dr. Rat.

Anexo 34: Certificado médico del *Centr« HOJpitalier Unirersitaire de Dijon*, de fecha 28 de marzo de 1998.

Anexo 35: Examen médico legal del Dr. Samuel Gerard Benayoun, practicado el 7 de noviembre de 2001.

Anexo 36: Certificado médico del Dr. P. Blanche, de fecha 22 de junio de 2001.

Anexo 37: Fotografías de Daniel David Tibi.

Anexo 38: Comité contra la Tortura, Summary record of the first part of the 164th meeting: Ecuador. CAT/C/SR.164. (Summary Record) Eleventh session 15 de noviembre de 1993.

461. Dadas las circunstancias del presente caso, la prueba documental listada no puede considerarse como taxativa. Su posible ampliación podría resultar necesaria a la luz de la información que surja de las copias de los expedientes judiciales a ser aportados por el Ilustre Estado.

B. Prueba Testimonial y Pericial

462. Solicitamos a la Honorable Corte que cite a declarar a los siguientes tesngos. Nos reservamos a ampliar o renunciar alguno de ellos.

a. Víctimas y Testigos

Daniel David Tibi: El testigo será citado por la Honorable Corte para que declare como victirna de los hechos objeto de la demanda, los daños físicos y psicológicos de los que ha sido víctima y continúa sufriendo y demás circunstancias que han vulnerado sus derechos así como el contexto en el cual se han desarrollado y en general sobre cualquier otro hecho que sea relevante al presente caso.
Domicilio: 4 Rue des Irnbergeres, 92330 Sceaux, Francia

Beatrice Baruet: Ex esposa del Sr. Tibi que puede testificar sobre las condiciones carcelarias del Sr. Tibi, los maltratos y torturas que sufrió, la afectación a su familia, y demás circunstancias que han vulnerado sus derechos así como el contexto en el cual se han desarrollado y en general sobre cualquier otro hecho que sea relevante al presente caso.
Domicilio: 10I Bd. Joffre 21000 Dijon, Francia

Alain Abellard, periodista, autor del artículo presentado a la Ilustre Comisión en "Le Monde" en junio de 1998 "Midnight Express en Ecuador". Este periodista visitó al Sr. Tibi en la cárcel. Par.i que testifique acerca de lo que investigó y vio durante su investigación periodística.
Domicilio: 10 Rue del Rossignols 9231OSevres, Francia

Laurent Rapin, ex embajador de Francia en el Ecuador, para que testifique sobre el proceso penal seguido en contra del Sr. Tibi y las gestiones que la Embajada de Francia y el Gobierno francés realizaron ante las autoridades ecuatorianas.
Los representantes de la víctima no contamos con la dirección exacta del Embajador Rapin. la última noticia que tuvimos sobre su domicilio fue su traslado como Embajador a Chipre. En consecuencia, solicitamos a la H. Corte requiera que el Estado ecuatoriano haga las gestiones necesarias a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores para localizarlo.

La ex Cónsul Durin, para que testifique en su calidad de ex-cónsul de Francia en Ecuador, sobre las gestiones que ella personalmente realizó a favor del Sr. Tibi y su familia. En especial, sobre las visitas que realizó al Sr. Tibi mientras estaba detenido y sobre la atención médica que gracias a ella se le proporcionó al Sr. Tibi por médicos privados.
Los representantes de la víctima no contamos con la dirección exacta de la ex-Cónsul Durin, la última noticia que tuvimos sobre su domicilio fue que permaneció radicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. En consecuencia, solicitamos a la H. Corte requiera cjue el Estado ecuatoriano haga las gestiones necesarias a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores para localizarla.

b. Peritos. Los peticionarios hacemos nuestros los peritos ofrecidos por la Ilustre Comisión en su demanda[358] y adicionalmente proponemos a los siguientes:

---

[358] Dernand.t de la Comisión, pág. 52.

Anna Deutch (perito psicóloga) para declarar sobre los efectos psicológicos de la tortura y las violaciones al debido proceso, así como también la afectación a la familia.

Alberto Wray (perito jurídico) para que testifique sobre la legislación penal y específicamente los procedimientos sustanciados conforme a la Ley de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes.

Ximena Costales (perito) para que testifique acerca de las condiciones carcelarias del pais.

Dr. Michel Robert (perito médico) para que testifique acerca de las condiciones médicas del Sr. Tibi cuando llegó a Francia.

C. Datos de ubicación de los representantes de las víctimas.

[redacted]

PETITORIOS

463. En virtud de los argumentos y elementos probatorios que hemos presentado en este escrito y en los que ofreceremos oportunamente, solicitamos a la Honorable Corte Interamericana que concluya y declare que:

1. El Estado ecuatoriano violó el Art. 5.1 Y 5.2 de la Convención Americana por las sesiones de tortura que agentes del Estado ecuatoriano cometieron en contra del Sr. Tibi, causándole serios daños que hasta la fecha perduran; por las misérrimas condiciones carcelarias que sufrió mientras estuvo recluido; por no haberle brindado atención médica y psicológica; y porque toleró que otros presos lo maltraten.

2. El Estado ecuatoriano violó el Art, 5.4 de la Convención Americana por la falta de separación del Sr. Tibi, en su calidad de procesado, de los condenados, y la falta de un tratamiento adecuado por su calidad de tal.

3. El Estado ecuatoriano violó los artículos Art, 1, 6 y 8 de la Convención Interarnericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, porque no se ha realizado ninguna investigación sobre los hechos y no se ha sancionado a ningún responsable; y del Art, 6 del mismo instrumento porque el Estado no ha asegurado que los actos de tortura constituyan delitos en su derecho interno.

4. El Estado ecuatoriano violó el Art. 7.1 de la Convención Americana porque no se respetó el derecho a la libertad y seguridad personales del Sr. Tibi.

5. El Estado ecuatoriano violó el Art, 7.2 de la Convención Americana porque la detención que sufrió el Sr. Tibi fue ilegaL

6. El Estado ecuatoriano violó el Art, 7.3 de la Convención Americana porque la detención provisional y la prisión preventiva del Sr. Tibi fueron arbitrarias.

7. El Estado ecuatoriano violó el Art. 7.4 y el Art. 8.2.b de la Convención Americana porque el Sr. Tibi no fue informado de las razones de su detención y no fue notificado de los cargos formulados en su contra.

8. El Estado ecuatoriano violó el Art, 7.5 de la Convención Americana porque el Sr. Tibi no fue llevado sin demora ante un juez y no fue puesto en libertad en un plazo razonable.

9. El Estado ecuatoriano violó el Art, 21.1 Y 21.2 de la Convención Americana porque no ha devuelto los bienes confiscados al Sr. Tibi, pese a que existe una orden judicial que así lo dispone.

lO. El Estado ecuatoriano violó el Art, 17.1 de la Convención Americana porque no protegió adecuadamente la familia del Sr. Tibi.

11. El Estado ecuatoriano violó el Art, 8.1 de la Convención Americana porque el Sr. Tibi no fue oído por un juez con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable.

12. El Estado ecuatoriano violó el Art. 8.2 de la Convención Americana porque no respetó la presunción de inocencia del Sr. Tibi al mantenerlo encarcelado por un periodo excesivo de 28 meses.

13. El Estado ecuatoriano violó el Art, 8.2.d y el Art, 8.2.e de la Convención Americana porque no otorgó asistencia letrada al Sr. Tibi al momento de su declaración preprocesal de fecha 28 de septiembre de 1995; Yporque el defensor de oficio que le fue designado posteriormente no cumplió en absoluto con su papel, y en consecuencia el Sr. Tibi permaneció sin una adecuada defensa por un mes, De igual forma, el Estado violentó el derecho a la defensa del Sr. Tibi porque no le notificó de su derecho a comunicarse con las autoridades francesas, ni tampoco notificó a las autoridades francesas de la detención y posterior enjuiciamiento del Sr. Tibi.

14. El Estado ecuatoriano violó el Art. 8.2.g de la Convención Americana porque mediante torturas intentó que el Sr. Tibi se declare culpable de los hechos que se le imputaban.

15. El Estado ecuatoriano violó los artículos 7.6 y 25.1 de la Convención Americana porque el Sr. Tibi no contó con un recurso sencillo y rápido que lo protegiera contra las violaciones a *los* derecho humanos, en especial, porque los recursos de amparo de libertad fueron ineficaces.

16. El Estado ecuatoriano violó el Art. 1.1 de la Convención Americana porque no cumplió su deber de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en el mismo instrumento internacional.

17. El Estado ecuatoriano violó el Art. 2 de la Convención Americana porque no ha adoptado las medidas legislativas o de atto carácter tendientes a hacer efectivos los derechos consagrados en el mismo instrumento internacional, existiendo además. una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso *Suárez Rostro* que también lo obligaba a adecuar su legislación.

18. Finalmente, el Estado es responsable de la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de la familia cercana al Sr. Tibi, es decir, la Beatrice Baruet, las niñas Sarah Vachon,]eanne Carnila Vachon y Lisianne Tibi y el niño Valerian Tibi por el severo sufrimiento que padecieron al saber que su ser querido fue torturado, estuvo preso por un tiempo exagerando, siendo además inocente, y al

verlo en deficientes condiciones de salud por las penosas condiciones a las que se vio sometido.

464. Con base en estas conclusiones, solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado ecuatoriano debe adoptar todas las medidas pecuniarias y no pecuniarias necesarias para reparar a la víctima y sus familiares, las cuales se indicaron en esta demanda. Asimismo, solicitamos que se reintegre los gastos y costas en los que ha incurrido la víctima y sus representantes tanto en el procedimiento interno como en el seguido ante los órganos internacionales,

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestras muestras de la más alta consideración y estima.

Viviana Krsticevic
CEJIL

Juan Carlos Gutiérrez
CEJIL/MESOAMERICA

Oswaldo Ruiz Chiriboga
CEJIL/MESOAMÉRICA

Farith Simon
CLÍNICA DDHH-PUCE